



FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**“EL PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA
PROCESAL: UNA PROPUESTA EPISTÉMICA DE
ESTRUCTURACIÓN”**

Tesis presentada por el Bachiller en Derecho:

Juan Manuel Corrales Ramos.

Para optar el título profesional de Abogado

Asesor: Mg. César Ibarra Valdivia.

AREQUIPA, 2017

A mis padres y hermanos por el apoyo incondicional, a Jorge Guillermo Manrique Zegarra y su lucidez jurídica y a Eliana compañera de todos mis viajes.

“Este es mi sueño: una plena anarquía de hombres ilustrados y libres que se autorregulan y conviven en paz y son justos por naturaleza.”

C. Hildebrandt Pérez-Treviño. *Una piedra en el zapato (Columnas de opinión, 2006-2011)*. Editorial Tierra Nueva, Perú – Iquitos, 2011, 1ª ed; p. 13.

ÍNDICE

CARÁTULA.....	
DEDICATORIA.....	
EPÍGRAFE.....	
RESUMEN.....	
INTRODUCCIÓN.....	

CAPÍTULO I

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL MEXICANO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE

1. El principio mexicano de suplencia de la queja	
2. deficiente.....	11
2.1. Concepto.....	11
2.2. Características del principio de suplencia de la queja deficiente.....	24
2.3. Alcances del principio de suplencia de la queja deficiente.....	26
2.3.1. Suplencia del error.....	28
2.3.2. Suplencia de la queja deficiente en sentido estricto.....	31
2.3.3. Suplencia de los agravios formulados en los recursos.....	32
2.4. Limites del principio de suplencia de la queja deficiente.....	33

CAPÍTULO II

EL PRINCIPIO PROCESAL CONSTITUCIONAL DEL IURA NOVIT CURIA. UNA REFLEXIÓN DESDE LA NORMA, LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO.

1. El principio de Iura Novit Curia.....	36
1.1. Concepto.....	36
1.2. Alcances del principio de Iura Novit Curia.....	41
1.3. Limites del principio de Iura Novit Curia.....	44

1.3.1. El principio de congruencia y el iura novit curia.....	47
1.3.2. El Derecho a la defensa – contradictorio y el iura novit curia.....	51

CAPÍTULO III

EI PRINCIPIO PROCESAL CONSTITUCIONAL DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA PROCESAL.

REFLEXIONES DESDE LA NORMA, LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO EN BUSCA DE UNA PROPUESTA EPISTÉMICA DE ESTRUCTURACIÓN.

1. El principio de suplencia de la deficiencia procesal.....	57
1.1. Concepto.	57
1.2. Alcances del principio de suplencia de la deficiencia procesal.....	73
1.2.1. Los actos procesales viciados.....	79
1.2.1.1. Los actos defectuosos.....	79
1.2.1.2. Los actos inválidos.....	80
1.2.1.3. Los actos nulos.....	80
1.3. Límites al principio de suplencia de la deficiencia procesal.....	80
1.4. El principio de suplencia de la deficiencia procesal y su relación con la suplencia de la queja deficiente, el iura novit curia y los demás principios del derecho procesal constitucional.....	88
1.4.1. El principio de suplencia de la deficiencia procesal y la suplencia de la queja deficiente.....	88
1.4.2. El principio de suplencia de la deficiencia procesal y el iura novit curia.....	90
1.4.3. El principio de suplencia de la deficiencia procesal y los demás principios del derecho procesal constitucional.....	92
1.5. La conversión procesal una condición particular del principio de suplencia de la deficiencia procesal.....	99
1.5.1. Concepto.....	99
1.5.2. Reglas para la aplicación de la figura de la conversión procesal.....	105

1.5.3. Criterios que sustentan la figura de la conversión procesal.....	109
1.5.4. Algunos casos en los que se aplicó la figura de la conversión procesal.....	114
1.6. La suplencia de la deficiencia procesal una propuesta epistémica de estructuración.....	121
CONCLUSIONES.....	130
BIBLIOGRAFÍA.....	134

RESUMEN

Frente a la ambigüedad que suponía la estructura jurídica del principio de suplencia de la deficiencia procesal, y ante la enmarañada teoría que intentaba explicar en medio del caos del argumento, sobre sus vínculos con la suplencia de la queja deficiente, el iura novit curia y demás principios del proceso constitucional, es que se ha procurado desarrollar, a partir de la norma, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, una propuesta que busca esclarecer el concepto, los alcances, y límites que rigen su origen, su composición, sus facultades y los fundamentos jurídicos que avalan su viabilidad y vigencia implícita. Finalmente se concluye que la suplencia de la deficiencia procesal goza de una particular y especial condición jurídica, que no sólo le permite actuar a nivel del petitorio, subsanando el derecho que por error, omisión o ignorancia fue deficientemente invocado, sino que también; cuenta con la facultad de convertir un proceso constitucional en otro, cuando la incompetencia procesal así se lo exija.

INTRODUCCIÓN

Actualmente; nuestro escenario jurídico nos presenta varias cuestiones por resolver, una de ellas es el uso indistinto e indeterminado que la doctrina y la jurisprudencia hace del principio de suplencia de la queja deficiente, del principio iura novit curia y del principio de suplencia de la deficiencia procesal. Cuando el saber correcto, implica tener claro que todas ellas son distintas, en sus conceptos, alcances y límites.

Pero especialmente; es la suplencia de la deficiencia procesal y cuestiones relacionadas a su origen, vigencia y estructura las que se encuentran ligadas a una serie de criterios o reflexiones que bordean con mayor naturalidad lo que en principio serían juicios ambiguos y en el peor de los casos equivocados. Lo que sucede, es que hasta el momento; la jurisprudencia emitida por nuestro Tribunal Constitucional se ha mostrado contradictoria, imprecisa, confundida; y por otro lado, el aporte de la doctrina como conocimiento especializado aún es opaco, discordante y limitado. Por lo que todavía, en relación a éste tema, hay muchas cuestiones por resolver.

Entonces; en el contexto que acabamos de precisar, se han generado una serie de problemas que merecen ser resueltos por medio de una adecuada y coherente interpretación de la norma, la jurisprudencia y la doctrina, además de un balance correcto de los fundamentos que la trascienden, las necesidades reales que la exigen y el juicio crítico que acompaña a todos estos intereses, las que seguramente nos van a permitir encontrar en la suplencia de la deficiencia procesal, una respuesta coherente a muchos problemas jurídicos que nos aquejan. Es que la distinción clara y precisa de las características estructurales del principio de suplencia de la deficiencia procesal, nos van a permitir gozar de nuevos aires jurídicos, que no sólo tendrán que ver con contar con un elemento procesal bien definido, bastante conocido y correctamente utilizado, sino; que podremos disfrutar como reflejo inmediato de lo anterior, de condiciones, en términos de justicia, bastante favorables.

Nuestra hipótesis afirma que: la correcta aplicación del principio de suplencia de la deficiencia procesal, depende del pleno conocimiento que se tenga de ella, y que por esta razón, su uso en los procesos constitucionales aun es limitado, inadecuado y controvertido.

Sin embargo; es probable ofrecer una respuesta a partir de la norma, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que procure la concretización de nuestro objetivo, que es la de determinar el concepto, alcances y límites del principio de suplencia de la

deficiencia procesal. Lo que implicaría un pleno conocimiento de su estructura, del vínculo que rige su particular condición y relación frente a los demás principios del proceso constitucional y como se fundamenta su vigencia y viabilidad jurídica. Además; cultivar este mecanismo procesal, garantiza el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, así como velar por la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Esta novedosa forma de entender a la suplencia de la deficiencia procesal, nos permite formular una propuesta de estructuración, que basada en conocimiento, sea capaz de relacionarla, diferenciarla, pero sobretodo individualizarla frente a la suplencia de la queja deficiente, al iura novit curia y demás principios del proceso constitucional, de quienes también despejaremos dudas respecto a cuestiones fundamentales sobre sus orígenes, estructuras y capacidades.

El método de investigación que hemos utilizado, es el dogmático. La cuestión radica, en que concebimos nuestro problema, desde una perspectiva jurídica estrictamente formal y sustancial. A pesar de que el método dogmatico es esencialmente un trabajo de orden lógico, porque parte del supuesto de que las normas jurídicas son el producto de una elaboración conceptual, y, como tales, han de reconstruirse y entenderse, éste método alcanza un mayor rigor teórico, porque apela además, a la doctrina y de manera especial a la jurisprudencia, quienes jugarán un papel fundamental al tratar de encontrar respuesta a las cuestiones que nos hemos planteado. Es que la investigación dogmatica, en términos teóricos ayuda al intérprete a entender los institutos jurídicos, y en términos prácticos hace posible la explicación de las normas del modo más adecuado. Entonces; para determinar la naturaleza jurídica y las características propias del principio de suplencia de la deficiencia procesal, del iura novit curia y de la suplencia de la queja deficiente hemos utilizado sólo consideraciones plenamente jurídicas (todas las fuentes del derecho), excluyendo a todo elemento que no sea puramente formal, es decir; sin apelar a miramientos de carácter ético, político, sociológico o ideológico.

Por esta razón, hemos tenido a bien desarrollar tres capítulos que pretenden dar respuesta a la naturaleza y a los vínculos que rigen a estos tres principios. En el primer capítulo; haremos referencia al principio de suplencia de la queja deficiente, donde detallaremos sus orígenes, su estructura, los elementos que la caracterizan, sus alcances y la improcedencia como su único y principal límite, con el objeto de alcanzar una mirada lúcida sobre su particular condición estructural. En el segundo capítulo; se desarrollará el principio iura novit curia, con el

propósito de concebir la delimitación de su concepto, alcances y límites. Veremos si el principio de congruencia o el derecho constitucional a la defensa, constituyen un límite jurídicamente válido para éste principio. Y en el tercer capítulo; trataremos sobre el núcleo mismo de nuestra investigación, el principio de suplencia de la deficiencia procesal. Donde nos ocuparemos de sus facultades, de la modificación del petitorio como uno de sus alcances, de sus límites, de su relación con la suplencia de la queja deficiente, con el iura novit curia y demás principios del proceso constitucional; de la conversión procesal como su condición especial y nos atreveremos a plantear una propuesta epistémica de estructuración.

Finalmente; a lo largo de todos estos capítulos, nos hemos preocupado en reflejar de la manera más genuina posible, la diversidad de teorías que en la doctrina y la jurisprudencia se han ido gestando en relación a la suplencia de la queja deficiente, al iura novit curia y a la suplencia de la deficiencia procesal. Con el propósito de sentenciar su naturaleza, sus facultades, el vínculo que existe entre ellas y los fundamentos que respaldan su vigencia y viabilidad.

CAPÍTULO I

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL MEXICANO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE

1. El principio mexicano de suplencia de la queja deficiente.

1.1. Concepto.

En la doctrina mexicana existe una atizada controversia sobre los antecedentes de la suplencia de la queja deficiente. Los desacuerdos pasan por varios factores, uno de ellos es lograr determinar cuál es el primer dispositivo legal que hace referencia a la suplencia de la queja deficiente. Lo que no sólo nos va a permitir descubrir sus orígenes, sino también comprender su evolución y seguramente su estructura conceptual.

Es así que, Edgar Carpio siguiendo a Fernando De Vega considera que el antecedente de dicho principio se encuentra en el artículo 42 de la Ley Orgánica de 1882, reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, a tenor del cual se establecía que *“La Suprema Corte y los Juzgados de Distrito, en sus sentencias, pueden suplir el error o la ignorancia de la parte agraviada, otorgando el amparo por la garantía cuya violación aparezca comprobada en autos aunque no se haya mencionado en la demanda.”*¹ Para Gerardo Eto Cruz, son de similar criterio Alfredo Gutiérrez Quintanilla y Alfonso Noriega, éste último afirma que es en la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, promulgada en 1882, en la que aparece por primera vez una institución que permite la suplencia o corrección del error, que sin duda, fue la precursora de la suplencia de la queja deficiente.²

Sin embargo, nosotros consideramos que lo que se señala en el artículo 42 de la Ley Orgánica de 1882, reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, es más una versión mal orientada, extraña o incompleta de la suplencia de error que de la suplencia de la queja deficiente, y que ni en ella ni en las leyes orgánicas de amparo de 1861, 1869, 1857 y 1882 se encuentran vestigios claros

¹ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo: Un Análisis Comparativo”, en S. CASTAÑEDA OTSU (Coord.), *Derecho Procesal Constitucional. Tomo II*, Jurista Editores, Lima, 2004, p. 698.

² G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II*, Gaceta Jurídica, Lima, 2013, pp.9-10.

sobre la suplencia de la queja deficiente, como tampoco en los Códigos de Procedimientos federales o civiles de 1897 y 1908 respectivamente. También existen otros criterios en el texto de Edgar Carpio, como los de Armando Chávez Camacho, quien señala que la suplencia de la queja no tiene historia, como sucede con las damas decentes y con los pueblos felices, o como los de Juventino Castro quien dice que la suplencia de la queja deficiente nació súbita e inexplicablemente en la Constitución de 1917, sin indicios de su fundamentación histórica o doctrinaria.³ A pesar de que éste último postulado tenga algo más de sentido por la fecha que se indica en ella, ambos son criterios que tampoco compartimos, porque el pasado y la historia le dan sentido y razón a las cosas, lo que jurídicamente se traduciría en la utilidad o propósito que justifique el nacimiento de la suplencia de la queja deficiente.

Ante tal imprecisión, el criterio jurídico que manejamos ha preferido orientarse en la idea de que el desarrollo de la suplencia de la queja deficiente es como a continuación se señala.

El trajín de la historia constitucional del pueblo mexicano, se traduce de manera estricta en: la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la Constitución Centralista o de las siete leyes de 1835, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y finalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Precisamente; cuando entra en vigencia la primera versión de la última Carta Magna mexicana, el 5 de febrero de 1917; es que bajo condiciones y necesidades jurídico-sociales aparentes, o que por lo menos nosotros intentaremos precisar, la suplencia de la queja deficiente, bajo un criterio realmente novedoso, se hace presente en el espectro jurídico mexicano. Así mismo, Juventino Castro afirma que no ha llegado a encontrar un texto legal, nacional o extranjero, que en forma directa la anteceda, o principios jurídicos previos que la fundamenten, por lo que es preciso concluir que el Constituyente mexicano de 1917 es el creador de la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo.⁴

Por lo que el primer razonamiento jurídico sobre la suplencia de la queja deficiente, se aloja en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 de la

³ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,”cit., p. 698.

⁴ J. CASTRO Y CASTRO, *Justicia, Legalidad y la Suplencia de la Queja*, Porrúa, México, 2003, p.3.

Constitución de 1917, y fue la siguiente: “... *La Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación.*”⁵

Entonces; a pesar de que “*la sentencia (...) sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja...*”⁶, la Suprema Corte mexicana, sólo en los juicios penales, ante la torpeza de dejar al quejoso sin defensa o haberlo juzgado por una ley que no es aplicable a su caso, cometándose una transgresión clara de la ley, al negarse la posibilidad de subsanar la violación del derecho en juego, será posible aplicar la suplencia de la queja deficiente como remedio inmediato ante tal condición. Gerardo Eto Cruz hace una reflexión sobre una de las particularidades de este dispositivo constitucional y dice: consideramos que las razones que movieron al constituyente mexicano (aunque no exista prueba de ello) para establecer la exclusividad del uso de la suplencia de la queja deficiente en materia penal parten, de un lado, de ese fin proteccionista de los bienes jurídicos relevantes que justamente persiguen al proceso penal, (y que son de naturaleza fundamentalista, tales como, la libertad, la vida, entre otros) y, de otro, la ausencia de formalismos en ese tipo de proceso y que, por el contrario, constituye requisito indispensable para los demás procesos ordinarios.⁷ Más allá de esto; señala Alfredo Martínez López en Gerardo Eto Cruz, ni del Diario de Debates del Congreso Constituyente mexicano que aprobó la Constitución de 1917, donde se discute la cláusula constitucional que incorpora la figura de la suplencia de la queja deficiente, se advierte una exposición donde se justifique las razones de su inclusión.⁸ Sin embargo, nosotros creemos que las razones fueron un reflejo natural del valor preeminente que se le empezó a dar a los derechos fundamentales además de la adecuación procesal (bajo ciertos juicios de flexibilidad formal) a criterios más relevantes como la protección o reivindicación de los derechos transgredidos lo que generó dejar un poco de lado los ritualismos procesales.

⁵ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Fracción II.

⁶ *Ibíd.*

⁷ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II...*, cit., pp.13-14.

⁸ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II...*, cit., p. 14.

Así fue el inicio de esta noble figura jurídica, que con el tiempo sufriría algunas reformas y reglamentaciones que le permitirían enriquecer su estructura y ampliar sus horizontes.

El 19 de febrero de 1951 se llevó a cabo la primera reforma de la Constitución Política de 1917, donde el artículo 107 fracción II párrafo tercero y cuarto relacionado a la suplencia de la queja deficiente, señalaban lo siguiente: *“podrá suplirse la deficiencia de la queja, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.*

*Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en materia penal y la de la parte obrera en materia de trabajo, cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado, una violación manifiesta de la ley, que la ha dejado sin defensa, y en materia penal, además, cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso.”*⁹

Con esta disposición algunas cuestiones nuevas salieron a relucir, ahora la suplencia de la queja deficiente podía ser utilizada, cuando el acto que se demandaba, estaba sustentado por leyes que la jurisprudencia había declarado como inconstitucionales, y que además, ya no sólo sería aplicable en materia penal sino también en temas laborales. Pero además, la suplencia de la deficiencia de la queja será puesta en práctica en materia penal, no sólo cuando el agraviado sufra una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, sino que además, y de manera exclusiva, cuando sea juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso.

Luego; el 2 de noviembre de 1962 se emite un Decreto por el que se adiciona con un párrafo final la fracción II del artículo 107 Constitucional que ha a la letra dice así: *“En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a las ejidatarios y comuneros, deberá suplir la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria; y no procederán el desistimiento, el sobreseimiento por inactividad, ni la caducidad de la*

⁹ Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, (Lunes 15 de febrero de 1951). [Documento en formato PDF]. Recuperado el 7 de marzo del 2015. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

instancia, cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de población comunal.”¹⁰

Entonces; lo que este párrafo adicional trata de decir es que, se establecerá la obligación de suplir la deficiencia de la queja, en los juicios de amparo en que se afecten los derechos de propiedad, posesión o disfrute de tierras y aguas que pertenezcan a comuneros que por historia, en todos los países, han devenido en ser siempre población vulnerable. También se precisa; que en estos mismos juicios no procederán el desistimiento, el sobreseimiento por inactividad, ni la caducidad de la instancia. Por la que esta es una reforma clara a favor de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agraria.

Pasaron los años y el 20 de marzo de 1974, se tomó la decisión de agregar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción II del artículo 107 lo siguiente: *“Podrá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten derechos de menores o incapaces...”*¹¹

Como podemos observar la aplicación de la suplencia de la queja deficiente se vuelve más sensible ante las desigualdades y necesidades jurídicas que cierto sector de la población, también, sumamente vulnerable, padecía en el fuero judicial.

De igual forma; el 7 de abril de 1986 se logra reformar la fracción II del artículo 107 cuyo texto queda establecido de la siguiente manera: *“... En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución...”*¹²

Como se puede observar, la novedad que introduce el legislador mexicano por medio de este Decreto es que se deja a consideración de lo establecido en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los criterios de aplicación de la suplencia de la queja deficiente. De igual forma; no se dejan en desamparo los derechos de propiedad, posesión y disfrute de las tierras y agua de los núcleos de población que guarden el estado

¹⁰ Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. (Viernes 2 de noviembre de 1962). [Documento en formato PDF]. Recuperado el 7 de marzo del 2015. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

¹¹ Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. (Miércoles 20 de marzo de 1974). [Documento en formato PDF]. Recuperado el 7 de marzo del 2015. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

¹² Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. (Lunes 7 de abril de 1986). [Documento en formato PDF]. Recuperado el 7 de marzo del 2015. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

comunal, esta vez, además, obligando a los órganos jurisdiccionales en materia de amparo a recabar de oficio todas las pruebas que puedan beneficiar a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios.

Finalmente; el 6 de junio del 2011 se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 107. Debemos mencionar, que el texto que se dispuso en aquella ocasión, respecto a la suplencia de la queja deficiente, es la misma que podemos observar hoy en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 cuyo texto vigente obedece a la última reforma publicada el 29 de Enero de 2016. Motivo por el cual; y obedeciendo a ciertos criterios prácticos, mencionaremos solamente los aspectos más importantes del II párrafo del artículo 107, y cuyo contenido es el siguiente: *“Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado (...) En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo a lo que disponga la ley reglamentaria...”*^{13 & 14}

Con el propósito de generar una visión lo suficientemente transparente sobre la suplencia de la queja deficiente, el panorama legal nos obliga a tomar como premisa lo suscrito en las últimas líneas del párrafo anterior. Es así que la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2 de abril de 2013, y cuyo texto vigente data del 18 de diciembre de 2015, nos describe en su artículo 76 lo siguiente: *“el órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que se advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.”*¹⁵

¹³ Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. (Lunes 6 de junio de 2011). [Documento en formato PDF]. Recuperado el 7 de marzo del 2015. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

¹⁴ La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 sujeta a su última reforma del 29 de enero de 2016 [Documento en formato PDF]. Recuperado el 10 de enero de 2016. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>

¹⁵ Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2 de abril de 2013 sujeta a su última reforma del 18 de diciembre de 2015. Artículo 76. [Documento en formato PDF]. Recuperado el 10 de enero de 2016. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm>

El artículo en mención, y esto bajo nuestro criterio, guarda en sus primeras líneas una proximidad conceptual a la suplencia de error. Nuestro análisis se desprende, del error u omisión en la que puede caer el demandante al exigir o por el contrario no exigir la reivindicación de alguna norma constitucional o legal de la que se piense o se sienta vulnerado.

Sin embargo, en la segunda parte de este mismo articulado se genera la posibilidad de hacer un análisis global de todos los conceptos de violación o agravio que se pueda desprender del caso en particular, así como un abanico de razones lógicas por las que el razonamiento de las partes en el planteamiento de la demanda padezca de algún defecto. Sentimos que es en este punto, de manera estricta, donde la suplencia de la queja deficiente juega su papel, es decir, a nivel de la pretensión en general.

Bajo el criterio de la misma disposición legal, pero esta vez en su artículo 79 se determina cuales son los casos en que la autoridad que conozca de un juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios.

Los casos que se contemplan son los siguientes:

I. *“En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales...”*

II. *En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia.*

III. *En materia penal: En favor del inculcado o sentenciado, y en favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente.*

IV. *En materia agraria: En los casos a los que se refiera la fracción III del artículo 17 de esta Ley, la misma que señala, “el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo (...) cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios*

mencionados”¹⁶ (...). Así mismo, a favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios.

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre el empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo.

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada.

Es importante mencionar que el artículo 1 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

“el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Por normas generales, actos u omisiones de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal,

¹⁶ Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2 de abril de 2013 sujeta a su última reforma del 18 de diciembre de 2015. Fracción III del Artículo 17. [Documento en formato PDF]. Recuperado el 10 de enero de 2016. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>

siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.”¹⁷

Continuando con el artículo 79 Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial que conozca de un juicio de amparo, también deberá aplicar, cuando sea necesario, la suplencia de la queja deficiente:

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.”¹⁸

Al hacer el análisis de este último criterio normativo, se nos revelan algunas cuestiones bastante importantes. Primero: la gama de materias en las que la suplencia de la queja deficiente puede ser aplicada (penal, laboral, agraria) o en cualquier materia siempre que el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales o que haya una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa ante la violación de los derechos humanos, la restricción de la soberanía de los Estados o el quebrantamiento de las garantías otorgadas por la Constitución. Segundo: que su aplicación no sólo es una gracia que se restringe al quejoso (menores o incapaces, ofendido o víctima, ejidatarios o comuneros en particular, al trabajador o aquel que vive en condiciones de pobreza o marginación) sino que también, y esto de manera exclusiva en materia penal, al inculpado o sentenciado. Tercero: que la suplencia de la queja deficiente es esencialmente un

¹⁷ Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2 de abril de 2013 sujeta a su última reforma del 18 de diciembre de 2015. Artículo 1. [Documento en formato PDF]. Recuperado el 10 de enero de 2016. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>

¹⁸ Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2 de abril de 2013 sujeta a su última reforma del 18 de diciembre de 2015. Artículo 79. [Documento en formato PDF]. Recuperado el 10 de enero de 2016. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>

remedio de fondo, que solamente es aplicable a temas de forma, cuando no subyace en ella un problema de hondo cuestionamiento.

Después de este recorrido histórico-normativo de la suplencia de la queja deficiente, se hace necesario exponer algunos criterios conceptuales que se manejan en la doctrina.

Para empezar; consideramos importante hacer una reflexión general, de ciertos aspectos concretos de la realidad, que pudieron dar pie para el nacimiento de la suplencia de la queja deficiente. En Gerardo Eto Cruz, Juventino Castro escribe sobre las posibles motivaciones que llevaron a la creación de esta figura, el autor señala: unos fueron por motivos políticos, como una reacción contra las persecuciones a opositores, a quienes frecuentemente se les acusaba de supuestos delitos para alejarlos de sus actividades públicas, quienes recurrían a defensores improvisados que interponían demandas de amparo deficientes, que por ello no prosperaban. Otra motivación fue la tendencia de los tratadistas y de la jurisprudencia, encaminada a eliminar el rigorismo jurídico, cuando se trataba de la vida y la libertad.¹⁹ Sin embargo, nosotros creemos que los que están en juego son todos los derechos fundamentales. Otro criterio aceptable, era el de eliminar el camino del facilismo legal, que albergaba la labor jurídica del legislador. De igual forma, la necesidad del ciudadano, de observar un interés real en la justicia de su país por proteger o velar por sus derechos. Y así se podríamos enumerar algunos factores más, que dan cimiento real a la presencia de la figura de la suplencia de la queja deficiente en el ordenamiento jurídico mexicano.

Pero haciendo un análisis más estricto de la figura que estamos estudiando, en la doctrina se ha creído conveniente aclarar, cuál debe ser la correcta alocución empleada, para designar a este instituto. Para Gerardo Eto Cruz, la aceptación del verbo “suplir” está ligada a la tarea de completar o integrar, vale decir, a remediar una carencia, por lo que en este caso lo que se va a completar o integrar es la queja, o mejor dicho, la demanda. Y, por su parte, y esto citando a Ignacio Burgoa, el término “deficiente” no significa omisión sino que supone la ausencia o falta de algo, es decir, una cosa es deficiente porque está incompleta; por tanto, deficiente no puede ser igual que omitir ya que el verbo omitir alude a la inacción, es decir a dejar de hacer algo.

¹⁹ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II...*, cit., p.11.

(...) suplir la deficiencia de la queja entraña suplir la deficiencia de la demanda de garantías. La idea de “deficiencia” tiene dos acepciones: la falta o carencia de algo y la imperfección. Por ende, suplir una deficiencia es integrar lo que falta, remediar una carencia o subsanar una imperfección, es decir, completar o perfeccionar lo que está incompleto o imperfecto. En tal sentido la expresión más idónea a utilizar es suplencia de la queja deficiente.²⁰ Habría que preguntarle al autor si ¿Acaso la deficiencia que es carencia o falta de algo no puede generarse por un no hacer?, nosotros creemos que sí. Nuestro criterio respalda lo señalado en el libro de Edgar Carpio, donde Ignacio Burgoa (1999) afirma que, “el concepto queja (...) equivale al de demanda de amparo, de donde se colige (...) que suplir la deficiencia de la queja entraña suplir la deficiencia de la demanda de garantías.” Tal suplencia (...) “puede ser deficiente... por omisión (falta o carencia) o por imperfección, de donde se infiere que suplir su deficiencia significa colmar las omisiones en que haya incurrido o perfeccionarla, esto es, completarla”.²¹

Finalmente, veamos algunas de las innumerables posturas que se vierten sobre las cualidades que podrían llegar a conceptualizar a la suplencia de la queja deficiente:

En Edgar Carpio, Alfonso Trueba Urbina señala que si la suplencia de la queja deficiente es una facultad otorgada a los jueces para imponer, en ciertos casos, el restablecimiento del derecho violado sin que el actor o quejoso haya reclamado de modo expreso la violación, entonces, ella está vinculada a aquel capítulo de la teoría general del proceso en torno a la extensión y límites del poder de los jueces y a los principios a los que se encuentra sujeto el proceso. Para Héctor Fix-Zamudio es evidente que cuando surgió la suplencia de la queja deficiente, ésta se construyó de espaldas a la entonces joven corriente científica del derecho procesal; es decir, como un medio que, con independencia de las formas, asegurara una efectiva protección de los derechos constitucionales del afectado.²² De similar criterio es Samuel Abad Yupanqui, para quien la suplencia de la queja deficiente permite una activa participación del juzgador quien de percatarse que la demanda es deficiente deberá

²⁰ Ibídem, pp. 7-8.

²¹ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.700.

²² Ibídem, p.699.

enmendar el error. Con ello se pretende que el juez de amparo subsane las deficiencias u omisiones presentadas y evite declarar constantes nulidades procesales.²³

Para Ignacio Burgoa, suplir la deficiencia de la queja implica no ceñirse a los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, sino que, para conceder al quejoso la protección federal, el órgano de control puede hacer valer oficiosamente cualquier aspecto inconstitucional de los actos reclamados.^{24, 25 & 26}

Por su parte, Héctor Fix-Zamudio, afirma que la suplencia de la queja deficiente consiste en la corrección por el juez del amparo, de las omisiones, errores o deficiencias en que hubiese incurrido el promovente al formular su demanda, protegiendo a la parte débil en el proceso y evitando la aplicación de leyes inconstitucionales.^{27 & 28}

Ayala Santos, precisa que la suplencia de la queja es una figura procesal del juicio de amparo, con fundamento en la Constitución; que asume un carácter proteccionista, antiformalista y discrecional; que debe estimarse como excepcionalmente obligatoria, y que faculta a los tribunales de amparo para integrar las omisiones totales o parciales de los conceptos de violación o de los agravios y para subsanar los errores en que incurre el quejoso al expresarlos, así como de aquellos actos procesales que la ley permite, siempre a favor y nunca en perjuicio del quejoso, en la forma y términos que señala la ley de la materia.^{29 & 30}

Por otro lado; Fenochieto-Arazi señala, que el juez debe calificar los hechos expuestos por las partes y la relación sustancial, prescindiendo de la calificación efectuada por los litigantes. Debe determinar la causa petendi y siempre que no se aparte de los hechos afirmados ni modifique su objeto, puede otorgar lo pedido sobre la base de una calificación de la causa distinta a la que hicieron las partes.³¹

Gerardo Eto Cruz, afirma que en la suplencia de la queja deficiente el concepto está totalmente omitido o imperfectamente desarrollado; o la cita de la

²³ S. ABAD YUPANQUI, *El Proceso Constitucional de Amparo*, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, 2ª ed., p.189.

²⁴ I. BURGOA ORIHUELA, *El Juicio de Amparo*. Porrúa, México, 1999, 35ª edición., p.300.

²⁵ STC Exp. N° 05761-2009-HC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 17.

²⁶ C.SENISSE ANAMPA, “El principio de suplencia de queja deficiente”, en *Gaceta Procesal Constitucional*, N° 21, Lima, 2013, p.19.

²⁷ H. FIX-ZAMUDIO, *El Juicio de Amparo*, Porrúa, México, 1963, p. 403.

²⁸ STC Exp. N° 05761-2009-HC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 17.

²⁹ G.SANTO AYALA, “La Suplencia de la deficiencia de la Queja en materia de Amparo”. en *Anales de Jurisprudencia. Tomo 141*, México, 1970.

³⁰ STC Exp. N° 05761-2009-HC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 17.

³¹ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II*, cit., p. 17.

garantía constitucional violada puede faltar totalmente. Al suplirse la queja deficiente se construye total o parcialmente el concepto que no aparece en la demanda. La suplencia del error se debe a una imperfección de estilo; la suplencia de la queja deficiente a una imperfección de fondo. En la primera existe concepto de violación, en la segunda falta total o parcialmente, y siempre constituye omisión.³²

Como se puede observar, los criterios que se manejan en la doctrina no son uniformes. Los esfuerzos conceptuales, parecen verse mutilados, contradictorios e imprecisos. Estas son las razones que nos motivan a formular una imagen más ordenada y clara de la suplencia de la queja deficiente.

Entonces; la suplencia de la queja deficiente es una figura jurídica que faculta al juez de amparo a subsanar la violación o agravio de algún derecho que por error u omisión, nunca se solicitó su reivindicación, o si se hizo, seguramente adolecería de serias deficiencias al momento de ser consagrado en los fundamentos de derecho. Estas ausencias o carencias que el error o la omisión podían generar, también eran susceptibles de producirse a nivel del petitorio. En ambos casos, el juez estaría en la obligación de corregirlas. Por lo que hará valer oficiosamente cualquier aspecto inconstitucional de los actos reclamados, con el objeto de proteger los derechos reconocidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo que reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se vean vulnerados.

Como se habrá podido observar, nosotros creemos que la presencia de la suplencia de la queja deficiente es a nivel de toda la pretensión (suplencia de error y suplencia de la queja deficiente en sentido estricto), exceptuando a los fundamentos de hecho que se mantienen inmaculados frente al poder del juez. Pero también el juez de amparo tiene la posibilidad de aplicar la suplencia de la queja deficiente a nivel de los recursos impugnatorios (suplencia de los agravios formulados en los recursos).

No olvidemos que la suplencia de la queja deficiente es un instituto jurídico básicamente de orden constitucional. Aplicable en distintas materias, lo que parcializará el ejercicio de sus facultades en los distintos niveles del proceso, además

³² G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo I*, cit., p. 18.

tendrá influencia en el sujeto procesal que se verá beneficiado y que no siempre será el quejoso.

Es de carácter obligatorio, proteccionista y antiformalista, siempre que concurren las condiciones establecidas por ley.

Cuando sea necesaria su participación puede ser a nivel de la forma, pero si existe un cuestionamiento a nivel de fondo, los criterios formales no podrán operar, bajo el análisis de que siempre es preferible la protección de un derecho fundamental a las meras cuestiones de forma. Esto último también en conformidad con el artículo 189 de la Ley de Amparo que reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se estipula: “...*En todas las materias, se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso...*”.

1.2. Características del principio de suplencia de la queja deficiente.

Edgar Carpio Marcos ha señalado algunas cualidades que identificarían a la suplencia de la queja deficiente en sentido estricto, y al ser éste un componente de la suplencia de la queja deficiente, hemos tenido a bien considerarlo dentro de este acápite.

Para Edgar Carpio las principales características de este principio son:³³

- Que constituye una excepción al principio de congruencia de las sentencias, pues el Juez del Amparo se encuentra autorizado para expedir un pronunciamiento más allá de los términos en los que se haya planteado la demanda.
- Es una atribución que el juez debe realizar de manera obligatoria, si bien originalmente se la concibió sólo como facultativa.
- Se trata de un principio procesal de carácter proteccionista, es decir, cuya aplicación sólo debe realizarse a favor del agraviado y nunca en su contra.
- Es de carácter antiformalista, pues mediante su aplicación, el juez del Amparo está en la obligación de dispensarle tutela a los derechos

³³ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.702.

constitucionales más allá de los requerimientos formales que imponen las reglas del proceso.

Todas estas características son confirmadas y aceptadas por García Chávarri, cuyo aporte se hace notar cuando hace referencia a la última de las cualidades descritas por Edgar Carpio Marcos. Dice Abrahán García Chávarri, la suplencia de la queja deficiente “...es (como los procesos constitucionales) de naturaleza antiformalista”.³⁴

De igual forma, Juventino Castro y Héctor Fix-Zamudio señalan que es unánime en considerar que se trata de una institución procesal constitucional de carácter proteccionista y antiformalista (...), que integra las omisiones parciales o totales de la demanda de amparo presentada por el quejoso, siempre a favor y nunca en perjuicio de éste....³⁵

Para Alfonso Noriega, la suplencia de la queja es una institución de carácter proteccionista porque siempre opera a favor del quejoso que ha incurrido en una omisión o imperfección en la formulación de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, y aun ante la ausencia total de estos últimos. Es también de carácter antiformalista porque se refleja como una verdadera excepción al principio general de estricto derecho, según el cual, el organismo de control debe dictar el fallo correspondiente, ciñéndose a los términos planteados en los conceptos de violación, tal y como hubieran sido formulados en la demanda de amparo.³⁶

Como se puede notar, todos los autores que acabamos de mencionar coinciden con todas las cualidades que mejor describen a la suplencia de la queja deficiente.

Se confirma su condición de principio, al que nosotros debemos agregar que no es cualquier principio, sino, uno de orden constitucional. Es además una excepción al principio de congruencia, porque lo que se busca es dar lo que verdaderamente le es debido al sujeto vulnerado en sus derechos, es decir, hacer justicia, al margen de si el

³⁴ A. GARCÍA CHÁVARRI, “La Transformación de un Proceso Constitucional en Otro. Anotaciones sobre la Figura Procesal Constitucional de la Reconversión.” en: J. SOSA SACIO (Coord.), *Compendio de Instituciones Procesales creadas por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Gaceta Jurídica, Lima, 2012, p. 42.

³⁵ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.700.

³⁶ A. NORIEGA CANTÚ, *Lecciones de Amparo. Tomo II*, Porrúa, México, 1997, p. 808.

derecho fue incorrectamente requerido u omitido total o parcialmente, por eso es que esta institución jurídica procesal rige la conducta del juzgador al momento de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es decir, sobre el fondo de la controversia. Es proteccionista, pero sólo en la medida en que está concebida para actuar a favor y nunca en contra. Respecto de si sólo actúa a favor del quejoso, tenemos claro que no es así, la norma nos demuestra que también actúa a favor del demandado, pero sólo en temas relacionados al derecho penal. Finalmente, es antiformalista y de obligatorio cumplimiento para el juez, porque ni las formas procesales establecidas ni la discrecionalidad del juez valen tanto como la protección de los derechos fundamentales que subyacen al proceso.

1.3. Alcances del principio de suplencia de la queja deficiente.

En este apartado haremos mención a dos puntos muy importantes. A la posibilidad que tiene el principio de suplencia de la queja deficiente de ir más allá de lo permitido por el principio de congruencia, y a la gama de posibilidades que tiene de poder actuar dentro del desarrollo del proceso.

Entonces; en el primer punto, la suplencia de la queja deficiente constituye una excepción al principio de congruencia, porque según la tesis N° 49/1996 citada por Edgar Carpio, el Tribunal Supremo señala que la suplencia de la deficiencia de la queja se aparta del principio de estricto derecho (que en México es la denominación que se le da al principio de congruencia de las sentencias), permitiendo al juzgador llegar, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso. Esto ha generado ciertos reparos como los que aduce Luis Bazdresch a los cuales Edgar Carpio Marcos hace referencia en los siguientes términos: los alcances de la suplencia de la queja, sólo deja a la iniciativa del particular el inicio del proceso, pero no su desarrollo e inclusive el resultado (aunque se encuentre limitado por el hecho de que necesariamente tenga que favorecer al reclamante), no es un tema pacífico, pues su aplicación puede comprometer, y muy sensiblemente, al principio de congruencia de las sentencias, al derecho de defensa así como el derecho al juez imparcial.³⁷ Sentimos que esta última apreciación es un tanto exagerada, porque las posibilidades de una vulneración al derecho de defensa o al juez imparcial son las mismas de que tal

³⁷ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., pp.703–704.

situación jamás suceda, por lo que haciendo un cálculo de costo-beneficio la segunda opción tendría muchas más posibilidades. No olvidemos que el fundamento de la suplencia de la queja deficiente es la defensa y reivindicación de los derechos fundamentales, por lo que en los afanes de su aplicación no cabría como fundamento lógico la vulneración de otros derechos fundamentales, cuando de lo que se trata es de protegerlos.

Y es que la suplencia de la queja permite al Juez disponer sobre los términos de la pretensión, el acto que causa agravio, así como de los fundamentos mismos de la lesión del derecho constitucional. Y si en México ello se ha aceptado, (...) es porque la suplencia de la queja allí se encuentra constitucionalizada....³⁸ Evidentemente, esa no es toda la razón, porque recordemos, sus facultades están registradas en una ley. Lo que sucede es que esa ley es de amparo y su propósito es lograr la invulnerabilidad de los derechos fundamentales que son inherentes a la persona fin último de las ciencias jurídicas.

El segundo punto hace referencia a que bastante doctrina termina por señalar que la suplencia de la queja deficiente ha sufrido diversas reformas, que finalmente han concluido en albergar en su seno a tres sub-principios: la suplencia de error, la suplencia de queja deficiente en sentido estricto y la suplencia de los agravios formulados en los recursos.

Este criterio es compartido por Edgar Carpio Marcos en García Chávarri cuando señala que la figura mexicana de la suplencia de la queja comprendería tres formulaciones: la suplencia de error, surge ante la identificación equivocada del derecho fundamental presuntamente no respetado. La suplencia de la queja en sentido estricto, que permite al juzgador el análisis del conjunto de actos lesivos errónea o imperfectamente expuestos, lo que bajo nuestro criterio, llevaría a una correcta formulación del petitorio; y la tercera, la posibilita suplir aquellos errores en que haya incurrido el demandante al interponer diversos medios impugnatorios.³⁹ La ejecución de todas las facultades que acabamos de precisar, se desarrollan bajo el manto de la suplencia de la queja deficiente. Por lo que podemos concluir, que los otros “sub-

³⁸ *Ibidem*, p.725.

³⁹ A.GARCÍA CHÁVARRI, “La Transformación de un Proceso Constitucional en Otro. Anotaciones sobre la Figura Procesal Constitucional de la Reconversión...,” *cit.*, p.42.

principios”, han perdido su identidad, para contribuir con el fortalecimiento de la naturaleza individual del principio de suplencia de la queja deficiente.

1.3.1. Suplencia del error.

El desarrollo jurídico de la suplencia de error, se inicia con la última de las tres Leyes de Amparo que rigieron durante la vigencia de la Constitución Federal de 1857. Es así que el artículo 42 de la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857 o Ley de Amparo del 14 de diciembre de 1882 señala de manera novedosa lo siguiente: “*La Suprema Corte y los Juzgados de Distrito, en sus sentencias pueden suplir el error o la ignorancia de la parte agraviada, otorgando el amparo por la garantía cuya violación aparezca comprobada en autos, aunque no se haya mencionado en la demanda.*”⁴⁰ Del mismo criterio es Alfonso Noriega cuando señala en el texto de Abad Yupanqui que, la suplencia de error data desde la Ley de 1882, por lo que es el antecedente de la suplencia de la queja deficiente.⁴¹

Posteriormente ideas parecidas fueron reproducidas en el artículo 824 del Código de procedimientos federales de 1897 y el código Federal de Procedimientos Civiles mexicano de 1908, es así que Ortega Zurita señala que en estas disposiciones normativas se “reprodujo la facultad de la suplencia del error de la garantía invocada por el quejoso, otorgando el amparo por la que realmente apareciera violada, pero agregándose expresamente que sin cambiar el hecho expuesto en la demanda en ningún caso, ni alterar el concepto del segundo párrafo del artículo 780; precepto este último en que se prescribía la obligación del quejoso de expresar la fracción que de acuerdo con el diverso artículo 745 le servía de fundamento a su queja.”⁴²

Pero como sabemos, la suplencia de error, hoy se encuentra regula en las primeras líneas de artículo 76 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “*el órgano*

⁴⁰ A.MORALES BECERRA, *Las Leyes de Amparo en el Siglo XIX. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*. [Documento en formato PDF]. Recuperado el 20 de agosto de 2015. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/195/ntj/ntj10.pdf>

⁴¹ S. ABAD YUPANQUI, *El Proceso Constitucional de Amparo*, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, 2ª ed., p.190.

⁴² H.ORTEGA ZURITA, “La Suplencia de la Deficiencia de la Queja”, en *La Suplencia de la Deficiencia de la Queja en el Juicio de Amparo. 1ra Reimpresión*, Cárdenas, México, 1995, p. 341.

jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que se advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados...”

Ahora; sujetos al rigor del concepto, muchos han intentado formular una imagen precisa de la suplencia de error, con el objeto de mostrar su espíritu, su verdadera esencia. Por eso es que:

Según el Tribunal Supremo Federal y cuyo criterio es seguido por Edgar Carpio se señala que la suplencia de error opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador (como conocedor del derecho que es), se pronuncie al respecto.^{43 & 44}

Edgar Carpio señala que la suplencia del error consiste en la facultad-deber del Juez del Amparo para corregir los errores u equivocaciones en los que el reclamante incurra en todos aquellos casos en los que haya efectuado una equívoca identificación del derecho constitucional violado (“garantía”, como se denomina en México), o bien del precepto constitucional que lo contenga, sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda.^{45 & 46}

Según García Chávarri, en el derecho mexicano se distingue la suplencia de error de la suplencia de la queja. La primera tiene que ver con la facultad del juez de suplir la equivocación en la que habría incurrido el demandante al mencionar el derecho fundamental presumiblemente vulnerado.⁴⁷

Para Ignacio Burgoa, la suplencia del error está referida a la incorrecta aplicación del derecho constitucional cuya afectación se alega.⁴⁸

⁴³ Tesis P. /J. 49/1996. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV. Agosto de 1996. pp. 58-59. [Documento en formato PDF]. Recuperado el 12 de Abril de 2015.

<http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/917/917957.pdf>

⁴⁴ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.701.

⁴⁵ *Ibíd*em

⁴⁶ C.SENISSE ANAMPA, “El principio de suplencia de queja deficiente”, en Gaceta Procesal Constitucional. N° 21, Lima, 2013, p.19.

⁴⁷ A.GARCÍA CHÁVARRI, “La Transformación de un Proceso Constitucional en Otro. Anotaciones sobre la Figura Procesal Constitucional de la Reconversión...,” cit., p.41.

⁴⁸ I. BURGOA ORIHUELA, *El Juicio de Amparo*, Porrúa..., cit., p.300.

Señala Héctor Fix-Zamudio, para remediar o complementar las deficiencias en que hubiesen incurrido los promoventes del amparo en sus respectivas demandas tenían como una de ellas a la corrección del error, (...) es de carácter formal y tiene por objeto evitar que por una cita equivocada del precepto fundamental que se invoca, deje de estudiarse la violación realmente cometida. Esta disposición obedece a la necesidad de no encerrar al juzgador dentro de un círculo de estrechísimo formalismo y con mayor razón en el Estado actual de desarrollo de la doctrina procesal, en que se ha impuesto la tendencia de otorgar al juez mayores facultades, para no dejar la materia del proceso abandonado por completo a las partes inclusive en el campo tradicionalmente considerado como de carácter dispositivo.⁴⁹

Juventino Castro tiene una posición bastante peculiar respecto a la corrección del error (...) el error en la cita de una garantía supone una exactitud en el campo que, al transcribirse, por equivocación se traduce en un error, desde el momento en que no se puede suplir el concepto de violación según el texto expreso de la ley, es decir el error consiste en equivocarse en la cita (y no cualquier otro error) pero apareciendo el concepto con claridad. Por ello el error es intrascendente, y no hay objeción en suplir el error al fallarse.⁵⁰

Nosotros creemos, que por medio de la suplencia de error, el juez de amparo se encarga de corregir los errores u omisiones que se adviertan en los fundamentos de derecho al momento de citar algún precepto constitucional o legal. Rompe justificadamente los esquemas de la formalidad procesal, ya que su fin último es no desatender los verdaderos derechos transgredidos de las personas, pero además es aplicable no sólo a los particulares sino que también a las autoridades responsables. Viene a cumplir la misma función que el iura novit curia de nuestra legislación. Y hoy se constituye como parte de la suplencia de la queja deficiente.

Como afirma correctamente Samuel Abad Yupaqui, la suplencia de error alude, valga la redundancia, al error del demandante en la cita del derecho constitucional vulnerado, y entre nosotros se resuelve a través del principio iura novit curia.⁵¹

⁴⁹ H. FIX-ZAMUDIO, *El Juicio de Amparo*, Porrúa..., cit., p. 292.

⁵⁰ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II...*, cit., p. 18.

⁵¹ S. ABAD YUPANQUI, *El Proceso Constitucional de Amparo...*, cit., p.189.

Finalmente, parafraseando a Edgar Carpio, es sumamente importante advertir que la doctrina es unánime en señalar que el espacio jurídico que hoy ocupa la suplencia de error es la de un sub-principio de la suplencia de la queja deficiente.⁵² A pesar de que temporalmente sus inicios normativos sean anteriores al de la suplencia de la queja deficiente.

1.3.2. Suplencia de la queja deficiente en sentido estricto.

Edgar Carpio señala que, se trata de una facultad que se otorga a los órganos jurisdiccionales competentes para examinar en su conjunto los agravios y conceptos de violación, de modo tal que, a pesar de que el quejoso, en su demanda, no haya planteado o reclamado una cierta violación constitucional; sin importar que esa violación no se haya considerado e incluido en la litis del proceso; no obstante que el quejoso no lo haya mencionado en sus alegatos; el tribunal de amparo al momento de sentenciar (de plano y sin forma de sustanciación), podrá o deberá, según sea el caso, suplir ese defecto o deficiencia de la queja, otorgando la protección constitucional por una razón o por un hecho que nunca se conoció y examinó en el proceso.^{53 & 54}

Según García Chávarri la suplencia de la queja deficiente, con el límite de la improcedencia, le permite al juez la posibilidad de suplir las deficiencias o imperfecciones de razonamiento en las que haya caído por error o ignorancia el mencionado demandante al presentar su demanda.⁵⁵ Ignacio Burgoa, también coincide que la suplencia de la queja no opera cuando el amparo es improcedente por cualquier causa constitucional, legal o jurisdiccional, ya que no tiene el alcance de sustituir o de obviar tal improcedencia.⁵⁶

Respecto a todo lo que se ha mencionado en este punto; sólo nos queda decir que, constituye una exageración pretender que el juez del amparo otorgue protección constitucional por una razón o por un hecho que nunca se conoció en el proceso; lo que implicaría que la suplencia de la queja deficiente tendría influencia sobre los fundamentos de hecho. Esta afirmación es bastante peculiar, porque lo que se

⁵² E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.701.

⁵³ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.702.

⁵⁴ C.SENISSE ANAMPA, “El principio de suplencia de queja deficiente”..., cit., p.19.

⁵⁵ A.GARCÍA CHÁVARRI, “La Transformación de un Proceso Constitucional en Otro. Anotaciones sobre la Figura Procesal Constitucional de la Reconversión”..., cit., p.41.

⁵⁶ I. BURGOA ORIHUELA, *El Juicio de Amparo...*, cit., p.105.

estaría tratando de decir, es que cabría la posibilidad, en el mejor de los casos, de poder completar las afirmaciones o, mucho peor, inventarlas, para lograra alcanzar las consideraciones jurídicas que se pretenden.

Y sí, es cierto que tiene como límite a la improcedencia, pero de esto hablaremos más adelante.

1.3.3. Suplencia de los agravios formulados en los recursos.

Edgar Carpio, con bastante criterio; define a la suplencia de los agravios formulados en los recursos, como aquel que permite al juez suplir los errores en los agravios que haya incurrido la parte reclamante al momento de interponer los diversos medios impugnatorios (revisión, queja y reclamación) que se han previsto en el juicio de Amparo.⁵⁷

De similar criterio es Samuel Abad cuando dice que la suplencia no se restringe a la demanda sino que también abarca a los recursos.⁵⁸ Y también Carlos Mesía, al señalar que la suplencia de la queja comprende la reparación de los errores o deficiencias de la parte reclamante al momento de interponer cualquier medio impugnatorio.⁵⁹

Así mismo; debe recordarse que se trata de un instituto procesal de carácter proteccionista, es decir; que este principio no opera para suplir las deficiencias en la que pueda incurrir el demandado o el Ministerio Público, sino sólo de la parte que tenga carácter de quejoso (demandante en el derecho mexicano) o del tercero perjudicado con el acto que se cuestiona. También tiene carácter obligatorio y antiformalista.⁶⁰

Pero como es obvio, los criterios que envuelven las propuestas conceptuales van variando de autor en autor. Así, Ignacio Burgoa añade; la suplencia no incide en los recursos, sino en los agravios que ellos puedan anidar, y tiene la finalidad de revocar la resolución que se impugna. De ahí que no resulte viable que el

⁵⁷ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...”, cit., p.704.

⁵⁸ S. ABAD YUPANQUI, *El Proceso Constitucional de Amparo...*, cit., p.189.

⁵⁹ C. MESÍA RAMÍREZ, *Exégesis del Código Procesal Constitucional*. Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2013, 4ª ed., p. 95.

⁶⁰ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...”, cit., pp.704-705.

juez supla los agravios del medio impugnatorio cuando el que se haya interpuesto sea improcedente o haya sido formulado extemporáneamente.⁶¹

Sin embargo; cabe precisar que si nos regimos de manera estricta a la fracción IV del artículo 79 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo en materia agraria “...deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios...”, aunque no debemos descartar el valioso criterio doctrinario por ser coherente en la búsqueda de un proceso libre de excusas para la protección o reivindicación del derecho lesionado.

1.4. Límites del principio de suplencia de la queja deficiente.

Parte de la doctrina ha reflexionado sobre una serie de principios y derechos que vendrían siendo vulnerados al aplicar la suplencia de la queja deficiente en el proceso de amparo. Entre los que podemos mencionar tenemos: el principio de congruencia, el principio de definitividad, el principio de la relatividad de las sentencias de amparo, el derecho de defensa y el derecho al juez imparcial. De algunos de éstos nos ocuparemos más adelante por ser académicamente más valioso. Sin embargo; debemos decir que ninguno de ellos generó mayores discusiones, porque se entendió que del principio del que se hablaba era uno de orden constitucional y que a pesar de que algunos de los otros principios y derechos mencionados también lo eran, no podía generarse un conflicto de derechos y más aún si lo que se venía buscando era contribuir con el control de la constitucionalidad y la convencionalidad de ciertos actos, omisiones y normas generales. Con esto queremos decir, que no tiene por qué convertirse en regla general, la vulneración de alguno de estos principios o derechos, cuando el juez hace uso de la suplencia de la queja deficiente. Y respecto a los otros principios, lo que queda por decir es que, la finalidad que subyace al amparo y a los fines de la suplencia de la queja deficiente constituye mayor valor que los otros que protegen los demás principios y derechos.

En Gerardo Eto Cruz el magistrado Ignacio Vallarta señala; si aun en los juicios comunes, el oficio del juez debe suplir ciertas faltas de las partes; si aun nuestra

⁶¹ Ibídem, p. 705.

jurisprudencia ordinaria, dista mucho de consagrar las formulas solemnes en los juicios de que tanto mérito hacían, en el amparo, recurso constitucional que tiene fines más altos que los juicios comunes, no era posible encerrarse en aquel rigorismo antiguo sin desconocer por completo la naturaleza de esta institución.⁶²

Sin embargo, hay algo que sí constituye un límite para la aplicación de la suplencia de la queja deficiente y son las causales de improcedencia.

La doctrina y entre ellos Edgar Carpio son unánimes en reconocer que la suplencia de la queja procede siempre y cuando no esté afectada por alguna causal de improcedencia.⁶³ Aún con más precisión, Ignacio Burgoa señala que; en un amparo improcedente no se puede cumplir la obligación de suplencia por el órgano de control, pues sólo es susceptible de desempeñarse en cuanto a la cuestión constitucional planteada. (...) La suplencia obligatoria no autoriza al juzgador del amparo para salvar ninguna causa de improcedencia.”⁶⁴ Samuel Abad, también concuerda con lo dicho anteriormente, y dice que ésta institución concede al juez la potestad de suplir las deficiencias en que incurra la demanda de amparo pero no lo autoriza a superar una causal de improcedencia.⁶⁵ García Chávarri es de similar criterio y señala que en la figura de la suplencia de la queja es conveniente diferenciar la deficiencia en el pedido concreto de la improcedencia de la demanda, que sería esta última, su límite.⁶⁶

Finalmente, a pesar de ser la improcedencia el único límite aceptado para la suplencia de la queja deficiente. Tampoco podemos compartir lo que a continuación señala Edgar Carpio cuando dice: “si la vía escogida es improcedente, el juez no tiene la competencia para analizar la demanda o el recurso que se haya interpuesto.”⁶⁷ Parece que el mencionado autor no reparó de que en el artículo 61 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula a la improcedencia en los juicios de amparo, en ninguna de sus 23 fracciones hace referencia a la “vía escogida” como una de sus causales, que en realidad, son más de orden institucional, documental y general.

⁶² G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II...*, cit., p. 12.

⁶³ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.703.

⁶⁴ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.703.

⁶⁵ S. ABAD YUPANQUI, *El Proceso Constitucional de Amparo...*, cit., p.190.

⁶⁶ A.GARCÍA CHÁVARRI, “La Transformación de un Proceso Constitucional en Otro. Anotaciones sobre la Figura Procesal Constitucional de la Reconversión”..., cit., p.42.

⁶⁷ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.703.

Pero si el autor, lo que quiso es hacer referencia a una de las causales de improcedencia de la normativa nacional referidas a las vías (igualmente satisfactorias o previas), tampoco tendría mucho sentido, las razones son las siguientes: ¿Por qué no hacer uso de una vía procedimental determinada si es igualmente satisfactoria que por ejemplo una de amparo? o ¿Por qué no agotar las vías previas, si es algo necesario?, recordemos que lo que se busca es garantizar la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, por lo que los intereses mezquinos u oscuros no tienen motivación alguna. Esto nos permite afirmar, junto a otra tesis que desarrollaremos más adelante, que la aplicación de la conversión procesal para fines jurídico-procesales, es totalmente posible y válida. Es así que, en nuestro país, la improcedencia para la suplencia de la deficiencia procesal, como límite a su aplicación, no es aceptada. Pensemos además, que negar esta realidad, es también negarle vigencia al iura novit curia, según lo descrito en el primer inciso del artículo 5 del código procesal constitucional que a la letra señala: *“no proceden los procesos constitucionales cuando: los hechos y el petitorio de la demanda, no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado...”*. Además, no olvidemos que la relación de la suplencia de la deficiencia procesal y del iura novit curia en nuestra legislación, es también bastante estrecha.

CAPÍTULO II
EL PRINCIPIO PROCESAL CONSTITUCIONAL DEL IURA NOVIT CURIA.
UNA REFLEXIÓN DESDE LA NORMA, LA DOCTRINA Y LA
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO.

1. El principio de Iura Novit Curia.

1.1. Concepto.

En el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 28237 (Código Procesal Constitucional) del 07 de mayo del 2004, en relación al iura novit curia se señala lo siguiente: *“El órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente.”*⁶⁸

Otro de los alcances normativos que podemos señalar es el artículo VII del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 768 (Código Procesal Civil) del 04 de marzo de 1992 cuyo texto señala: *“El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.”*⁶⁹

Así mismo, el Decreto Legislativo N° 295 (Código Civil) del 25 de Julio de 1984 señala en su artículo VII de su Título Preliminar lo siguiente: *“los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda.”*⁷⁰

La norma dispuesta en el Código Procesal constitucional, además de ser la de nuestro interés, es bastante clara. Lo que se busca es aplicar el derecho que corresponda al proceso, por ser el que verdaderamente esté siendo vulnerado, a pesar de no haber sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Entonces, el iura novit curia está en la capacidad de corregir las carencias legales en las que incurran los fundamentos de derecho, más no aquellas que se encuentren a nivel del petitorio, que

⁶⁸ Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 28237 (Código Procesal Constitucional) del 07 de mayo del 2004, Jurista editores de julio del 2016.

⁶⁹ Artículo VII del Título Preliminar. Decreto Legislativo N° 768 (Código Procesal Civil) del 04 de marzo de 1992. & Resolución Ministerial N° 010-93-Jus. del 23 de abril de 1993, jurista editores de julio 2016.

⁷⁰ Artículo VII de su Título Preliminar. Decreto Legislativo N° 295 (Código Civil) del 25 de Julio de 1984, Jurista editores de julio del 2016.

como veremos más adelante, es labor de la suplencia de la deficiencia procesal. Finalmente, cuando en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional se señala que “*el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda...*”, nosotros creemos, que ese “debe”, implica tácitamente que el magistrado que corresponda, tiene la obligación de aplicar el derecho que incumba al caso en particular, en una clara concordancia con el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil.

En la doctrina, el análisis que recibe el principio de iura novit curia, es sin duda, un tanto más subjetivo, emocional y sujeta a diferencias bastantes sutiles. Veamos lo que diversos autores dicen sobre ella.

Para Carlos Mesía, el iura novit curia puede traducirse en forma simple a la expresión el juez conoce el derecho. Las partes aportan los hechos pero a la hora de expresarlos puede que lo hagan sin una clara fundamentación jurídica de la pretensión procesal, ya sea porque se ha omitido aludir las normas a aplicarse o porque se hace una mención equivocada de aquellas que por razón del tiempo, la naturaleza o el lugar son las llamadas a tutelar el derecho.⁷¹

Para Gerardo Eto Cruz, es el deber del juez constitucional de calificar correctamente el acto lesivo, según el derecho fundamental que se hubiera vulnerado.⁷²

Para Jorge Peyrano el principio iura novit curia significa, la necesaria libertad con la que debe contar el sentenciante para subsumir los hechos alegados y probados por las partes, dentro de las previsiones normativas que rijan el caso. Libertad que subsiste aún en la hipótesis de que los litigantes hubieran invocado la aplicabilidad de otras disposiciones.⁷³

Hay algo que para nosotros es muy importante mencionar. Autores como García Chávarri, y varios otros más, entienden acertadamente que la suplencia de error (instituto jurídico mexicano) se recoge en el principio iura novit curia previsto en el artículo VIII del Título Preliminar de nuestro Código Procesal Constitucional.⁷⁴

⁷¹ C. MESÍA RAMÍREZ, *Exégesis del Código Procesal Constitucional. Tomo I...*, cit., p. 147.

⁷² G. ETO CRUZ, *El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano*, Adrus, Lima, 2011, p.212.

⁷³ J. PEYRANO, *El Proceso Civil*, Astrea, Buenos Aires, 1978, p. 96.

⁷⁴ A.GARCÍA CHÁVARRI, “La Transformación de un Proceso Constitucional en Otro. Anotaciones sobre la Figura Procesal Constitucional de la Reconversión”..., cit., p.43.

Los demás autores, cuando se prestan a definir el principio del iura novit curia, suelen hacer uso de aquellas estructuras conceptuales que nuestro Tribunal Constitucional ha diseñado en sus sentencias. Veamos el desarrollo jurisprudencial que se le ha dado a este principio.

El iura novit curia implica, que el juez tiene el poder-deber de identificar el derecho comprometido en la causa, aun cuando no se encuentre expresamente invocado en la demanda. De este modo el juez, como director del proceso, dice el derecho antes de emitir sentencia, lo que no implica, en ningún caso, la modificación del objeto de la pretensión o de los términos de la demanda; es decir, que ello no puede suponer fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.⁷⁵ Dice el Tribunal Constitucional, que este principio recae únicamente en los fundamentos jurídicos de la pretensión.⁷⁶ & ⁷⁷ Por eso es que, cuando se trate del aforismo iura novit curia, al aplicar el derecho a las cuestiones debatidas, se buscará no alterar ni sustituir las pretensiones y hechos facticos que sustentan la demanda y resulten acreditados en el proceso.⁷⁸

Una de las particularidades de la aplicación del principio iura novit curia en el proceso constitucional es que la obligación del juzgador de aplicar correctamente el derecho objetivo, involucra simultáneamente, la correcta adecuación del derecho subjetivo reconocido en aquel.⁷⁹ Está claro que el iura novit curia (...) hace referencia a la invocación o no invocación de las normas jurídicas que sirven de fundamento a las pretensiones esgrimidas por las partes dentro de un proceso.⁸⁰ De manera que el hecho de que no se aleguen determinados derechos y, por tanto, que el contradictorio constitucional no gire en torno a ellos, no es óbice para que este Tribunal pueda pronunciarse sobre esos y otros derechos.⁸¹

El principio iura novit curia que recoge el Código Procesal Constitucional en su artículo VIII, a la luz de la situación mencionada, debe ser entendido como un atributo del juez constitucional destinado a lograr una relación armónica entre los derechos cuya tutela le encomienda la Constitución a través del Derecho Procesal

⁷⁵ STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J. 6.

⁷⁶ STC Exp. N° 00797-1999-AA, F.J. 7.

⁷⁷ STC Exp. N° 02094-2005-PA, F.J. 1.

⁷⁸ STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 05 de abril de 2004, F.J. 8.

⁷⁹ STC Exp. N° 0905-2001-AA, del 14 de agosto de 2002, F.J. 4.

⁸⁰ STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 05 de abril de 2004, F.J. 5.

⁸¹ STC Exp. N° 0256-2003-HC, del 21 de abril de 2005, F.J. 5.

Constitucional y los propios valores que consagra la carta fundamental. El aforismo reza, “el Tribunal conoce el derecho y se refiere a la invocación o no invocación de las normas jurídicas que sirven de fundamento a las pretensiones esgrimidas por las partes dentro de un proceso. Al respecto, Luis Diez Picazo y Antonio Gullen (Sistema de Derecho Civil: Madrid, Tomos, 1982, Pág. 227) exponen que el juez puede alterar el fundamento jurídico de la pretensión de la parte (...).”⁸² Es decir, en el ámbito de la justicia constitucional, esto supone que el Tribunal debe amparar de la mejor manera las pretensiones sobre violaciones o amenazas a los derechos fundamentales. Y supone además, en esta sede, la necesidad de prestar el mejor auxilio de la jurisprudencia y del derecho vigente en aras de salvaguardar, en los mejores términos, las alegaciones de violaciones a los derechos que las partes presentan a través de sus demandas.⁸³

Aún no existe, entre el iura novit curia y el principio de suplencia de la deficiencia procesal, un criterio que respalde unánimemente el grado de relación y diferencia que existe entre ambas figuras jurídicas. Por lo que la doctrina y la jurisprudencia han tratado de proporcionar algunas respuestas como la que a continuación señalaremos, no sin antes mencionar, que esta cuestión será mejor atendida en el siguiente capítulo, donde hablaremos, en estricto, sobre la suplencia de la deficiencia procesal.

Lo que sucede, es que el principio del iura novit curia, no siempre ha sido aplicado en el sentido más adecuado. En algunos casos, supuestos típicos de suplencia de la queja fueron considerados como si de la aplicación del iura novit curia se tratara o viceversa. El caso al que nos referiremos a continuación, nos muestra como el Tribunal Constitucional, al parecer, entendió que el iura novit curia es parte del principio de suplencia de la deficiencia procesal: el Tribunal sostuvo, el juzgador constitucional se encuentra obligado a suplir las deficiencias procesales en que incurra la parte reclamante, bajo responsabilidad; dicha facultad es conocida por la doctrina como el principio de suplencia de queja. La suplencia de las deficiencias procesales comprende la obligación del juez de subsanar todos los errores en que pueda incurrir el demandante. En el presente caso, éste ha cumplido con fijar la materia de su demanda y, al señalar los fundamentos de derecho, ha incurrido en error que el juez está en la

⁸² STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J. 5.

⁸³ STC Exp. N° 04080-2004-AC, del 28 de enero de 2005, F.J. 7.

obligación de subsanar.⁸⁴ Sin embargo; un análisis correcto de lo que acabamos de decir, implicaría que tanto el iura novit curia y la suplencia de la deficiencia procesal actúan en espacios y en niveles totalmente distintos, pero sin negar sus obvias implicancias. Pero que existen algunas situaciones, en que actúan bajo niveles altísimos de correspondencia o de relación.

No obstante, y siguiendo a Víctor Ticona⁸⁵ y a Juan Monroy⁸⁶ nosotros creemos lo siguiente.

Sabemos que la demanda, es el acto procesal que da inicio al proceso. Es además, el vehículo para el ejercicio del derecho de acción que se dirige contra el Estado. Pero sobretodo, y para fines del presente trabajo, la demanda contiene en sus entrañas a la pretensión procesal; que es una declaración de voluntad, una exigencia, un acto por medio de la cual se pide tutela jurisdiccional. Los elementos que conforman la pretensión procesal son: los elementos subjetivos, que vienen a ser las partes, es decir, el demandante y el demandado. Los elementos objetivos, conformado por los fundamentos de hecho y los fundamentos jurídicos, ambos apreciados de manera conjunta, se conocen con el nombre genérico de causa petendi, iuris petitum, iuris petitio o más castellanizado como la causa o razón de pedir. Asimismo, la pretensión procesal tiene un elemento central que recibe el nombre de petitorio, aún cuando en doctrina suele llamársele también petitum o petitio; es considerado el núcleo de la pretensión, es el pedido concreto, dirigido contra el demandado de quien se exige cumpla, se abstenga o reconozca un derecho respecto del cual el demandante cree ser titular y que en el campo de la realidad es lo que como pretensor quiere que sea reconocido y declarado a su favor por el órgano jurisdiccional. Este se encuentra integrado por el objeto inmediato (la clase de pronunciamiento que se solicita) y el bien perseguido (la relación jurídica cuya existencia o inexistencia deba declararse).⁸⁷

En ese entender, nosotros creemos que el principio de iura novit curia le otorga al juez el poder-deber de identificar el derecho que verdaderamente esté siendo vulnerado en el proceso. Es decir, que el juez está en la obligación y además tiene las

⁸⁴ STC Exp. N° 0509-2000-AC, del 24 de abril de 2001, F.J. 6.

⁸⁵ V. TICONA POSTIGO, *El Debido Proceso y la Demanda Civil. Tomo I*, Rodhas, Lima, 1999, pp. 193-199.

⁸⁶ J. MONROY GÁLVEZ, *Teoría General del Proceso*, Palestra, Lima, 2007, pp.498-503.

⁸⁷ L. ZAVALA REVILLA, "Criterios para la conversión de un proceso constitucional de libertad en otro". *Gaceta Procesal Constitucional*. N° 15, Lima, 2013, p. 18.

facultades de que del análisis de los hechos, él pueda colegir el derecho ciertamente violado. Por lo que el iura novit curia actúa a nivel de la causa petendi, pero sólo respecto de los fundamentos de derecho. El soporte que subyace a la aplicación del principio de iura novit curia es la protección y el resguardo de los derechos fundamentales que es razón más trascendente que cualquier forma jurídica. De igual manera, entendemos que entre el iura novit curia y la suplencia de la deficiencia procesal, no existe una relación continente y contenido, sino más bien, de profunda relación y colaboración en aras de proteger la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.

1.2. Alcances del principio de Iura Novit Curia.

Luis Castillo Córdova, afirma que, la razón de éste principio debe encontrarse en la naturaleza jurídica del derecho que no ha sido invocado debiéndose invocar o que ha sido mal invocado. Se trata de derechos que vinculan al juez constitucional, no por haber sido o no invocados, sino por estar recogidos en la norma constitucional que obliga plenamente por ser plenamente normativa.⁸⁸

Y es que como señala Edgar Carpio, si el iura novit curia faculta a los jueces suplir el derecho que las partes invocan erróneamente, ello no justifica que esos mismos jueces puedan introducir en el debate, ex officio, pretensiones no articuladas ni debatidas.⁸⁹ Estamos de acuerdo con lo que se afirma, siempre y cuando el autor, por “pretensiones”, se haya referido a los fundamentos de hecho y al petitorio. Por lo que concluiríamos que el juez constitucional, de oficio, y en virtud del iura novit curia, no podría modificar los fundamentos fácticos ni el petitorio.

Dice el Tribunal Constitucional que, “al aplicar el derecho a las cuestiones debatidas, buscará no alterar ni sustituir las pretensiones y hechos fácticos que sustenten la demanda y resulten acreditados en el proceso. De otro lado (...) el juez debe calificar los hechos expuestos por las partes y la relación sustancial, prescindiendo de la calificación efectuada por los litigantes, debe determinar la causa petendi y siempre que no se aparte de los hechos afirmados ni modifique su objeto, puede otorgar lo pedido sobre la base de una calificación de la causa distinta a la que

⁸⁸ L.CASTILLO CÓRDOVA, *Comentarios al Código Procesal Constitucional. Tomo I*, Palestra, 2006, 2ª ed., p.94.

⁸⁹ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.719.

hicieron las partes. Partiendo de reconocer una posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico, no resulta razonable que en todos los casos, las formas estén por encima del derecho sustancial, desconociendo el valor de lo real en un proceso. El derecho procesal es, o quiere ser el cauce mediante el cual se brinda una adecuada cautela a los derechos subjetivos, por ello, al reconocerse legislativamente las facultades del juez constitucional, sea para aplicar el derecho no invocado, o erróneamente invocado (*iura novit curia*), (...) o subsanar las deficiencias de fondo o procesales (suplencia de queja deficiente), (...) se trata de evitar que el ejercicio de una real y efectiva tutela judicial en el marco de un proceso justo sea dejado de lado, por meros formalismos irrazonables. Se parte, pues, del principio de congruencia judicial, que exige al juez que, al pronunciarse sobre una causa, no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso a resolver. Sin embargo, como ya se ha visto, existen casos en los cuales la pretensión no resulta clara y evidente, o está planteada de manera incorrecta, o se ha invocado erróneamente la norma de derecho aplicable, frente a lo cual el juez constitucional, luego del análisis fáctico, tiene el deber de reconocer el trasfondo o el núcleo de lo solicitado y pronunciarse respecto de él, sin que ello represente una extralimitación de sus facultades. La progresiva protección de los derechos fundamentales faculta a este Colegiado para decir derecho, o corregir deficiencias u omisiones cuando ello se deduzca de los hechos facticos y jurídicos de cada caso en particular (siempre a favor del quejoso y nunca en contra de él), resultando congruente con el ideal de vida de un Estado democrático, donde la aspiración de un máximo reconocimiento a la protección de los derechos está inspirada en los valores de dignidad, igualdad y justicia que irradian todo el ordenamiento jurídico”.⁹⁰ Para tal efecto, ha dicho el Tribunal Constitucional que la determinación del objeto tiene enorme importancia, ya que es a éste al que hay que aplicar la norma jurídica pertinente la noción de objeto del proceso es una noción procesal y el juez tiene, justamente, la tarea, a través de un procedimiento de subsunción, de aplicar el derecho sustancial a aquello que se le pide, es decir, al objeto del proceso que él tiene la tarea de examinar bajo todos los aspectos del derecho sustancial (Habscheid Walter, *El Objeto del Proceso en el derecho Procesal Civil*,

⁹⁰ STC Exp. N° 00569-2003-AC, del 05 de abril del 2004, F.J. 6, 9, 10, 13 a 15 y 17.

Revista de Derecho Procesal, 1980, pág. 455).⁹¹ Es importante precisar que los hechos nacen antes que el proceso; en consecuencia, estos hechos pertenecen a las partes, por lo que el juez no puede basar su resolución en hechos no alegados por ellos.⁹²

Con menos claridad señala Luis Castillo Córdova, el petitorio o pretensión que plantee el demandante, a veces puede que, no esté claramente formulado en la demanda, pero que por los hechos y argumentaciones hechas pueda concluirse con facilidad y seguridad. En estos casos, deberá ser el juez constitucional quien determine el petitorio.⁹³ El juez constitucional únicamente podrá desvincularse de lo planteado en la demanda a fin de otorgar una protección eficaz a los derechos constitucionales lesionados, cuando ello devenga de una voluntad implícita del recurrente a pesar de no haberla planteado correctamente en la demanda.⁹⁴

Por eso, y con razón, ha manifestado el Tribunal Constitucional que el derecho subjetivo constitucional está, a su vez, reconocido en una norma constitucional, norma ésta que es indispensable para el juez constitucional y que, en consecuencia, aunque no haya sido invocada, debe aplicarse.⁹⁵ De modo que, los derechos subjetivos constitucionales, a su vez, están reconocidos por disposiciones constitucionales, cuya aplicación, más allá de que no hayan sido invocados, o no se hayan identificado correctamente, corresponde decidir al juez de la constitucionalidad.⁹⁶

Entonces, por todo lo dicho; nosotros creemos que los alcances del principio iura novit curia se centran en la facultad y obligación que tiene el juez, de corregir el derecho que haya sido erróneamente invocado y procurando la protección de aquél derecho que verdaderamente fue vulnerado. El juez al hacer un análisis de la pretensión en su conjunto pero especialmente de los fundamentos fácticos, llega a la conclusión de que el derecho efectivamente vulnerado no ha sido exigido o que habiéndolo sido contiene errores sustanciales. Por lo que queda claro que el alcance del iura novit curia es sólo a nivel de los fundamentos jurídicos de la causa petendi y que tal facultad se sustenta en la progresiva necesidad que hay de otorgar justicia y

⁹¹ STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 05 de abril de 2004, F.J. 12.

⁹² STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 05 de abril de 2004, F.J. 13.

⁹³ L.CASTILLO CÓRDOVA, *Comentarios al Código Procesal Constitucional. Tomo I...*, cit., p.96.

⁹⁴ STC Exp. 0569-2003-AC, de 05 de abril de 2004, F.J. 8.

⁹⁵ STC Exp. 0905-2001-AA, del 14 de agosto de 2002, F.J. 4.

⁹⁶ STC Exp. 0256-2003-AA, del 21 de abril de 2005, F.J. 5.

proteger los derechos fundamentales, cuestiones que son siempre más importantes que cualquier rigor formal del proceso.

El principio de *iura novit curia* puede ser aplicado, incluso si sobre las modificaciones efectuadas, no haya girado el contradictorio. (...) Su reconocimiento y aplicación se justifica sólo en la medida que se emplean para alcanzar los fines del proceso constitucional que se trate: la supremacía de la Constitución y, en particular, la plena vigencia de los derechos ahí reconocidos y garantizados.⁹⁷

En cambio para algunos, como afirma Mario Esposito en Edgar Carpio, el error en la indicación de la disposición constitucional lesionada no podría ser corregida por el juez, pues, la alegación de que tal disposición ha sido lesionada constituye el hecho constitutivo de la *res in iudicio deducta*, que funda en concreto el ámbito de la competencia decisoria de la Corte.⁹⁸ Este es un criterio, que de aplicarse de manera estricta, traería posiblemente como consecuencia, el otorgamiento de un derecho que en el fondo nunca fue exigido, terminando por no satisfacerse las verdaderas necesidades jurídicas del quejoso.

Para otros, como Constantino Mortati; el principio *iura novit curia*, le atribuye al juez de un poder ilimitado en la individualización de las normas por aplicar a los hechos deducidos por las partes, no es invocable en los procesos constitucionales, dado que en estos tal individualización constituye la *causa petendi* de la acción.⁹⁹ Por el contrario, nosotros creemos que estos derechos son aún más invocables en los procesos constitucionales que en cualquier otro proceso ordinario, por los bienes naturales y jurídicos que protegen, y como mencionamos antes, la identificación del derecho abarca sólo una parte de la *causa petendi*, que son los fundamentos de derecho.

1.3. Límites del principio de *Iura Novit Curia*.

En la doctrina como en la jurisprudencia, existe cierto criterio unánime al señalar que tanto el petitorio como los fundamentos de hecho, constituyen límites a la aplicación del principio de *iura novit curia*. Por lo que sus contenidos son intocables para el juez constitucional bajo el criterio jurídico de este principio.

⁹⁷ STC Exp. N° 001-2001-AI, Caso Encuesta a Boca de Urna.

⁹⁸ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.719.

⁹⁹ *Ibíd*em, p. 719.

A continuación, estas son algunas de las opiniones que se han vertido al respecto en el campo de las ciencias jurídicas.

Como señala Juan Monroy Gálvez, el aforismo *iura novit curia* posibilita que el juez aplique la norma jurídica pertinente a la situación concreta cuando las partes no hayan invocado, o lo hayan hecho con error. Este principio procesal encuentra su límite en que el juzgador no puede modificar el petitorio ni incorporar hechos no propuestos por las partes o terceros con legitimación.¹⁰⁰

Luis Castillo Córdova afirma, aunque el derecho no haya sido invocado correctamente, el juez está en la obligación de hacerlo, sin embargo, esto no significa permitir y dar cobertura constitucional a una aceptación arbitraria del juez. En efecto, el juez está vinculado al derecho, pero también a los hechos y a la pretensión que plantee el demandante en el caso concreto.¹⁰¹

Según nuestro Tribunal, el juez constitucional puede amparar la pretensión sobre la base de un fundamento jurídico distinto al alegado. El límite al que se encuentra sujeta la aplicación de dicha institución procesal son los hechos alegados por las partes y el petitorio, los cuales no pueden ser modificados.¹⁰² Sin embargo; el Tribunal Constitucional equivocadamente insiste en utilizar el término pretensión y petitorio indiferenciadamente, al señalar que; al aplicar el derecho a las cuestiones debatidas, buscará no alterar ni sustituir las pretensiones y hechos facticos que sustenten la demanda y resulten acreditados en el proceso.¹⁰³ Entonces, los hechos alegados y el petitorio planteado por la parte demandante se constituye en límites para la aplicación del principio *Iura Novit Curia*.

Pero, ¿cuál es la fundamentación de este principio cuando de los procesos constitucionales se trata? La razón debe encontrarse en la naturaleza jurídica del derecho que no ha sido invocado debiéndose invocar o que ha sido mal invocado. Se trata de derechos que vinculan al juez constitucional no por haber sido o no invocados, sino por estar recogidos en la norma constitucional que obliga plenamente por ser plenamente normativa. Aunque el derecho no haya sido invocado correctamente, el juez está en la obligación de hacerlo y sentenciar según él. Sin embargo, esto no

¹⁰⁰ J. MONROY GÁLVEZ, *Los Principios Procesales en el Código Procesal Civil de 1992. En su libro La Formación del Proceso Civil Peruano. Escritos reunidos*, Comunidad, Lima, 2003, p. 281.

¹⁰¹ L. CASTILLO CÓRDOVA, *Comentarios al Código Procesal Constitucional...*, cit., p. 95.

¹⁰² STC Exp. 0616-2003-AA, del 06 de junio de 2005, F.J. 5.

¹⁰³ STC Exp. 0569-2003-AC, del 05 de abril de 2004, F.J. 9.

significa permitir y dar cobertura constitucional a una actuación arbitraria del juez, pues esta facultad que le depara al principio *iura novit curia* tiene límites. En efecto, el juez, está vinculado también a los hechos y a la pretensión que plantee el demandante. Por eso como ha dicho el Tribunal Constitucional, los límites de la aplicación de este principio “son los hechos alegados por las partes y el petitorio, los cuales no pueden ser modificados”.¹⁰⁴

Existen otras razones, que se han venido comentando a lo largo de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sin que ello nos permita advertir un criterio unánime, respecto de si el principio de congruencia o el derecho de defensa, deban o no consagrarse como verdaderos límites al pleno ejercicio del principio de *iura novit curia*. Sin embargo, nosotros creemos que cuando se decide poner en marcha las capacidades del *iura novit curia*, tanto el principio de congruencia y el derecho de defensa no se ven vulnerados, ni afectados en sus propósitos o finalidades jurídicas.

El Tribunal Constitucional ha fijado los términos de aplicación del principio *iura novit curia*, afirmando que en ningún caso el juez puede apartarse de la pretensión expuesta por las partes, pues de lo contrario atentaría contra otros principios básicos del proceso como el contradictorio y el principio de congruencia.¹⁰⁵ El Tribunal, como director del proceso, identifica la norma legal aplicable antes de emitir sentencia, lo que no implica, en ningún caso, la modificación del objeto de la pretensión o de los términos de la demanda, es decir; que ello no puede suponer que funda su decisión en hechos distintos de los que han sido alegados por las partes, ya que el contradictorio constitucional ha girado en torno a ellos.¹⁰⁶

Respecto al principio de congruencia de las sentencias o, a su turno, a la necesidad de que se respete el contradictorio, el Tribunal Constitucional considera correctamente, que no resultan afectados por el hecho de que el juez constitucional se pronuncie por un hecho subjetivo no alegado por la demandante, pues una de las particularidades de la aplicación del principio *Iura Novit Curia* en el proceso constitucional es que a la obligación del juzgador de aplicar correctamente el derecho

¹⁰⁴ STC Exp. N° 0616-2003-AA, del 6 de junio de 2005, F.J. 5.

¹⁰⁵ G. ETO CRUZ, *El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano...*, cit., p.215.

¹⁰⁶ STC Exp. 2094-2005-AA, del 10 de mayo de 2005, F.J. 2.

objetivo involucrado, simultáneamente se debe buscar, la correcta adecuación del derecho subjetivo reconocido en aquel.¹⁰⁷

1.3.1. El principio de congruencia y el *iura novit curia*.

La sala civil transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, citando a Jaime Guasp, define el principio de congruencia procesal como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso; asimismo, citando a Ramos Méndez, señala que la congruencia es la adecuación entre las peticiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito y la parte dispositiva de la resolución judicial. Finalmente, citando a Devis Echandía expone que la congruencia en sede procesal es el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes para que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones, donde los jueces tienen el deber de motivar sus resoluciones como garantía de un debido proceso, no estando obligados a darle la razón a la parte pretendiente, pero sí a indicarle las razones de su sinrazón y a respetar todos los puntos de la controversia fijados por las partes (...). La congruencia es el principio que delimita el contenido de las resoluciones judiciales de acuerdo con las peticiones realizadas por las partes, con el fin de que exista identidad entre lo resuelto por el Juez y lo discutido por los litigantes. De ese modo, el principio de congruencia tiene reconocimiento constitucional, siendo que, si la decisión es incompatible con las pretensiones, menoscabaría el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y, en concreto, el derecho de defensa, privando al agraviado de toda posibilidad para argumentar y ofrecer prueba respecto de los puntos que no fueron objeto de controversia. Entonces, queda en evidencia que el principio de congruencia es una condición sine qua non para referirnos al derecho al debido proceso. Este principio se considera de suma importancia, puesto que, identificando el tipo de pretensión, determinaremos el tipo de decisión; así, la decisión judicial tiene que respetar los límites de la pretensión. En este sentido, la congruencia puede ser externa e interna. Será externa, cuando se exija la

¹⁰⁷ STC Exp. N° 0905-2001-AA, del 14 de agosto de 2002. F.J. 4.

concordancia entre el pedido y la decisión a recaer, e interna, cuando se exija la concordancia entre la motivación y la parte resolutive.¹⁰⁸

La incongruencia procesal que resulta de la disconformidad existente entre lo pretendido y lo otorgado por el juez, tradicionalmente se clasifica en: Incongruencia ultra petita, se presenta cuando el Juez otorga más de lo pretendido. Se encuentra regulado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el mismo que dispone: “(...) *El Juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes*”. Incongruencia citra petita, se presenta cuando el Juez no se pronuncia respecto de todas las pretensiones. Se encuentra regulada en el artículo 122° numeral 4) del Código Procesal Civil de la siguiente manera: “*Toda resolución debe contener, la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos*”. Incongruencia extra petita, se presenta cuando el Juez, apartándose de las pretensiones formuladas por las partes, otorga cosa distinta de lo pedido. Dicho tipo de incongruencia encuentra también sustento legal en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. De este modo, la incongruencia extra petita constituye una infracción del principio dispositivo que impide al órgano judicial pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueran ejercitadas por las partes, al ser éstas las que conforman el objeto del thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial. Éste deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado por las partes, por el petitum y por los hechos que sirven como causa petendi.¹⁰⁹ Finalmente tenemos la incongruencia *infra petita*, se genera cuando se decide sobre una pretensión en extensión menor que la solicitada, sea que se conceda o niegue y en el entendido que se ha requerido una cantidad determinada y no otra. También concurre si se otorga menos de lo reconocido por el demandado.¹¹⁰

Según lo que se señala en la (CAS. N° 1308-2002-CALLAO) publicada el 02 de enero del 2002, el principio de congruencia procesal implica por un lado que el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de

¹⁰⁸ Columna jurídica. (24 de junio del 2013). El principio de congruencia procesal, mensaje de blog. Recuperado: <http://columnajuridica.blogspot.pe/2013/06/el-principio-de-congruencia-procesal.html>

¹⁰⁹ Ibidem.

¹¹⁰ I. AVENDAÑO LEYTON. (22 de febrero del 2016). El principio de congruencia. su regulación en el proceso civil actual y en el proyecto de ley del CPC. Recuperado de <http://lexweb.cl/el-principio-de-congruencia-su-regulacion-en-el-proceso-civil-actual-y-en-el-proyecto-de-ley-del-cpc/>

los que han sido alegados por las partes, y por otro lado la obligación de los magistrados es de pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos establecidos en el proceso, a todas las alegaciones efectuadas por las partes en sus actos postulatorios o en sus medios impugnatorios.

Vilela Carbajal, afirma curiosamente que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la congruencia procesal, para evitar la arbitrariedad del juez al momento de resolver, ya que por este principio se le impone al juez el límite de sus pronunciamientos, es decir, ajustarse a lo estrictamente solicitado por las partes. El juzgador debe resolver cada caso concreto sin omitir, alterar o exceder las pretensiones formuladas por las partes.¹¹¹

Sin embargo; los alcances de la aplicación del iura novit curia constitucional no viola el principio de congruencia de las sentencias, por el hecho de que el juez constitucional se pronuncie por un derecho subjetivo no alegado por la demandante. (...) Según el Tribunal Constitucional, “una de las particularidades de la aplicación del principio Iura Novit Curia (...) es que la obligación del juzgador de aplicar correctamente el derecho objetivo involucrado, es simultáneamente, la correcta adecuación del derecho subjetivo reconocido en aquel. Y ello es así, pues sucede que el derecho subjetivo constitucional está, a su vez, reconocido en una norma constitucional, (...) que es indisponible no reconocer para el juez constitucional y que, en consecuencia, aunque no haya sido invocada, debe aplicarse.”¹¹²

Es necesario distinguir entre el principio iura novit curia al interior de un proceso constitucional y en un proceso ordinario.¹¹³ El Tribunal Constitucional ha sostenido que el principio de congruencia no es absoluto, sino relativo. En efecto, el principio iura novit curia constitucional tiene un mayor alcance del que rige en otro tipo de procesos, pues los derechos subjetivos constitucionales, a su vez, están reconocidos por disposiciones constitucionales, cuya aplicación, más allá de que no

¹¹¹ K. VILELA CARBAJAL, “Impacto de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el Derecho Procesal”, en J. SOSA SACIO (Coord.) *el Tribunal Constitucional Reescribe el Derecho. Estudios sobre la incidencia de la Jurisprudencia Constitucional en las diferentes especialidades del derecho*, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, pp. 126-127).

¹¹² STC Exp. 0905-2001-AA, del 14 de agosto de 2002, F.J. 4.

¹¹³ STC Exp. N° 02096-2009-PA, del 08 de julio de 2009, F.J. 5.

hayan sido invocados, o no se hayan identificado correctamente, corresponde decidir al juez de la constitucionalidad.¹¹⁴

Nosotros tenemos un criterio totalmente distinto respecto a las incompatibilidades jurídicas que algunos creen ver, entre el *iura novit curia* y el principio de congruencia.

Se entiende, que la aplicación de ambos principios jurídicos, responden a momentos distintos a lo largo del proceso. Y aunque lo que suceda con la aplicación de una de ellas (principio de *iura novit curia*), vaya a influir en el comportamiento y posición de la otra (principio de congruencia), la primera de ellas no va a negar, afectar o contradecir las facultades jurídicas para las que este último principio esté finalmente orientado. La razón es la siguiente, lo que hace el *iura novit curia* es que el juez describa correctamente el derecho que fue en realidad vulnerado y que el demandante por error u omisión no lo consignó correctamente, entonces, de alguna manera se corrige una parte importante de la pretensión, específicamente de la causa petendi. Es así que, con ayuda del juez, se procura una demanda correctamente formulada, esto no hace otra cosa que decirle al demandado de qué y cómo realmente debe defenderse, mientras que al juez se le muestra un panorama cierto de la controversia y las cuestiones que debe evaluar para poder dar una solución final o sentencia. Entonces, lo que existe entre el *iura novit curia* y el principio de congruencia, es en realidad una relación de colaboración. Mientras más claras estén las pretensiones en su conjunto y en este caso especial los fundamentos jurídicos de la causa petendi, más clara también será la sentencia o *ratio decidendi* del juez. Además no olvidemos que el principio de congruencia, “exige que se contesten tanto el *petitum* (lo que se pide), como la causa petendi (los fundamentos factuales y jurídicos que sustentan lo que se pide).”¹¹⁵

Además, por lo que respecta al principio de congruencia de las sentencias o, a su turno, a la necesidad de que se respete el contradictorio, el Tribunal Constitucional considera que no resulta afectados por el hecho de que el juez constitucional se pronuncie por un derecho subjetivo no alegado por el demandante, pues una de las particularidades de la aplicación del principio *iura novit curia* en el

¹¹⁴ STC Exp. N° 2868-2004-AA, del 24 de noviembre de 2004, F.J. 11

¹¹⁵ F. EZQUIAGA GANUZAS, *Iura Novit Curia y Aplicación Judicial del Derecho*, Lex nova, Valladolid, 2000, p. 44.

proceso constitucional es que la obligación del juzgador de aplicar correctamente el derecho objetivo involucra, simultáneamente la correcta adecuación del derecho subjetivo reconocido en aquel.¹¹⁶

1.3.2. El Derecho a la defensa – contradictorio y el iura novit curia.

Para algunos, el derecho de defensa está contemplado en el inciso 3 del artículo 139 de nuestra Constitución, cuyo contenido es el siguiente: “*La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.*” Entonces, lo que intenta este artículo es garantizar que toda persona, natural o jurídica, sometida a un proceso jurisdiccional, cualquiera que sea la materia de que este se trate, no puede quedar en estado de indefensión. La situación de indefensión no sólo se presenta cuando el justiciable no ha tenido la oportunidad de formular sus descargos frente a las pretensiones de la otra parte, sino también cuando, no obstante haberse realizado determinados actos procesales destinados a levantar los cargos formulados en contra, en caso, se evidencie que la defensa no ha sido real y efectiva.¹¹⁷

Para otros, es en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución de nuestro país donde se evidencia el derecho de defensa, dicho inciso señala lo siguiente: “*El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.*” Se reconoce el derecho a la defensa; cuando en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos

¹¹⁶ STC Exp. N°0905-2001-AA, del 14 de agosto de 2002, F.J. 4.

¹¹⁷ STC Exp. N° 3997-2005-PC, del 12 de agosto de 2005, F.J. 8.

judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos.¹¹⁸

Los estudiosos del derecho también han reflexionado sobre el derecho de defensa. Sus posturas giran en torno a los siguientes criterios.

Para Carlos Mesía, el derecho de defensa garantiza, que una persona sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses.¹¹⁹ Años después el mismo Carlos Mesía afirma, el derecho de defensa consiste en la obligación de ser oído, asistido por un abogado de la elección de un acusado demandado, o en su defecto a contar con uno de oficio. Este derecho comprende la oportunidad de alegar y probar procesalmente los derechos e intereses, sin que pueda permitirse la resolución judicial inaudita parte, salvo que se trate de una incomparecencia voluntaria, expresa o tácita, o por una negligencia que es imputable a la parte.¹²⁰

Mientras que Juan Monroy Gálvez señala que, desde una perspectiva constitucional, la referencia al derecho de contradicción suele expresarse a través de una de las especies del derecho a un debido proceso legal, específicamente el llamado derecho de defensa. El derecho de contradicción es, al igual que el derecho de acción, una expresión del derecho a la tutela jurisdiccional. Esto significa que el derecho de contradicción tiene las mismas características del derecho de acción. En consecuencia, estamos ante un derecho de naturaleza constitucional, además, subjetivo, público, abstracto y autónomo, que permite a un sujeto de derecho emplazado exigirle al Estado le preste tutela jurisdiccional. Es notoria su naturaleza constitucional, inclusive con mayor nitidez que en el caso del derecho de acción. En realidad, debe ser difícil hallar un texto constitucional que no considere al derecho de contradicción (sea denominándolo como tal o de otra manera) como un derecho esencial al individuo y, en consecuencia, elemental para la existencia de un Estado de derecho. Lo subjetivo se advierte en el hecho de que es inherente a un sujeto de derecho por la sola circunstancia de serlo. Es público en tanto el sujeto pasivo del derecho de

¹¹⁸ STC Exp. N° 6648-2006-PHC, del 14 de marzo de 2007, F.J. 4.

¹¹⁹ C. MESÍA RAMÍREZ, *Los Recursos Procesales Constitucionales. Diálogo con la Jurisprudencia*, Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 32.

¹²⁰ C. MESÍA RAMÍREZ, *Exégesis del Código Procesal Constitucional...*, cit., p198.

contradicción es el Estado, siendo en este aspecto exactamente igual que el derecho de acción. Es abstracto porque consiste en la oportunidad que el Estado debe otorgarle al emplazado para que se defienda, con absoluta prescindencia de si lo hace o no. Finalmente, es autónomo porque existe con total independencia de que lo que expresa el emplazado tenga sustento real o fundamento jurídico.¹²¹ El derecho al contradictorio es pues la facultad que tiene todo sujeto pasivo de la relación jurídica procesal para discutir la pretensión que ha sido dirigida en su contra, en buena cuenta, para ejercer su derecho a la defensa.

Por otro lado, señala Espinoza-Saldaña, la aplicación del principio *iura novit curia* no autoriza al juez constitucional a alterar los hechos, variar el objeto de la pretensión o petición concreta que se le hace, o subsanar las imprecisiones en las cuales podría haberse incurrido para determinar el objeto de la pretensión. La labor (...) que debe asumir un juez tiene límites, incluso si lo que se dice buscar es preservar la supremacía de la Constitución.¹²² No estamos de acuerdo en que el juez, a través del *iura novit curia*, no pueda subsanar las imprecisiones que por error u omisión haya cometido el demandante al momento de plantear los fundamentos jurídicos, y menos aún en minimizar la importancia de preservar la Constitución y todo lo que ella engloba. Ante tal situación Vilela Carbajal también se pronuncia y señala, que a veces se recoge la idea errada de que el derecho procesal es una ciencia formalista, un espacio donde las formalidades son especialmente protegidas, incluso más que el alcance de la justicia. Esa idea es anacrónica, pues el proceso actual atiende más a la consecución de sus fines (solución del conflicto y aseguramiento de la paz social).¹²³

Para el Tribunal Constitucional y su jurisprudencia, el análisis que resiste el derecho de defensa es el siguiente.

El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedido, por concretos actos de los órganos judiciales, de hacer uso de los medios necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos.¹²⁴

¹²¹ J. MONROY GÁLVEZ, *Teoría General del Proceso...*, cit., pp.518-520.

¹²² E. ESPINOSA-SALDAÑA, “Comentarios al Artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”, en J. TUPAYACHI SOTOMAYOR (Coord.), *Código Procesal Comentado. Homenaje Domingo García Belaunde*, Adrus, Arequipa, 2009, p. 82.

¹²³ K. VILELA CARBAJAL, “Impacto de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional...,” cit., pp. 125-126.

¹²⁴ STC Exp. N° 1230-2002-HC, del 20 de junio del 2002, F.J. 18.

Así mismo, el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Entonces, el derecho de defensa en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés.^{125 & 126}

Esta categoría del derecho de defensa, hace que se constituya como un derecho irrenunciable, dado que la parte no puede decidir si se le concede o no la posibilidad de defenderse; y también como un derecho inalienable, pues su titular no puede sustraerse a su ejercicio.¹²⁷

El Tribunal Constitucional señala además, que el derecho de defensa garantiza que una persona sometida a un proceso judicial no quede en estado de indefensión por actos u omisiones que sean imputables directa e inmediatamente al órgano jurisdiccional.¹²⁸ Es decir, el derecho de defensa garantiza, en el ámbito de un proceso judicial, que un justiciable puede ejercer los medios de defensa que corresponda a fin de contradecir los argumentos de la otra parte o, en su caso, las resoluciones del juez.¹²⁹

Igualmente, se ha señalado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa.¹³⁰ Por lo que la indefensión opera en el momento en que, al atribuírsele la comisión de un acto u omisión antijurídicos, se le sanciona sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, situación que puede extenderse a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan promover.¹³¹ El derecho a no quedar en estado de indefensión en el ámbito jurisdiccional es un derecho que se irradia transversalmente durante el desarrollo de todo el proceso judicial. Garantiza así que una persona que se encuentre comprendida en una investigación

¹²⁵ STC Exp. N° 0282-2004-AA, del 29 de octubre de 2004, F.J. 3.

¹²⁶ STC Exp. N° 5085-2006-PA, del 07 de mayo del 2007, F.J. 5.

¹²⁷ STC Exp. 3062-2006-PHC, del 17 de mayo de 2006, F.J. 4 y 5.

¹²⁸ STC Exp. 6149-2006-AA, del 11 de diciembre de 2006, F.J. 29.

¹²⁹ C. MESÍA RAMÍREZ, *Los Recursos Procesales Constitucionales...*, cit., p.33.

¹³⁰ STC Exp. 0582-2006-AA, del 13 de marzo de 2006, F.J.3.

¹³¹ STC Exp. N° 1941-2002-AA, del 27 de enero de 2003, F.J. 12.

judicial donde estén en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad dialéctica de alegar y justificar procesalmente el reconocimiento de tales derechos e intereses. Por tanto se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. Evidentemente no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión reprochada por el contenido constitucionalmente protegido del derecho. Esta es constitucionalmente relevante cuando la indefensión se genera en una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Es decir, que se produce sólo en aquellos supuestos en que el justiciable se ve impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos.¹³² Es importante señalar que el derecho de defensa tiene vigencia plena a lo largo de todo el proceso.¹³³ Por lo que nadie puede ser juzgado sin ser oído y vencido al finalizar el juicio.¹³⁴

También el derecho comparado y las normas internacionales se han pronunciado al respecto. El Tribunal Constitucional Español, señala que se viola el derecho de defensa cuando el interesado, de modo injustificado, ve cerrada las posibilidades de impetrar la protección judicial de sus derechos e intereses legítimos (...) con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado;¹³⁵ tras la realización de un acto u omisión imputable al órgano o ente al que se reputa la comisión del agravio.¹³⁶ También la Convención Americana sobre Derecho Humanos, lo reconoce como derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.

Algunos críticos del iura novit curia y del pleno ejercicio de sus facultades jurídicas, han intentado encontrar ciertas discrepancias procesales entre el mencionado principio y el derecho a la defensa. La posición que nosotros terminamos por acoger, es que entre ambas figuras jurídicas, no existe ningún nivel de conflicto que nos obligue a adoptar una visión positiva y condescendiente frente a una y desechar todo aporte y vigencia jurídica respecto de la otra. La obligación que tiene el juez constitucional de modificar la fundamentación jurídica de la pretensión, ante la

¹³² STC Exp. N° 0582-2006-PA, del 13 de octubre de 2006, F.J. 3.

¹³³ STC Exp. N° 1231-2002-HC, del 21 de junio de 2002, F.J. 2.

¹³⁴ C. MESÍA RAMÍREZ, *Los Recursos Procesales Constitucionales...*, cit., p.31.

¹³⁵ STC 15/2000. España.

¹³⁶ STC Exp. N° 3741-2004-AA, del 14 de noviembre de 2005, F.J. 24.

omisión u error que el demandante haya cometido en ella, para así calificar el derecho realmente trasgredido en el proceso, no vulnera las facultades que el derecho de defensa le otorga al emplazado. Nosotros creemos; que decir el derecho realmente afectado en un proceso, no le va a impedir al demandado, ejercitar cualquiera de las facultades que le sean propias para poder defenderse de la demanda que se le ha interpuesto, por el contrario, va a tener la posibilidad, frente a un panorama mucho más claro, de decir en su defensa lo que en justicia tenga que sostener. Algunos ejemplos de violaciones del derecho de defensa admitidas por el Tribunal Constitucional son: la no notificación a una de las partes de la resolución en la que se señalaba día y hora para la visita de la causa; el impedimento por el órgano judicial a una de las partes a exponer en forma libre los hechos y el derecho que, a su juicio, han podido coadyuvar a la resolución del conflicto¹³⁷; la sanción penal a una persona por un delito por el que no fue acusada¹³⁸, entre otros. No cualquier anormalidad o irregularidad en la tramitación del proceso, se podrá considerar como una vulneración al derecho de defensa. Esta vulneración sólo se dará cuando tras la irregularidad en su tramitación, se logra que el justiciable quede en estado de indefensión. Si, por cualquier circunstancia, ello no sucede, y el justiciable ha podido ejercer de manera activa su derecho de defensa, entonces, tal irregularidad debe entenderse como sanada y, por tanto, convalidada.¹³⁹ Además, la comprensión y el respeto del contradictorio se entenderán, en función de las características muy particulares del proceso constitucional.¹⁴⁰

¹³⁷ STC Exp. N° 0611-1997-AA, del 02 de setiembre de 1997, F.J. 5.

¹³⁸ STC Exp. N° 1231-2002-AA, del 21 junio de 2002, F.J. 2.

¹³⁹ STC Exp. N° 1428-2002-HC, del 08 de julio de 2002, F.J. 5.

¹⁴⁰ STC Exp. N° 0905-2001-AA, del 14 de agosto de 2002. F.J. 4.

CAPÍTULO III
EL PRINCIPIO PROCESAL CONSTITUCIONAL DE SUPLENCIA DE LA
DEFICIENCIA PROCESAL.
REFLEXIONES DESDE LA NORMA, LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO EN BUSCA DE UNA
PROPUESTA EPISTÉMICA DE ESTRUCTURACIÓN.

1. El principio de suplencia de la deficiencia procesal.

1.1. Concepto.

Un elemento importante a lo largo del desarrollo del presente capítulo, está relacionada con la manera erróneamente indiferenciada con la que los autores que citaremos y las sentencias del Tribunal Constitucional que mencionaremos, utilizan a la suplencia de queja, suplencia de la queja deficiente o suplencia de la deficiencia procesal como si del mismo instituto jurídico se tratara. Es cierto que ni nuestro Supremo Tribunal, ni los especialistas en el tema, han reparado en tal asunto. ¿Por qué estas denominaciones jurídicas no son lo mismo?; recordemos que el principio de la suplencia de queja o suplencia de la queja deficiente es de origen mexicano y cuenta con una serie de características, facultades y restricciones que le son propias, además de ser cronológicamente anterior a nuestra figura jurídica quien, por varias cuestiones relacionadas a su estructura y composición, termina por ser capaz de desenvolverse en un espacio jurídico de manera muy particular y diferente al instituto mexicano, con quien seguro comparte algún tipo de relación, pero que a todas luces no acredita su total paridad. Entonces, ¿cómo no diferenciar la manera en que se debe nominar a un principio jurídico del otro, si son esencialmente distintos?. Por tal razón, nosotros creemos que la forma correcta de nombrar a nuestra figura jurídica es como suplencia de la deficiencia procesal, por lo que sería importante pensar que, en las sentencias del Tribunal Constitucional como en los argumentos esgrimidos por los autores, cada vez que se use suplencia de la queja deficiente o suplencia de queja, en realidad es suplencia de la deficiencia procesal.

Otro punto importante, que se debe dejar claro, así como lo hicimos en el capítulo anterior, es que la pretensión engloba a los sujetos del proceso, a la causa petendi (fundamentos fácticos y fundamentos de derecho) y al petitório. El motivo que

nos impulsa a dejar constancia de lo sugerido anteriormente, es que tanto en la jurisprudencia como en la doctrina se suele usar de manera indistinta el término pretensión con el de petitorio, cuestión que sin duda alguna genera graves problemas al momento de interpretar y comprender las implicancias de la suplencia de la deficiencia procesal. Esto a su vez, nos va a permitir mostrar con mayor pulcritud y claridad jurídica, nuestra postura respecto a este noble principio del derecho procesal constitucional.

En el Perú, la historia de la suplencia de la deficiencia procesal tiene su origen en el artículo 7 de la Ley N° 23506 (Ley de Hábeas Corpus y Amparo) publicado el 08 de diciembre de 1982 y cuyo texto es el siguiente: *“El juez deberá suplir las deficiencias procesales en que incurra la parte reclamante, bajo responsabilidad. Igualmente dará preferencia en la tramitación a las acciones de garantía”*.¹⁴¹ Posteriormente ésta primera disposición normativa es complementada por el Artículo 9 de la Ley N° 25398 (Ley que complementa las disposiciones de la Ley N° 23506 en materia de Hábeas Corpus y Amparo) publica el 06 de febrero de 1992 y cuyo texto es el siguiente: *“Si el actor incurre en error al nominar la garantía constitucional (acción de hábeas corpus o acción de amparo) que de conformidad con el artículo 295 de la constitución Política del Perú, quiere ejercer, el juez ante quien ha sido presentada se inhibirá de su conocimiento y la remitirá de inmediato al competente, bajo responsabilidad, para los efectos de la sustanciación y resolución correspondientes.”*¹⁴² Acerca de éste segundo alcance legal nos referiremos más adelante, en un apartado que hemos separado especialmente para tratar sobre la conversión procesal. Pero en relación al artículo 7 de la Ley N° 23506 en la actual legislación procesal constitucional, no existe ningún dispositivo estrictamente igual al transcrito, contrario sensu el Tribunal Constitucional y la mayoría de autores considera su vigencia de manera implícita.

Las opiniones respecto a la condición implícita de la suplencia de la deficiencia procesal son variadas. Mientras que unos como Samuel Abad Yupanqui en el texto de García Chávarri señalan que la suplencia de la queja vendría a ser expresión exclusiva del principio procesal constitucional de dirección judicial del

¹⁴¹ Artículo 7 de Ley N° 23506 (Ley de Hábeas Corpus y Amparo) publicado el 08 de diciembre de 1982

¹⁴² Artículo 9 de la Ley N° 25398 (Ley que complementa las disposiciones de la Ley N° 23506 en materia de Hábeas Corpus y Amparo) publica el 06 de febrero de 1992.

proceso¹⁴³, y nos dice que en términos procesales, constituye una manifestación del principio de dirección judicial del proceso que brinda un rol más activo al juez y que permita identificar a un sistema como publicístico.¹⁴⁴ Otros, de criterio diferente como el de Castillo Córdova aseguran que es una derivación del iura novit curia que el juez deba subsanar los errores en los que pueda incurrir el demandante durante la tramitación del proceso constitucional.¹⁴⁵ De similar criterio es Gerardo Eto Cruz quien también afirma que el Tribunal Constitucional ha reconocido ya en su jurisprudencia que la suplencia de la queja deficiente se encuentra implícito o subsumido dentro de la figura del iura novit curia prevista en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.^{146, 147 & 148} Sin embargo, para Carlos Mesía la llamada “suplencia de la queja procesal deficiente” y de las “deficiencias procesales” están implícitas en los principios procesales consagrados en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.¹⁴⁹ En otras circunstancias, el Tribunal Supremo, asegura que el principio de la suplencia de la queja, en tanto principio implícito de nuestro Derecho Procesal Constitucional, es pues subyacente a los artículos II y VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, por lo que puede efectuar correcciones sobre el error o la omisión en la que incurre el demandante en el planteamiento de sus pretensiones, tanto al inicio del proceso como en su decurso.^{150, 151 & 152} Esto último es ratificado de alguna forma por Eto Cruz cuando nos dice que la suplencia de la queja es una figura procesal en mérito del cual el juez está obligado a suplir los errores u omisiones de naturaleza procesal en que incurre el actor como justiciable demandante. Incluso no sólo es atributo del juez de primera instancia, pues el órgano jurisdiccional que conoce en grado de apelación o incluso el Tribunal Constitucional es el que puede, al momento de fallar, aplicar la

¹⁴³ A.GARCÍA CHÁVARRI, “La Transformación de un Proceso Constitucional en Otro. Anotaciones sobre la Figura Procesal Constitucional de la Reconversión”..., cit., p.42.

¹⁴⁴ S. ABAD YUPANQUI, *El Proceso Constitucional de Amparo*..., cit., pp.190-191.

¹⁴⁵ L.CASTILLO CÓRDOVA, *Comentarios al Código Procesal Constitucional*..., cit., p. 97.

¹⁴⁶ G. ETO CRUZ, *El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano*..., cit., p. 213.

¹⁴⁷ STC Exp. N° 000431-2007-PA, del 27 de marzo de 2010, F.J. 6.

¹⁴⁸ STC Exp. N° 05761-2009-HC, del 13 de mayo de 2010, F.J.18.

¹⁴⁹ C. MESÍA RAMÍREZ, *Exégesis del Código Procesal Constitucional. Tomo I*..., cit., p. 148.

¹⁵⁰ STC Exp. N° 05637-2006-PA, del 12 abril del 2007, F.D.14.

¹⁵¹ STC Exp. N° 00431-2007-PA, del 27 de marzo de 2010, F.J.6.

¹⁵² STC Exp. N° 933-2000-AA, del 12 de junio de 2002, F.J. 2.

suplencia procesal, a fin de evitar mayores dilaciones o simplemente devolver el expediente para que el juez se pronuncie nuevamente.¹⁵³ Posteriormente, es nuestro mismo Supremo Intérprete quien asume la posición de que la suplencia de la queja deficiente se deriva del principio teleológico enunciado en el artículo II del Código Procesal Constitucional, conforme a él tiene el juez constitucional el deber de enmendar el petitorio de la demanda cuando éste ha sido erróneamente formulado o expuesto en forma ambigua u obscura.¹⁵⁴ Señala además, que el juez tiene el deber de examinar todos y cada uno de los actos que eventualmente resulten lesivos de los derechos constitucionales del accionante, si del contexto de hechos expuestos y acreditados por él se infiere fehacientemente la existencia objetiva y concreta de los mismos. Este imperativo de suplencia de queja deficiente, constituye para este supremo intérprete de la Constitución un principio implícito de nuestro derecho procesal constitucional, que se deriva de la finalidad de los procesos constitucionales. Continúan nuestros magistrados constitucionales y dicen, la vigencia de este principio en nuestro ordenamiento se sustenta, además, en el preeminente valor de los derechos cuya tutela se pretende y por cuanto el principio pro actione impone que el juez constitucional, en lugar de optar por alternativas que supongan el estrechamiento del derecho de acceso a la justicia, máxime a la justicia constitucional, debe acoger aquéllas que impliquen, por el contrario, una optimización o mayor eficacia del mismo.^{155 & 156}

Para nosotros, el principio de suplencia de la deficiencia procesal está implícito en los artículos II, III y VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; pero no como un elemento plenamente subyacente a todos los otros principios del proceso constitucional, sino, como uno más de ellos, que para alcanzar la plenitud en el ejercicio de sus capacidades necesita del vínculo y el respaldo de alguno de los otros principios consagrados en el Código Procesal Constitucional. Es decir, la suplencia de la deficiencia procesal está presente en las capacidades jurídicas que tienen algunos de los demás principios y que cuando estos, conjuntamente despliegan sus capacidades, es que recién la suplencia de la deficiencia procesal nace

¹⁵³ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II...*, cit., p. 23.

¹⁵⁴ STC Exp. N° 4885-2007-PHD, del 18 de agosto del 2008. F.D. 5.

¹⁵⁵ STC Exp. N° 00250-2008-PHD, del 31 de enero de 2008. F.D. 5.

¹⁵⁶ STC Exp. N° 051-2001-HC, del 31 de enero de 2001. F.D. 4.

mostrando todas sus facultades, obviamente existen ciertas cualidades especiales que hacen notar que se trata de ella y no de otro principio, así lo veremos más adelante. Por otro lado, lo que sucede con los fines esenciales del proceso constitucional que señala el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, es que cumplen el rol de ser la causa jurídica que da el sustento o fundamento suficiente que permite justificar el papel de la suplencia de la deficiencia procesal en el espectro jurídico nacional. No debemos olvidar que el respeto a la supremacía constitucional garantiza no sólo un orden político-institucional que da sentido a un Estado democrático, sino que también procura una estructura jurídica, que privilegia con total razón, ciertos derechos y obligaciones frente a otros. Por lo que el respeto a los derechos fundamentales de la persona y su natural dignidad, vienen a constituir la finalidad o el fundamento último de nuestro sistema jurídico.

Pero también existen otras reflexiones que intentan explicar la condición implícita de la suplencia de la deficiencia procesal, se dice, que su vigencia no le viene dada de la norma legal, sino de otros fundamentos. En primer lugar, porque resulta siendo exigido necesariamente para la vigencia de los principios procesales expresamente reconocidos.¹⁵⁷ Lo que nosotros creemos, es que el verdadero vínculo entre la suplencia de la deficiencia procesal y los demás principios del proceso constitucional, se sujeta a que son estos últimos los que infunden fuerza y validez jurídica a nuestra suplencia de la deficiencia procesal y no así al revés; recordemos que el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional reconoce y garantiza no sólo la existencia de ciertos principios para el proceso constitucional, sino que también se constituye como fundamento que valida sus características, además de sus aportes y valor jurídico dentro del proceso de las garantías constitucionales. Un segundo fundamento lo conforma la propia naturaleza de los procesos constitucionales y, en definitiva, la plena, eficaz y oportuna protección de los derechos fundamentales; por lo que una buena aplicación del referido principio haría realidad el trámite rápido y eficaz de las distintas acciones de garantía, exigido por la propia naturaleza de lo que es objeto de protección: los derechos fundamentales.¹⁵⁸ Esta interpretación es posible porque el deber procesal de suplencia que tiene el juez se sustenta en el rango

¹⁵⁷ STC Exp. N° 4067-2005-PHC, del 8 de agosto de 2005, F.J.6.

¹⁵⁸ L.CASTILLO CÓRDOVA, *Comentarios al Código Procesal Constitucional...*, cit., p.62.

constitucional de los derechos que se protegen a través de este tipo de procesos.¹⁵⁹ O dicho con otras palabras la vigencia de este principio en nuestro ordenamiento se sustenta, además, en el preeminente valor de los derechos cuya tutela se pretende.¹⁶⁰ El Tribunal Constitucional ha señalado que el deber de suplir los actos defectuosos es exigible ineludiblemente en el caso del juez constitucional, debido a que por medio de los procesos constitucionales se protegen derechos fundamentales.¹⁶¹ Por estas razones el hecho de que no haya sido recogido en el texto de la ley, no ha significado su derogación, sino que en la medida que favorece que el proceso constitucional logre cumplir realmente su cometido, y en la medida que favorece la especial protección jurídica de la que es objeto los derechos fundamentales, debe ser considerado un principio plenamente vigente tal y como lo ha hecho el Tribunal Constitucional después de entrada en vigor el Código Procesal Constitucional siempre en vinculación con otros principios del proceso constitucional.¹⁶²

Ante la aparente sencillez conceptual de la suplencia de la deficiencia procesal en el dispositivo normativo, y su supuesto desvanecimiento en la legislación actual, la doctrina y la jurisprudencia han ensayado una serie de ideas estructuradas sobre la inclinación conceptual del presente principio.

En la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley que sirvió de base a la Ley N° 23506 se sostuvo que la suplencia de las deficiencias procesales no autoriza a que el Juez altere los términos de la demanda (pretensión, causa petendi). La intención del legislador de entonces fue evitar que el apego al formalismo ritual de nuestros jueces, derivado de una ideología en exceso privatística del proceso y la existencia de una legislación procesal anticuada, se utilizara como pretexto para evitar pronunciarse sobre el fondo de la controversia, no obstante tratarse de deficiencias que podían ser subsanadas dentro del mismo proceso.¹⁶³ Entonces, desde el anteproyecto de la ley N° 23506 está claro que es tarea en estricto del iura novit curia y no de la suplencia de la deficiencia procesal subsanar errores o deficiencias a nivel de la causa petendi.

¹⁵⁹ STC. Exp. N°. 1120-2002-HC, del 20 de junio de 2002, F.J.3.

¹⁶⁰ STC. Exp. N°. 0790-2000-AC, del 22 de enero de 2001, F.J.3.

¹⁶¹ STC. Exp. N°. 0569-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J.3.

¹⁶² STC. Exp. N°. 4080-2004-AC, del 28 de enero de 2005, F.J.3 y 4.

¹⁶³ La Exposición de motivos del Anteproyecto de Ley de Habeas Corpus y Amparo, en A. BOREA ODRÍA, Evolución de las Garantías Constitucionales, Fe de Erratas, Lima, 1999, p. 591.

Posteriormente se empiezan a postular varias definiciones que a pesar de guardar cierta verdad en sus contenidos, terminan por pecar de exceso o defecto en sus estructuras. Pero si hay algo que se ha dicho con justicia es que la suplencia de la queja deficiente es un principio procesal constitucional que impone el deber que tiene el juez de enmendar las omisiones o deficiencias en la que, eventualmente, haya incurrido el demandante, ello con el propósito de que se pueda facilitar el acceso a la tutela jurisdiccional.¹⁶⁴ Entonces; es un principio del proceso constitucional y no uno de carácter propiamente constitucional como el de la suplencia de la queja deficiente.

Así, haciendo referencia a Samuel Abad Yupanqui; Carlos Mesía señala que el término de suplencia de la queja deficiente está referida a aquel supuesto en que el afectado no fue lo suficientemente explícito en su pretensión, ya sea por error o por ignorancia y que en tal caso el juez no ha de limitarse a lo expresamente mencionado por el actor sino que de percatarse de otra agresión deberá intervenir y hacer efectiva su protección.¹⁶⁵ Opinamos que no sólo el error o la ignorancia, sino también la omisión del derecho realmente agredido, es igualmente susceptible de ser enmendado por aplicación de dicho principio. Ya que si la deficiencia implica la ausencia o falta de algo, porque esta última condición no podría generarse por una omisión y no sólo por error o ignorancia como deja sentado el presente autor; pues entendemos que la omisión también genera la obligación de integrar o completar algo.

En otro momento se señala que éste principio de derecho procesal constitucional significa la imposición al juez que conoce de un proceso constitucional, del deber de enmendar o suplir deficiencias u errores en la tramitación de la demanda constitucional. En palabras del Tribunal Constitucional, en virtud de mencionado principio, se deberán enmendar o suplir las deficiencias u errores en que incurran las partes, de modo que se garantice una adecuada protección a los derechos transgredidos.¹⁶⁶ Sentimos que nuestro Tribunal Constitucional comete un error en afirmar que la suplencia de la deficiencia procesal es un principio aplicable tanto a favor del demandante como del demandado, como si de la suplencia de la queja deficiente mexicana se tratara, cuando en realidad, y así lo señala la misma Ley N°23506, éste principio es exclusivamente a favor del reclamante. Por lo que la

¹⁶⁴ STC Exp. N° 933-2000-AA, del 12 de junio de 2002, F.J. 2.

¹⁶⁵ C. MESÍA RAMÍREZ, *Exégesis del Código Procesal Constitucional. Tomo I...*, cit., p. 94.

¹⁶⁶ STC Exp. N° 0024-2005-Q, del 28 de febrero de 2005, F.J.4.

condición conceptual de la ley antes señalada, debe ser respetada, no olvidemos que así se le considera implícita en nuestro ordenamiento jurídico actual.

Un criterio coherente, respecto a la facultad que tiene la suplencia de la deficiencia procesal para poder corregir cuestiones de orden sustancial, además de los fundamentos que respaldarían tal capacidad, lo encontramos en los siguientes argumentos. Para Gerardo Eto Cruz dentro de los poderes que tiene el juez constitucional a la hora de tramitar y decidir se encuentra, el de suplir las deficiencias formales en que hubiera incurrido el demandante a la hora de interponer su demanda.¹⁶⁷ Nuestro Tribunal Constitucional también afirma que “la suplencia atañe a los actos procesales deficientes y, por tanto, a aspectos estrictamente formales, pero no necesariamente desprovistos de repercusiones de orden sustancial. Tal facultad es otorgada a los jueces constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico, para adecuar su pretensión a fin de otorgar protección constitucional al quejoso, en aquellos casos en los que se advierta un error o una omisión en el petitorio.”¹⁶⁸ Y cuando ello devenga de una voluntad implícita del recurrente a pesar de no haberla planteado correctamente en la demanda.¹⁶⁹ & ¹⁷⁰ Y ello debe ser así, en atención a la finalidad de los procesos constitucionales; es decir, la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales que le imponen al juez constitucional ese poder-deber de corregir o enmendar los errores en los que ha incurrido el demandante.¹⁷¹ Al margen de que la suplencia de queja otorga al juez la facultad de interpretar tanto la pretensión invocada en el sentido de lograr la mayor tutela del derecho fundamental lesionado, como la identificación del propio acto lesivo. La deficiencia procesal a suplir también puede comprender, cabalmente, un error relativo a un presupuesto procesal como es el que respecta a la competencia y, en tal sentido, susceptible de ser oportunamente enmendado.¹⁷² Por lo que convertir, un proceso constitucional de la libertad en otro, es la principal capacidad que individualiza y distingue a nuestra suplencia de la deficiencia procesal. En términos del Tribunal

¹⁶⁷ G. ETO CRUZ, *El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano...*, cit., p.212.

¹⁶⁸ STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J. 3.

¹⁶⁹ STC Exp. N° 2397-2003-AA, del 15 de octubre de 2004, F.J. 4.

¹⁷⁰ STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J. 8.

¹⁷¹ STC Exp. N° 00431-2007-PA, del 27 de marzo de 2010, F.J. 6.

¹⁷² C.SENISSE ANAMPA, “El principio de suplencia de queja deficiente” ..., cit., p. 20.

Constitucional: así a diferencia de los jueces ordinarios, quienes en la mayoría de los casos mantienen una vinculación rígida con la ley, el deber de suplir los actos defectuosos es exigible ineludiblemente en el caso del juez constitucional, debido al deber especial de protección de los derechos fundamentales que informa los procesos constitucionales.^{173, 174 & 175} Pues en el derecho Constitucional y especialmente en la sustentación de las acciones de garantía, aquella suerte de procedimiento estrictamente privado en que el juez no se responsabiliza por las deficiencias procesales, no tiene lugar.¹⁷⁶ Pero también nuestro máximo intérprete constitucional ha recurrido a la predictibilidad en el fallo como criterio para la adecuación de los procesos constitucionales, es decir, “(...) que pese al error en la tramitación de la demanda, el Colegiado no debe considerar correcto (...), debido a la predictibilidad del fallo, que se desestime la demanda (...). Tal decisión, no sólo sería contraria con los fines esenciales de los procesos constitucionales, cuales son garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, sino que terminaría dando prevalencia a las cuestiones formales sobre la oportuna protección de los derechos.”¹⁷⁷

Sería oportuno, recordar en este momento, al derecho de protección judicial. Bajo éste criterio el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de referir que detrás del establecimiento de los procesos constitucionales de la libertad, se encuentra implícito el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos o, lo que es lo mismo, el derecho de recurrir ante un tribunal competente frente a todo acto u omisión que lesione una facultad reconocida en la Constitución o en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. De conformidad con la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicho derecho constituye parte del núcleo duro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en ese sentido, no puede obstaculizarse irrazonablemente su acceso o simplemente impedirse su cabal goce y ejercicio.¹⁷⁸

¹⁷³ STC Exp. N° 0569-2003-AC, de 5 de abril del 2004, F.J. 3

¹⁷⁴ STC Exp. N° 00431-2007-PA, del 27 de marzo de 2010, F.J. 3.

¹⁷⁵ STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J. 3.

¹⁷⁶ STC. Exp. N° 0569-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J. 3-4.

¹⁷⁷ STC Exp. N° 0249-2005-PC, del 8 de marzo del 2007, F.J. 5.

¹⁷⁸ STC Exp. N° 5854-2005-PA, del 08 de noviembre del 2005, F.J. 28.

Un criterio bastante complicado de canalizar es el de Abad Yupanqui, quien señala que si bien el amparo está sujeto al principio dispositivo, aquél está matizado por la presencia de la suplencia de la queja, que brinda una activa participación al juzgador, quien de percatarse que la demanda es deficiente deberá de enmendar el error sin hallarse limitado a lo expresamente indicado por el actor. Desde esa perspectiva, el juez del amparo peruano, al momento de sentenciar, no sólo estaría en capacidad de desvincularse de los agravios expresados por el recurrente, sino, incluso, para alterar la pretensión en todos aquellos casos en los que advierta un error o una omisión en el petitum, a fin de brindarle una protección eficaz a los derechos constitucionales que pudieran haber sido lesionados.¹⁷⁹ El mencionado autor en algunos pasajes de su libro relacionados al tema, intenta encontrar la supuesta relación estrecha que existe entre la suplencia de la deficiencia procesal y la suplencia de la queja deficiente, pero a pesar de que exista cierto parentesco, el criterio vinculante que utiliza no nos parece el más correcto. Tiende a pensar que la suplencia de la queja deficiente esta dentro de la suplencia de la deficiencia procesal, cuando los alcances o facultades de éste último, son en un aspecto, técnicamente más limitados, y en otro, diferentes. Es así que nuestro principio sólo tiene efectos a nivel del petitum, y no a nivel de toda la pretensión como sí lo tiene la suplencia de la queja deficiente. De igual forma la suplencia de la queja deficiente no podría convertir un proceso constitucional en otro, cosa que sí podría hacer la suplencia de la deficiencia procesal así como lo veremos y explicaremos más adelante. Finalmente, en el Código se puede y debe exigir determinados presupuestos, formalidades, requisitos que orientan a un sistema privatístico; pero ello no significa que ha de preferirse las normas de tipo privatístico por encima de la esencia del sistema que inspira este Código, es decir, el publicístico y más aún tratándose de un Código que instrumentaliza sistemáticamente las garantías de la defensa de la Constitución, el juez deberá relativizar dichas formalidades o exigencias a fin de concretizar la esencia misma de los procesos constitucionales.¹⁸⁰ La suplencia de la queja se enmarca en un proceso preeminentemente publicístico ya que existe una participación más activa del juez en el proceso, esto se debe a que la dirección del proceso recae en el juez, en lugar del

¹⁷⁹ S. ABAD YUPANQUI, El Proceso Constitucional de Amparo en el Perú: Un análisis desde la Teoría General del Proceso. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*. N° 85, México, 1996, pp. 48-49.

¹⁸⁰ STC. Exp. N° 05761-2009-PHC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 22.

papel de mero espectador que tenía en el sistema privatístico, sino que ahora se busca asegurar la eficacia y respeto de los derechos, así como cumplir con la exigencia de buscar la paz social. De esta manera, se suple la actividad de los justiciables para así garantizar que el proceso constitucional cumpla sus fines, es decir, garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.¹⁸¹ Entonces, lo que creemos es que el proceso en general está regido por un sistema mixto, pero con predominio del sistema publicístico que no hace otra cosa que garantizar la plena eficacia jurídica de la suplencia de la deficiencia procesal.

Continuando con nuestro principio, se ha dicho que el juzgador constitucional se encuentra obligado a suplir las deficiencias procesales en que incurra la parte reclamante, bajo responsabilidad; dicha facultad es conocida por la doctrina como el principio de suplencia de queja. La suplencia de las deficiencias procesales comprende la obligación del juez de subsanar los errores en que pueda incurrir el demandante.¹⁸² Como ya hemos explicado a inicios del capítulo anterior, estos intentos de generar una relación lógica entre ambos términos resultan siendo innecesarias, las razones son por origen, capacidades y limitaciones. Pero lo que sí debemos recalcar es que la suplencia de la deficiencia procesal está destinada a respaldar los intereses del demandante sin perjudicar de manera ilegal o antijurídica los del demandado.

También se ha dicho que la incorporación de la institución de la suplencia de la deficiencia procesal brinda una activa participación al juzgador, quien de percatarse que la demanda es deficiente deberá enmendar el error sin hallarse limitado a lo expresamente indicado por el actor. Desde esa perspectiva, el juez constitucional, al momento de sentenciar, no sólo estará en capacidad de desvincularse de los agravios expresados por el recurrente, sino que incluso podrá interpretar la pretensión (llegando incluso a modificar) en todos aquellos casos en los que advierta un error o una omisión en el petitum. Este libre margen de actuación busca justificarse en la necesidad de otorgar una protección eficaz a los derechos fundamentales que pudieran haber sido lesionados.¹⁸³ Pero también se ha dicho que lo que este principio importa es que (...) el juez debe calificar los hechos expuestos por las partes y la relación sustancial, prescindiendo de la calificación efectuada por los litigantes. Debe determinar la causa

¹⁸¹ C.SENISSE ANAMPA, “El principio de suplencia de queja deficiente”..., cit., p. 17.

¹⁸² STC Exp. N° 509-2000-AC, de 24 de abril de 2001, F.D. 6.

¹⁸³ C.SENISSE ANAMPA, “El principio de suplencia de queja deficiente”..., cit., p. 22.

petendi y siempre que no se aparte de los hechos afirmados ni modifique su objeto, puede otorgar lo pedido sobre la base de una calificación de la causa distinta a la que hicieron las partes (...).¹⁸⁴ Es cierto que en el principio de suplencia de queja (...) el juez constitucional puede efectuar correcciones sobre el error o la omisión en la que incurre el demandante en el planteamiento de sus pretensiones, (...) pero debemos remarcar que su ámbito de acción se limita al petitorio.¹⁸⁵ & ¹⁸⁶ Es decir; el juez constitucional eventualmente podrá transcender lo taxativamente planteado en la demanda siempre que su finalidad sea la de otorgar una mejor o adecuada protección a los derechos constitucionales siempre que esta necesidad dimane del propósito implícito contenido en su texto, aún cuando no haya sido expuesto correctamente. Es por ello que la facultad de suplir la queja deficiente no implica que el juez constitucional aplicando este principio se encuentre autorizado a crear ex novo un agravio que no haya sido cuestionado en los hechos de la demanda o variar los hechos expuestos con un propósito distinto al perseguido por el demandante al formular su pretensión.¹⁸⁷

Existen varias razones que logran explicar las facultades que se le atribuyen a la suplencia de la deficiencia procesal. Algunas ya las hemos visto, pero si cabe repetir o mencionar algunas nuevas, entre ellas tenemos a que los jueces constitucionales tienen del deber especial de tutelar los derechos fundamentales incluso adecuando las formalidades del proceso,¹⁸⁸ además de que es imposible olvidar que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y su dignidad.¹⁸⁹ De ahí que los procesos constitucionales deben orientarse a garantizar su efectiva vigencia. Además; la progresiva protección de los derechos fundamentales faculta al Colegiado para decir derecho, o corregir deficiencias u omisiones cuando ello se deduzca de los hechos fácticos y jurídicos de cada caso en particular (en éste último caso, siempre a favor del quejoso y nunca en contra de él), resultando congruente con el ideal de vida de un Estado democrático, donde la aspiración de un máximo reconocimiento a la

¹⁸⁴ STC Exp. N° 05761-2009-PHC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 21.

¹⁸⁵ L. ZAVALA REVILLA, "Criterios para la conversión de un proceso constitucional...", cit., p.19.

¹⁸⁶ C.SENISSE ANAMPA, "El principio de suplencia de queja deficiente"..., cit., pp. 19 – 20.

¹⁸⁷ STC Exp. N° 05761-2009-PHC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 6.

¹⁸⁸ C.SENISSE ANAMPA, "El principio de suplencia de queja deficiente"..., cit., p. 15.

¹⁸⁹ Artículo 1 de la Constitución Política del Perú de 1993.

protección de derechos está inspirada en los valores de dignidad, igualdad y justicia que irradian todo el ordenamiento jurídico.¹⁹⁰

Hay quienes se atreven a hacer este otro análisis, que si bien no está lejos de la verdad no satisface plenamente la noción de la suplencia de la deficiencia procesal. Se dice que la suplencia de las deficiencias procesales comprende la obligación del juez de subsanar los errores en que pueda incurrir el demandante.¹⁹¹ Pero mientras que unos creen que el deber de suplir la deficiencia procesal le permite al juez corregir un error en la pretensión si es que ello surge de la demanda.¹⁹² Otros suponen, que el error o la omisión pueden ser a lo largo del proceso por lo que el juez podrá de considerarlo pertinente para cumplir los fines del juicio, hasta llegar a suplir el petitorio,¹⁹³ es decir; puede recaer sobre el petitorio, cuando este ha sido erróneamente formulado o expuesto en forma ambigua u oscura¹⁹⁴ o sobre el error o la omisión en la que incurre el demandante en el planteamiento de sus pretensiones, tanto al inicio del proceso como en su decurso.¹⁹⁵ Se dicen pues muchas cosas de la suplencia de la deficiencia procesal, entre ellas que los errores que pueden ser objeto de corrección a través del principio de queja deficiente también pueden ser los relacionados con la identificación del derecho fundamental agredido,¹⁹⁶ o con los actos lesivos¹⁹⁷.

Nosotros sí creemos en la suplencia de la deficiencia procesal, y en su vigencia implícita, pero no sólo porque así lo señala el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, que es fuente del derecho, o porque no exista sentencia alguna en la que se desmienta o contradiga su validez, como sí lo hay con otros criterios referentes a éste principio; sino porque su presencia brota inherente del apartado legal del derecho procesal constitucional y se complementa con la jurisprudencia, no precisamente por una exigencia propia de la estructura legal, sino por una necesidad real que tiene la sociedad de encontrar justicia de manera sencilla y oportuna.

¹⁹⁰ STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 05 de abril de 2004, F.J. 17.

¹⁹¹ STC Exp. N° 0509-2000-AC, del 24 de abril de 2001, F.J. 6.

¹⁹² STC Exp. N° 1426-2001, El Peruano, separata jurisprudencia, el 17 de setiembre del 2001, pp. 4-3.

¹⁹³ C.SENISSE ANAMPA, “El principio de suplencia de queja deficiente”..., cit., p. 15.

¹⁹⁴ STC Exp N° 4885-2007-PHD del 18 de agosto de 2008, F.J. 5.

¹⁹⁵ STC Exp. N° 5637-2006-PA del 12 de abril de 2007, F.J. 14.

¹⁹⁶ STC Exp. N° 8078-2005-PA del 25 de agosto 2006, F.J.2.

¹⁹⁷ STC Exp. N° 2397-2003-AA del 15 de octubre de 2004, F.J.4.

Como ya lo habíamos señalado, la esencia de la suplencia de la deficiencia procesal recorre los párrafos del artículo II, III y VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Su presencia jurídica, es más parecida a una especie de destellos continuos e incontrolables, que brotan de las facultades que le son propias a otros principios, y que unidos entre ellos, más los ajustes que ofrece la jurisprudencia constitucional, conciben a un principio especial y distinto de aquellos que al relacionarse, contribuyeron en la formación de tal estructura.

El rigor conceptual que exige el principio de suplencia de la deficiencia procesal, está necesariamente condicionado a dos cualidades que representan su esencia jurídica. La primera, es aquella que le otorga al juez constitucional la facultad de corregir el petitorio cuando por error, omisión o ignorancia, el demandante reclama o exige, la protección o reivindicación de un derecho deficiente o erróneamente invocado, en vez de otro. La segunda, es la potestad que tiene el tercero imparcial de convertir un proceso constitucional en otro, remitiendo inmediatamente la demanda al juez competente, cuando la necesidad jurídica así lo amerite. Es de la misma atmósfera del proceso, en especial a aquella relacionada con los fundamentos fácticos de la pretensión, los que admiten que se desprenda honesta y naturalmente las condiciones que permiten identificar que el derecho que se alega vulnerado por el demandante no es el correcto o que el juez y el proceso constitucional al que se acudió no son los competentes, y que bajo estas condiciones merecen ser subsanadas.

Sin embargo, las cualidades que acabamos de precisar, necesitan de los otros principios que alimentan y sustentan el proceso constitucional, para que actúen como una especie de garantes del pleno ejercicio de las facultades que acabamos de precisar en el párrafo inmediatamente anterior a éste. Ésta camaradería implícita, que consolida la fuerza del argumento jurídico de la suplencia de la deficiencia procesal, no sólo sugiere una colaboración recíproca entre ciertos principios del derecho procesal constitucional y la suplencia de la deficiencia procesal, sino, que además, tales principios jamás llegan a perder su natural fuerza jurídica individual.

Entonces, la mecánica de la suplencia de la deficiencia procesal implica que, preferentemente en la demanda (porque con la finalidad de otorgar una tutela efectiva y urgente de los derechos fundamentales, resulta de suma importancia que los procesos constitucionales sean iniciados correctamente) o en cualquier etapa del

proceso de las garantías constitucionales, ante el error, omisión o ignorancia del demandante al procurar la protección o reivindicación de un derecho deficiente o erróneamente invocado en el petitorio, o ante una circunstancia que despierte el deber del juez constitucional de remitir la demanda al juez verdaderamente competente; se genera la obligación de que tales deficiencias deban ser atendidas y corregidas por el tercero constitucional e imparcialmente implicado. Por lo que cuando se presenta, alguna escena jurídica como la anteriormente detallada, todos los principios descritos en el artículo III y VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional pareciesen activarse con el propósito de dar solución a las trabas jurídicas que solamente podrían ser reparadas por la suplencia de la deficiencia procesal. Por lo que al actuar estos principios de manera individual, sus capacidades se tornan insuficientes para que el derecho verdaderamente vulnerado se postule de manera clara y coherente, o para acceder a la posibilidad de convertir un proceso constitucional en otro. Entonces; dichos principios y sus facultades, pareciesen converger en uno solo, aunque lo que en verdad sucede es que se genera un nivel de relación y correspondencia tan estrecha entre éstos principios que parecen hasta abandonar su origen individual para convertirse sólo en suplencia de la deficiencia procesal. En realidad es que, en términos generales, nuestro principio sí va a contar con todas las capacidades de los artículos III y VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, pero particularmente, y gracias a los principios anteriormente señalados, es que recién va a poder desplegar plenamente sus capacidades que en estricto le son propias; como su capacidad de corregir el petitorio o poder convertir un proceso constitucional en otro, y así generar no sólo una coherencia jurídica dentro del proceso, sino proteger o reivindicar el derecho realmente vulnerado o que el proceso constitucional invocado sea el correcto y este sujeto al juez ciertamente competente. Es decir, que mientras los principios del proceso constitucional regulados en el artículo III y VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se activan con la intención o finalidad de dar solución a un problema jurídico relacionado con derechos mal invocados o con procesos constitucionales que devienen en defectuosos por incompetencia; y que ante tales circunstancias, estos principios no logran subsanar dicho escenario jurídico de forma individual, es que de manera conjunta y manteniendo aún sus facultades activas, se convierten en los responsables del

nacimiento de la suplencia de la deficiencia procesal que lo que finalmente va hacer es, sustentado por los otros principios, desplegar sus capacidades que le son en estricto propias, y va a terminar por completar aquello que era necesario para procurar que las necesidades jurídicas que se presentaron, logren alcanzar la tutela efectiva de sus derechos por medio de una coherente, oportuna y justa solución.

Finalmente, la suplencia de la deficiencia procesal, su estructura y sus competencias, se fundamentan en el hecho de que las cuestiones de fondo son siempre más importantes que las formalidades que marca el derecho procesal, y más aún, en éste tipo de procesos, donde lo que se busca proteger y reivindicar es la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales regulado en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional como fines del proceso constitucional. Pero tampoco debemos olvidar que el fin supremo de la sociedad y del Estado democrático, es garantizar no sólo una jerarquía normativa o una organización coherente de la estructura y competencias de los poderes e instituciones públicas de nuestro país; además de otros aspectos que se ven relacionados con temas políticos, sociales, económicos y estrictamente jurídicos que tienen el carácter de ser fundamentales y de interés general; sino que también se busca alcanzar criterios coherentes de igualdad y justicia que permitan principalmente contribuir en la defensa de la persona humana y su dignidad.

Lo que buscamos es acabar con aquello que parece ya “natural en el mundo de los argumentadores por recibo, es el lado oscuro de la vida: esa capacidad espantosa de defender con ardor aquello que no se cree, de gastar oratoria teatral atacando el punto de vista que, en el fondo, se sabe verdadero...”¹⁹⁸ y es en ese sentido que sería carente de lógica rechazar un pronunciamiento de fondo o, lo que es peor, emitir uno en contra, cuando esta evidenciada en los hechos la vulneración de un derecho, y se entiende que lo que se busca es la protección o restauración del mismo, aún cuando el petitorio se plantee de manera incorrecta. En ese orden de ideas, en caso de que la pretensión no represente per se el derecho sustantivo que se invoca en la demanda, y devenga simple y llanamente un acto de declaración de voluntad, se encuentra plenamente justificado (e incluso avalado legalmente) la actuación del

¹⁹⁸ C. HILDEBRANDT CHAVÉZ, “El derecho y el Revés”, en *Una piedra en el zapato (columnas de opinión 2006-2011)*, Tierra Nueva, Perú, 2011. p. 258.

Tribunal Constitucional para hacer valer la protección del derecho que realmente surge del análisis del caso.¹⁹⁹

1.2. Alcances del principio de suplencia de la deficiencia procesal.

Un sector de los que estudian y hacen derecho, ha tenido a bien reconocerle a la suplencia de la deficiencia procesal todas las capacidades que la norma le ha atribuido, mientras que otros, han preferido cuestionar sus alcances al proponer una serie de límites procesales y sustanciales, que de no ser respetados generarían graves alteraciones y desequilibrios jurídicos dentro del proceso, por lo que la aplicación de la suplencia de la deficiencia procesal, sin ningún tipo de cuestionamiento ni censura, traería más complicaciones que remedios jurídicos.

Entre los principales temas que entran en debate a la hora de determinar los alcances de la suplencia de la deficiencia procesal, está el de si su capacidad de convertir un proceso constitucional en otro, sólo se restringen a los procesos constitucionales de la libertad, o si por el contrario, la suplencia de la deficiencia procesal también actúa sobre los procesos constitucionales orgánicos.

Uno de los argumentos que se utiliza para defender la tesis de que la conversión procesal sólo debe ser aplicado sobre los procesos constitucionales de la libertad, señala que conforme al diseño de nuestra jurisdicción constitucional (dual o paralela), la tramitación de los procesos constitucionales, cuanto menos los que conforman lo que Mauro Cappelletti denominó jurisdicción constitucional de la libertad, tienen el carácter de compartidos, esto es, su tramitación en primera y segunda instancia son competencia de los jueces del Poder Judicial, llegando a ser de conocimiento del Tribunal Constitucional únicamente para ser resueltos en última y definitiva instancia. Dicho modelo de jurisdicción constitucional se ve reflejado en el código Procesal Constitucional en sus artículos 28 y 51, los que desarrollan el tema de la competencia jurisdiccional, estableciendo que para el proceso constitucional de hábeas corpus el juez competente es el juez Penal, mientras que para los demás procesos constitucionales de la libertad (amparo, hábeas data y cumplimiento) el juez competente es el Juez Civil o Mixto.^{200 & 201} Por lo que esta postura se sustenta, en el

¹⁹⁹ STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 05 de abril de 2004, F.J. 16.

²⁰⁰ STC Exp. N° 05761-2009-PHC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 10.

²⁰¹ L. ZAVALA REVILLA, “Criterios para la conversión de un proceso constitucional...,” cit., p. 19.

parangón que se hace entre los distintos procesos constitucionales, con el objeto de ver cuál es el órgano y el juez que se encarga de tramitarlos y si hay algún tipo de correspondencia o semejanza más estrecha entre algunas de ellas. Entonces, como los procesos de la libertad se inician todos dentro del Poder Judicial pudiendo llegar en el desarrollo de su proceso hasta el Tribunal Constitucional, y observando que son jueces penales o civiles-mixtos los encargados de iniciar el proceso, se concluye que el legislador teniendo como panorama la falta de especialidad en materia constitucional dentro de la organización del Poder Judicial, se debía considerar a los jueces penales o civiles-mixtos como constitucionales, porque son derechos fundamentales los que finalmente intentaban custodiar. “Además tenía como aval el modo cómo su antecesora (Ley 23506) había desarrollado el tema”.²⁰² Así mismo Luis Miguel Zavaleta señala que el Tribunal Constitucional, a lo largo del desarrollo jurisprudencial de la conversión procesal se ha limitado a aplicarla en los denominados procesos constitucionales de libertad o de tutela de derechos.²⁰³

Sin embargo y como hemos visto, la suplencia de la deficiencia procesal tiene dos capacidades: la primera, consiste en subsanar el derecho realmente vulnerado en cualquiera de los procesos constitucionales. Y la segunda, que se relaciona con la conversión procesal, implicará evaluar dos criterios: la competencia del juez y del proceso constitucional. Respecto a esto último, qué otro problema más podría surgir que impida la aplicación de la conversión procesal a todos los procesos constitucionales, más que el excesivo rigorismo procesal que podría brotar del hecho de que en los procesos constitucionales de la libertad, además de poder acceder al Tribunal Constitucional en última instancia, sea el Poder Judicial en primera y segunda instancia y por medio de un juez penal y en otros uno civil o mixto los encargados de revisar el proceso; mientras que en los procesos constitucionales orgánicos, uno sea exclusivo del Poder Judicial y los otros típicos del Tribunal Constitucional. Nosotros creemos, que las incompatibilidades relacionadas al tipo de juez u órgano encargado de revisar el proceso, no constituyen impedimento para aplicar la conversión procesal, recordemos que el objetivo principal de ésta figura jurídica es que se reconozca, proteja y subsane el derecho realmente vulnerado, y si

²⁰² STC Exp. N° 05761-2009-PHC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 11.

²⁰³ L. ZAVALA REVILLA, “Criterios para la conversión de un proceso constitucional...,” cit., p. 19.

para ello es necesario que el juez reoriente tal exigencia por el proceso correcto, dicha acción devendría en totalmente válida, porque son la supremacía de la constitución y todo lo que ello implica, desde defender su posición de ser jerárquicamente superior a las otras disposiciones normativas, hasta el análisis de la estructura institucional y sus competencias; así como velar por la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de la persona y su dignidad, cuestiones más importantes que cualquier despropósito procesal. Por lo que se debería dejar de lado, como dice Alberto Binder el contexto en el que se dictó la Ley 23506. Esto es, la existencia de una cultura en el que la nulidad de un acto procesal no obedecía al propósito de proteger un interés constitucionalmente relevante, sino siempre a favor de la ley. Es decir, durante la vigencia de normas procesales, como las del Código de Procedimientos Civiles de 1912, en las que se había consagrado, la “ideología del ritualismo” o, lo que es lo mismo, el empleo “de la forma como un modo de asignación de legitimidad del proceso”, en el que primaba una defensa hueca de las formas y donde, por tanto, se había dotado de personería jurídica a la llamada “nulidad por la nulidad misma”.²⁰⁴

Por lo tanto, tener presente que el juez que conoce de los procesos constitucionales, más allá del nomen iuris que ostenten dentro de la organización del Poder Judicial, es un Juez Constitucional, es decir, que al Tribunal Constitucional no ha de importarle la denominación funcional que tengan estos magistrados dentro de la estructura del poder judicial, ya que por encima de ello se erige el rol especial que ellos han de cumplir cuando conozcan de los procesos constitucionales.²⁰⁵ Dicha postura cobra mayor firmeza si tenemos en cuenta que el propio Tribunal Constitucional ya ha señalado que “la consagración constitucional de estos procesos les otorga un especial carácter, que los hace diferentes de los procesos ordinarios en cuatro aspectos: 1) por su fines, pues a diferencia de los procesos constitucionales, los ordinarios no tienen por objeto hacer valer el principio de supremacía constitucional ni siempre persiguen la protección de los derechos fundamentales; 2) por el rol del juez, porque el control de la actuación de las partes procesales por parte del juez es mayor en los procesos constitucionales; 3) por los principios orientadores, pues si bien es cierto que estos principios, nominalmente, son compartidos por ambos tipos de

²⁰⁴ A. BINDER, *El incumplimiento de las formas procesales*, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, pp. 29-92.

²⁰⁵ STC Exp. N° 05761-2009-PHC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 14.

procesos, es indudable que la exigencia del cumplimiento de principios como los de publicidad, gratuidad, economía procesal, socialización del proceso, impulso oficioso, elasticidad y de favor processum o pro actione, es fundamental e ineludible para el cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales; 4) por su naturaleza, que es de carácter subjetivo-objetivo, pues no sólo protegen los derechos fundamentales entendidos como atributos reconocidos a favor de los individuos, sino también, en cuanto se trata de respetar los valores materiales del ordenamiento jurídico, referidos en este caso a los fines y objetivos constitucionales de tutela de urgencia.” (STC 00023-2005-PI/TC, fundamento 10).²⁰⁶

Otros temas que son también bastante cuestionados, son los relacionados a que si la aplicación de la suplencia de la deficiencia procesal se restringe sólo a la demanda o es válida a nivel de todo el proceso; o sobre que parte de la pretensión específicamente actúa; y sobre cuál es el sujeto procesal que se ve beneficiado con la posibilidad de aplicar la suplencia de la deficiencia procesal.

Edgar Carpio afirma que, como se desprende de su propio objeto (la suplencia de las deficiencias procesales), debe entenderse, en sentido estricto, como suplencia de los “actos procesales”. Desde esta perspectiva, el principio de suplencia de las deficiencias procesales se encontraría estrictamente vinculado a la facultad del juez de suplir los “actos procesales” irregulares que se puedan realizar dentro del proceso constitucional. No, desde luego, de cualquier clase de actos. El artículo 7 de la ley 23506 implícitamente distinguía, en razón de las personas o sujetos que los realizan, esto es, basado en un criterio subjetivo, entre actos procesales de las partes y actos procesales del juez. Y, entre los primeros, a los actos de la “parte reclamante” de aquellos que pueda practicar quien funge de demandado. Ciertamente, la obligación judicial de subsanar los actos procesales irregulares sólo alcanza a los practicados por la parte reclamante. De otro lado, el artículo 7 de la ley 23506 no distinguía qué clase de actos procesales son pasibles de ser subsanados por el juez. En ese sentido, siguiendo un criterio aceptado en el derecho procesal, creemos que esos actos susceptibles de ser subsanados por el juez comprenden a los de iniciación, desarrollo y conclusión del proceso. Asimismo, la facultad de suplir los defectos de los actos procesales recae sobre lo que la doctrina procesal denomina presupuestos, requisitos o

²⁰⁶ Ibídem, F.J. 15.

condiciones que la ley les impone para que éstos puedan adquirir eficacia. De ahí que pueda señalarse que la facultad de suplir las deficiencias procesales, en concreto, se dirija a subsanar, cuando fuera posible, los vicios en que incurran los actos procesales practicados por el quejoso, esto es, aquellos donde se evidencia “la ausencia de algunos requisitos, condiciones y presupuestos que se exigen para su realización”²⁰⁷, naturalmente siempre que con ellos no se afecten principios y derechos constitucionales de la otra parte en el proceso. A nivel jurisprudencial incluso se ha comprendido supuestos no contemplados por la suplencia de queja mexicana. Por ejemplo, la subsanación de casos de manifiesta improcedencia o la facultad de examinar una demanda promovida en un proceso que no corresponde.²⁰⁸

El Tribunal Constitucional también a dicho; el hecho de que en la demanda no se alegue la afectación de un determinado derecho, y que por lo mismo, el contradictorio constitucional no gire en torno a él, no es óbice para que este Colegiado no pueda pronunciarse sobre ese u otros derechos eventualmente lesionados; pues es facultad del Juez Constitucional el adecuar la pretensión a fin de otorgar protección constitucional al quejoso en aquellos casos en los que se advierta un error o una omisión en el petitorio.²⁰⁹ En efecto, este Alto Tribunal tiene atribuidas suficientes facultades para realizar cuantas gestiones sean necesarias para formarse un criterio sólido respecto a la existencia de actos que resulten lesivos a los derechos fundamentales. Ello, entre otras cosas, supone que el juez constitucional no está supeditado a lo alegado y pretendido por las partes en sus escritos iniciales, sino más bien se encuentra en actitud de delimitar el objeto del proceso y pronunciarse respecto de aquello que sea de relevancia constitucional. No se trata de que el juez constitucional se pronuncie respecto de todo lo alegado y pretendido (sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer) sino, específicamente, sobre aquello que forme parte de su convicción institucional. Lo aquí expuesto no impide ni relativiza la tutela efectiva de los derechos fundamentales, aún en el caso de que determinado extremo no forme parte del petitum; pues es evidente que allí donde el ejercicio de una atribución exclusiva vulnere o amenace un derecho fundamental, el Tribunal Constitucional no

²⁰⁷ A. PÉREZ GORDO, *Los actos defectuosos y su subsanación en el proceso constitucional*, Barcelona. Librería Bosch, 1989, p. 22.

²⁰⁸ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p. 707.

²⁰⁹ STC Exp. N°03016-2007-HC, del 31 de octubre de 2008 F.J.3.

sólo puede sino que debe, legítimamente, pronunciarse sobre la eventual vulneración o amenaza de violación de dicho derecho.²¹⁰

Entonces, se puede afirmar que la suplencia de la deficiencia procesal es susceptible de ser aplicado a lo largo de todo el proceso; pero a nivel de la pretensión su influencia es básicamente en el petitorio y en la posibilidad de convertir un proceso constitucional en otro; así mismo, la suplencia de la deficiencia procesal se constituye en una posibilidad jurídica sólo a favor del quejoso o demandante y nunca en contra de éste.

Finalmente, y no por eso menos importante, se hace un análisis sobre en qué actos procesales puede ser aplicada la suplencia de la deficiencia procesal.

Mientras que para el Tribunal Constitucional la suplencia alcanza tanto a los actos defectuosos como a los inválidos, mas no a los actos procesales nulos.²¹¹

Para Edgar Carpio, la suplencia de las deficiencias procesales de la parte reclamante obligaría al juez a desplegar su actividad sanadora básicamente sobre los denominados actos inválidos, evitando que éstos puedan terminar constituyéndose en actos nulos. Y no comprendería a los actos defectuosos, pues la inocuidad de la irregularidad no sólo no puede distraer al juez sobre la finalidad que tiene el proceso, sino tampoco lo obliga a suplirlo, precisamente en razón de su intrascendencia. Tampoco sobre los actos nulos que, en dicha lógica, no pueden ser suplidos toda vez que se encuentran en franca oposición a los derechos constitucionales de la otra parte o lesiona principios fundamentales que informan al proceso.²¹²

Por otro lado, nosotros respaldamos la posición que ha tomado el Tribunal Constitucional. Dentro de los procesos constitucionales no podemos considerar irrelevantes a los actos defectuosos, la razón es que las condiciones o los presupuestos son fundamentales para una relación jurídica procesal válida. Además, si apelamos a que es la conversión procesal una de las facultades de la suplencia de la deficiencia procesal, el tema de la competencia como un elemento del presupuesto procesal se convierte en una cuestión que merece ser atendido con urgencia, de lo contrario no podremos hablar de un proceso en decurso y menos aún tener la esperanza de llegar a obtener una solución justa a nuestro reclamo. Ya que no sólo la facultad otorgada a los

²¹⁰ STC Exp. N°03016-2007-HC, del 31 de octubre de 2008 F.J.4

²¹¹ STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J. 4.

²¹² E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...” cit., p. 724

jueces constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico, es para adecuar la pretensión a fin de otorgar protección constitucional al quejoso, en aquellos casos en los que se advierta un error o una omisión en el petitorio.²¹³ Sino que la deficiencia procesal a la que alude el artículo 7° (señala el Tribunal) puede comprender, cabalmente, un error relativo a un presupuesto procesal como es el que respecta a la competencia y, en tal sentido, susceptible de ser oportunamente enmendado. El mencionado principio de nuestro derecho procesal constitucional impone el deber que tiene el juez de enmendar las omisiones o las deficiencias en las que, eventualmente, haya incurrido el demandante, ello con el propósito de que se pueda facilitar el acceso a la tutela jurisdiccional, y evitar que absurdamente se declare improcedente una demanda por un error del recurrente respecto a la competencia territorial, deba acoger aquellas que impliquen, por el contrario, una optimización o mayor eficacia del derecho referido. Autoriza o refuerza esta interpretación el hecho de que, como proyección aplicativa del mismo principio, el artículo 9 de la ley 25398 imponga al juez el deber de remitir al competente cuando se haya incurrido en un error de denominación de la acción de garantía”^{214 & 215}

Es por eso que los actos procesales que pueden ser objeto de suplencia, así como ya lo ha señalado el Alto Colegiado, ellos pueden ser tanto los actos defectuosos cuanto los actos inválidos, pero no los actos procesales nulos. Esta es, pues, una primera limitación.²¹⁶ Resumiendo, el principio de suplencia de queja conlleva la labor judicial de subsanar los actos procesales defectuosos o inválidos, mediante la interpretación teleológica, la aplicación analógica de normas o recurriendo a principios generales del proceso, así como en específico a los del proceso constitucional.²¹⁷

1.2.1. Los actos procesales viciados.

1.2.1.1. Los actos defectuosos.

Son aquellos que se realizan sin que concurren todos los presupuestos, requisitos y condiciones que determinan su admisibilidad, pero que no

²¹³ G. ETO CRUZ, *El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano...*, cit., p.212.

²¹⁴ STC Exp. N° 1120-2002-HC, del 20 de junio de 2002, F.J. 2.

²¹⁵ STC Exp. N° 933-2000-AA, del 12 junio de 2002, F. J. 2.

²¹⁶ STC Exp. N° 0509-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J. 4.

²¹⁷ C.SENISSE ANAMPA, “El principio de suplencia de queja deficiente” ..., cit., p. 17.

generan afectación de principios o de derechos procesales constitucionales de relevancia y, por ese hecho, son inocuos (que no hace daño).^{218 & 219}

1.2.1.2. Los actos inválidos.

Son aquellos que se realizan incumpliendo los requisitos y condiciones que la ley prevé, dando lugar, a su vez, a la afectación de derechos o principios constitucionales, pero que, sin embargo, pueden ser subsanados o reparados por sí mismos, o eventualmente por medio de la intervención del juez (Binder Alberto. El incumplimiento de las formas procesales. Ad Hoc, Buenos Aires 2000. Pág. 96).^{220, 221 & 222}

1.2.1.3. Los actos nulos.

Son aquellos que, habiendo comprometido seriamente derechos constitucionales de las partes o principios constitucionales del proceso, no pueden ser reparados.^{223, 224 & 225}

1.3. Límites al principio de suplencia de la deficiencia procesal.

Para Luis Diez-Picazo, a los jueces constitucionales no les corresponde decidir cómo deberían plantear los demandantes su pretensión, sino tutelarlos o no, pronunciándose sobre los términos de la litis que se le ha planteado. A su juicio, un obrar tan libre como el que faculta el principio en referencia despierta “sospechas, porque no pueden disimular cierta inclinación estatalista y anti-individualista o, si se prefiere, cierta vocación hacia el despotismo ilustrado. Por más que quienes los sostienen están animados por un noble orden liberal.”²²⁶

Sin embargo; lo cierto es que en términos generales, el principio de suplencia de la deficiencia procesal ha tenido como fin o propósito proteger al agraviado de la

²¹⁸ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p. 724.

²¹⁹ STC Exp. N° 0509-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J. 4.

²²⁰ G. ETO CRUZ, *El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano...*, cit., p.214.

²²¹ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.724.

²²² STC Exp. N° 0509-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J. 4.

²²³ G. ETO CRUZ, *El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano...*, cit., p.214.

²²⁴ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.724.

²²⁵ STC Exp. N° 0509-2003-AC, de 5 de abril de 2004, F.J. 4.

²²⁶ L. DIEZ-PICAZO, “Dificultades prácticas y significado constitucional del Recurso de Amparo”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, N° 40, Madrid, 1994, p. 32.

ideología del ritualismo y, por tanto, de los efectos de su instrumentalización por el agresor (pero también del mismo juez), hoy no resulta errado afirmar que su utilización, a su vez, ha de efectuarse en la medida que con ella no se lesionen los derechos constitucionales de orden procesal o sustancial de la otra parte.

Por lo tanto; el análisis que nos permitimos realizar, intenta mostrar los límites que cierta doctrina y jurisprudencia ha considerado oportuno tomar en cuenta al momento de hacer uso de la suplencia de la deficiencia procesal. Lo que no significa que estemos de acuerdo con todo lo que se ha dicho en relación a éste tema.

Así; es fundamental referirnos a la capacidad que en estricto es propia de la suplencia de la deficiencia procesal, y que se ha visto vulnerada con afirmaciones tales como, que debe tenerse siempre presente que la corrección de errores en los que pueda incurrir el demandante no supone en ningún supuesto variar la petición de la demanda.²²⁷ Ha dicho el Tribunal Constitucional que el juzgador sólo puede suplir las deficiencias procesales o las que existan en cuanto a la denominación de la acción de garantía interpuesta pero en ningún caso puede variar o suplir las pretensiones de las partes, toda vez que no tiene facultad extra-petita.²²⁸ Mientras que Edgar Carpio citando a Ángel Garrorena señala; como se ha dicho, el artículo 7 de la Ley 23506 sólo autoriza a los jueces a remover las deficiencias de orden procesal que en el desarrollo del proceso se pueda advertir, pero no a modificar el petitorio de la demanda (...).²²⁹ Respecto a estas afirmaciones, ya hemos demostrado a inicios del presente capítulo, que la suplencia de la deficiencia procesal le otorga un poder-deber al juez, que en esencia, le permite corregir el petitorio de la demanda como respuesta al derecho que realmente se ha visto vulnerado y que por error, ignorancia u omisión, el demandante no se ha referido correctamente a ella. Ante esa situación, los demás principios del proceso constitucional lo que hacen es reaccionar e intentar, según sus facultades, brindar una serie de respuestas que se van a tornar en insuficientes ante ese escenario jurídicamente deficiente; lo que le permite a la suplencia de la deficiencia procesal desplegar sus capacidades no sólo por cuestiones de necesidad y coherencia jurídica, sino de un deber sustentado en justicia.

²²⁷ L.CASTILLO CÓRDOVA, *Comentarios al Código Procesal Constitucional...*, cit., p.69.

²²⁸ STC Exp. N° 0278-1993-AA, del 11 de agosto de 1997, F.J. 2.

²²⁹ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...” cit., p. 725.

Además de lo que acabamos de mencionar, son diversas las razones jurídicas que han llevado a realizar serios análisis sobre aquello que se debería considerar como límites a la aplicación de la suplencia de la deficiencia procesal. Entre ellas tenemos:

El principio de congruencia o de estricto derecho; conceptualmente, a este principio ya nos hemos referido en el capítulo relacionado al *iura novit curia*, por lo que en términos generales y citando a Edgar Carpio implica que las sentencias (constitucionales) deban ser congruentes, “esto es, mantener y respetar la más estricta correspondencia entre demanda y pronunciamiento, entre lo que se solicita y aquello que se resuelve, no fallando ni *ultra petitem*, o más allá de lo pedido, ni *extra petitem* o cosa distinta de lo pedido, ni con otro apoyo que no sea el de la causa petendi, es decir, el de aquellos fundamentos en los que la demanda basó su solicitud,”²³⁰ pero tampoco puede fallar *citra petita*; es decir, que el Juez no llegue a pronunciarse respecto de todas las pretensiones exigidas en la demanda; y menos aún podría darse un fallo *infra petita*, puesto que se estaría decidiendo sobre una pretensión en extensión menor que la solicitada; es decir, que se estaría otorgando menos de lo exigido en la demanda.

En base a lo que se acaba de afirmar, se han generado diversas posturas que intentan explicar si es coherente considerar al principio de congruencia, como un límite al ejercicio de la suplencia de la deficiencia procesal.

Algunos de los argumentos que respaldan la idea de que el principio de congruencia es un límite para la suplencia de la deficiencia procesal y sus capacidades, son las siguientes:

Edgar Carpio afirma, como antes se ha dicho, si en México, la suplencia de la queja, no obstante encontrarse en franca contradicción con el principio de congruencia, ha sido aceptada y aún justificada por la totalidad de la doctrina, es porque se encuentra incorporado expresamente en la Constitución Federal. Ello no precisamente sucede en el caso peruano, donde ni se encuentra en la Constitución, y aún cuando pueda incorporarse en la legislación procesal constitucional, unos alcances así del principio no parecen compadecerse con el derecho al debido proceso del emplazado. Y es que no puede perderse de vista que aún los procesos constitucionales, son procesos en los que si bien no existen “partes” en el sentido procesal del término,

²³⁰ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...”, cit., p. 725.

esto es, como defensores de intereses subjetivos, sí actúan como defensores de intereses legítimos. Una desviación sustancial entre la sentencia y los términos en que el (petitorio) se ha planteado, supone una completa modificación de los términos del debate procesal, que lesiona al derecho a la tutela judicial efectiva por indefensión.²³¹

Continúa Senisse Anampa y señala, no precisamente se observa el principio de congruencia, si el juez, justificando su actuar en el rol activo en defensa de los derechos fundamentales, puede disponer del petitorio de la demanda, los fundamentos fácticos en que basó el actor su pretensión, o tal vez traer al proceso un acto no impugnado por el demandante. No debemos perder de vista que aun en los procesos constitucionales, (...) una desviación sustancial entre la sentencia y los términos en que el petitorio ha sido planteado, supone una completa modificación de los términos del debate procesal.²³²

Pero también se desprende otro tipo de análisis, que no ven en el principio de congruencia, un límite para la suplencia de la deficiencia procesal. Muy por el contrario, lo que hacen es estructurar maneras en las que ambos principios cohabiten y contribuyan en la defensa del derecho ciertamente vulnerado. Estos señalan que:

El principio de congruencia judicial, exige al juez que, al pronunciarse sobre una causa, no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso a resolver. Sin embargo, como ya se ha visto, existen casos en los cuales la pretensión no resulta clara y evidente, o está planteada de manera incorrecta, o se ha invocado erróneamente la norma de derecho aplicable, frente a lo cual el juez constitucional, luego del análisis fáctico, tiene el deber de reconocer el trasfondo o el núcleo de lo solicitado y pronunciarse respecto de él, sin que ello represente una extralimitación de sus facultades. Por eso es que cuando el Colegiado omita estimar determinado extremo del petitorio no significa una infracción del principio de congruencia o un pronunciamiento *infra petita*, si lo que se busca es la reposición de las cosas al estado anterior a la violación.²³³ Es decir; como afirma el Tribunal Constitucional español, “el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones deducidas, tal y como hayan sido formalmente presentadas por los litigantes, de modo que no existirá la incongruencia

²³¹ *Ibíd.*, p. 726.

²³² C.SENISSE ANAMPA, “El principio de suplencia de queja deficiente”..., cit., p. 21.

²³³ STC Exp. N° 5637-2006-PA, del 12 abril de 2007. F.J. 14.

extra petitum cuando el juez o tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aún cuando no haya sido formal o expresamente formulada, resulte implícita o sea consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida” (STC 29/2003, F. Jur. N°. 3).²³⁴ Así mismo; bajo la premisa de otro criterio jurisprudencial, el Alto Colegiado va a precisar que el juez, únicamente podrá desvincularse de lo planteado en la demanda a fin de otorgar una protección eficaz a los derechos constitucionales lesionados, cuando ello devenga de una voluntad implícita del recurrente a pesar de no haberla planteado correctamente en la demanda.²³⁵

Estas son las razones por las que nosotros no creemos que el principio de congruencia sea un límite para el ejercicio pleno de la suplencia de la deficiencia procesal. Sin embargo, tampoco avalamos aquel argumento que intenta convertir a la suplencia de la deficiencia procesal, en un principio todopoderoso. Es indispensable que de los fundamentos facticos se desprenda el derecho realmente vulnerado para que la suplencia de la deficiencia procesal pueda desplegar sus facultades. Por lo que rechazamos el siguiente argumento: Según Carlos Mesía, una aplicación más intensa aún del principio implicará una excepción al principio de congruencia, ya que podría aplicarse para emitir sentencias por derechos que no forman parte del petitorio ni han sido invocados a lo largo del proceso o invocados en los alegatos.²³⁶ Carlos Mesía pero esta vez siguiendo a Juventino Castro señala que el tribunal de amparo al momento de sentenciar (de plano y sin forma de sustanciación) podrá o deberá, según sea el caso, suplir ese defecto o deficiencia de la queja, otorgando la protección constitucional por una razón o por un hecho que nunca se conoció y examinó en el proceso.²³⁷

El derecho al contradictorio o derecho de defensa, constituye otro factor jurídico del que también se ha buscado deslindar, si debe o no, ser considerado como un límite a la suplencia de la deficiencia procesal.

Como habíamos visto en el capítulo anterior, el derecho de defensa impide que el sujeto procesal (demandando) pueda quedar en estado de indefensión, incapaz de

²³⁴ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., pp.714-715.

²³⁵ STC Exp. N° 0509-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J.8.

²³⁶ C. MESÍA RAMÍREZ, *Exégesis del Código Procesal Constitucional. Tomo I...*, cit., p. 94.

²³⁷ *Ibidem*, pp. 94-95.

poder discutir la pretensión que se ha interpuesto en contra de él. Es decir, defiende la posibilidad de que el demandado quede impedido de poder ejercer los medios legales suficientes para ejecutar su defensa. Frente a esto, se han generado varias teorías:

Para Alberto Borea la suplencia de las deficiencias procesales no comprendería la posibilidad de que el juez decida qué es lo que tiene que fallar, ya que de ser así violaría el derecho constitucional de defensa del emplazado.²³⁸ Sin embargo, nosotros creemos que no es que el juez decide arbitrariamente qué es lo que tiene que fallar; sino, que es lo que en justicia debe fallar según demuestren los elementos facticos, en ese sentido la suplencia de la deficiencia procesal no estaría vulnerando el derecho de defensa o del contradictorio, cuya “comprensión y respeto, es en función de las características muy particulares del proceso constitucional”.²³⁹

Esto lo explica mejor; el hecho de que en la demanda no se alegue la afectación de un determinado derecho, y que por lo mismo, el contradictorio constitucional no gire en torno a él, no es óbice para que este Colegiado no pueda pronunciarse sobre ese u otros derechos eventualmente lesionados; pues es facultad del juez constitucional el adecuar la pretensión a fin de otorgar protección constitucional al quejoso en aquellos casos en los que se advierta un error o una omisión en el petitorio. (...) Este Tribunal tiene atribuidas suficientes facultades para realizar cuantas gestiones sean necesarias para formarse un criterio sólido respecto a la existencia de actos que resulten lesivos a los derechos fundamentales. Ello, entre otras cosas, supone que el juez constitucional no está supeditado a lo alegado y a lo pretendido por las partes en sus escritos iniciales, sino más bien se encuentra en aptitud de delimitar el objeto del proceso y pronunciarse solo respecto de aquello que sea de relevancia constitucional. No se trata de que el juez constitucional se pronuncie respecto de todo lo alegado y pretendido (sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer) sino, específicamente, sobre aquello que forme parte de su convicción institucional. Lo aquí expuesto no impide ni relativiza la tutela efectiva de los derechos fundamentales, aun en el caso de que determinado extremo no forme parte del petitum, pues es evidente que allí donde el ejercicio de una atribución exclusiva vulnere o amenace un derecho fundamental, el Tribunal Constitucional no sólo puede sino que debe, legítimamente,

²³⁸ A. BOREA ODRÍA, *Evolución de las Garantías Constitucionales*. Fe de Erratas, Lima, 1999, p. 114.

²³⁹ STC Exp. N°0905-2001-AA, del 14 de agosto del 2002, F.J. 4.

pronunciarse sobre la eventual vulneración o amenaza de violación de dicho derecho.²⁴⁰

Por tal razón el Tribunal Constitucional ha establecido que el límite en la adecuación de las pretensiones al derecho aplicable se sujeta a la necesidad de defensa que debe operar irreductiblemente respecto de las alegaciones o causa petendi que han planteado las partes. Si en la adecuación del petitorio no se afecta el derecho de defensa de la parte emplazada, el Tribunal no habrá sobrepasado sus límites de actuación permitidos por el ordenamiento jurídico.²⁴¹ Esto nos recuerda que lo que se debe buscar siempre, así como lo señala el Tribunal Constitucional es que el juez constitucional está destinado a lograr una relación armónica entre los derechos cuya tutela le encomienda la Constitución a través del Derecho Procesal Constitucional y los propios valores que consagra la Carta Fundamental”.²⁴²

Entonces, cómo podría la suplencia de la deficiencia procesal y su facultad de subsanar el derecho realmente vulnerado o la posibilidad de convertir un proceso constitucional en otro; afectar la capacidad de ejercer legítimamente el derecho de defensa del demandado. Más aún, si el ejercicio de las facultades de la suplencia de la deficiencia procesal está en función al análisis correcto del elemento fáctico de la pretensión. Entonces; una pretensión sólidamente estructurada no sólo no va a vulnerar el derecho de defensa, sino que le dará verdaderas luces para que en el ejercicio de sus capacidades todo sea jurídicamente coherente y pleno.

Finalmente; es importante hacer un análisis de las causales de improcedencia para ver si se podrían constituir en límites a la suplencia de la deficiencia procesal. Recordemos que para la suplencia de queja deficiente, la improcedencia (mexicana) sí representa un límite para su ejercicio.

Si nos sujetamos a las capacidades que son propias de la suplencia de la deficiencia procesal, habremos de sospechar que es el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional el que quizá tenga un vínculo estrecho con la suplencia de la deficiencia procesal y pueda tentar con la posibilidad de cuestionar su vigencia y sus facultades. Señala el mencionado inciso:

“No proceden los procesos constitucionales cuando:

²⁴⁰ STC Exp. N° 03016-2007-PHC, del 31 de octubre de 2008, F.J. 3 - 4.

²⁴¹ STC Exp. N°. 4080-2005-AC, de 28 de enero de 2005, F.J.8.

²⁴² Ibídem, F.J.7.

Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.”

Si se pretendiera hacer un análisis individual de los hechos y su incapacidad para referirse en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, ésta generaría serias dudas por la imposibilidad natural que significa no saber en estricto a qué derecho fundamental pretende hacer referencia. Lo mismo sucedería al intentar atribuir solamente al petitorio su falta de capacidad para referirse directamente al derecho constitucional realmente invocado, pues cómo podríamos saber si el derecho referido en el petitorio es el que verdaderamente subyace como fin del proceso.

Lo que creemos, es que para hacer el análisis que merece el referido inciso, se hace necesario cuestionar de manera conjunta la relación que existe entre los hechos y el petitorio, y si ésta coincide directamente con el contenido constitucional que realmente debe ser protegido.

En este sentido, si nos referimos a los hechos, estos no pueden ser juzgados como malos o buenos, son simplemente los hechos y son descritos así como sucedieron, por lo que no sería válido sostener una improcedencia procesal que sujete su fundamento en éste criterio. Sin embargo; si de los hechos se concluye, que lo plasmado en el petitorio no se ajusta a la necesidad jurídica que por medio de los fundamentos fácticos se intenta exigir, en este caso la suplencia de la deficiencia procesal sí estaría en capacidad de subsanar la ausencia del derecho verdaderamente vulnerado y que por error, omisión o ignorancia no fue suscrito en el petitorio.

Recordemos que el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, según Eto Cruz siguiendo a Samuel Abad Yupanqui, “implica una labor de delimitación del derecho que busca ser objeto de protección constitucional y no alude a una garantía de los derechos frente a la potestad del legislador de establecer límites a su ejercicio”.²⁴³ Siempre es más urgente e importante la tutela procesal de los derechos fundamentales a las causales de improcedencia interpretadas con excesivo formalismo.²⁴⁴

²⁴³ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II...*, cit., p. 527.

²⁴⁴ *Ibíd.*, p. 519.

En relación a los otros incisos relacionados a la improcedencia que han sido suscritas en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, no tienen ningún conflicto directo con las facultades que profesa la suplencia de la deficiencia procesal, por lo que seguramente sí ejercen su función como causales de improcedencia en los procesos constitucionales, a no ser que algún límite de orden jurisprudencial ajeno a los intereses de este trabajo se lo impida.

1.4. El principio de suplencia de la deficiencia procesal y su relación con la suplencia de la queja deficiente, el iura novit curia y los demás principios del derecho procesal constitucional.

1.4.1. El principio de suplencia de la deficiencia procesal y la suplencia de la queja deficiente.

Se han dicho bastantes cosas sobre el grado y el tipo de relación que existe entre ambos institutos jurídicos. Algunos reconocen entre estos dos principios, niveles perfectos de equivalencia, y otros; vínculos más parecidos al de continente y contenido. Veamos; Edgar Carpio señala para los Magistrados Rodríguez Domínguez y Aguirre Roca, que la suplencia de las deficiencias procesales sería equivalente a la suplencia de la queja prevista en el derecho mexicano. Y comprendería incluso el error procesal de presentar una demanda ante órgano incompetente, siempre que éste se practique en “beneficio del reclamante” y nunca en su perjuicio.²⁴⁵ Mientras que el Tribunal Constitucional deja entrever que la suplencia de la queja deficiente subyace o está comprendida dentro de la suplencia de la deficiencia procesal.²⁴⁶

También hay de los que prefieren no romper el vínculo entre ambos principios, pero tampoco terminan por confirmarlo. Así, según Samuel Abad Yupanqui; el Código Procesal Constitucional no alude en forma expresa a la institución mexicana de la suplencia de la queja, pero acoge los mismos criterios que la inspiran al regular los principios procesales, especialmente el de dirección judicial del proceso, y cuando afirma que los jueces tienen el deber de impulsar de oficio los procesos y deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales, que como se sabe son garantizar la

²⁴⁵ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p. 709.

²⁴⁶ STC Exp. N° 051-2001-HC, del 31 de enero de 2001 F. J. 4.

primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos humanos. De ahí que la finalidad perseguida por la institución mexicana de la suplencia de la queja se encuentre subsumida en los principios procesales previstos en el código que orientan al proceso de amparo.²⁴⁷

Pero también hay quienes reconocen entre ambos principios, más diferencias que similitudes. Veamos; para Carlos Mesía existe una diferencia entre la suplencia de la queja y la suplencia de las deficiencias procesales. La primera comprende la reparación de los errores o deficiencias de la parte reclamante al momento de interponer cualquier medio impugnatorio. La segunda en cambio, hace referencia a la facultad-deber del juzgador constitucional de emendar los vicios o irregularidades de los actos procesales practicados por el demandante, pero bajo la condición de que no suponga (dicha enmendación) la violación de derechos procesales de la parte demandada.²⁴⁸ Mientras que Samuel Abad afirma que la figura mexicana de la suplencia de la queja está referida a aquel supuesto en que el afectado no fue lo suficientemente explícito en su pretensión, ya sea por error o ignorancia. En tal caso, el juez no ha de limitarse a lo expresamente mencionado por el actor sino que de percatarse de otra agresión deberá intervenir y hacer efectiva su protección. Hay que distinguir la deficiencia en el pedido concreto de la improcedencia de la demanda, así lo hace el derecho mexicano. En el caso peruano, la norma se circunscribe a las deficiencias procesales; pero ¿Qué ha de entenderse por tal concepto?. Para Alberto Borea, la Ley de Hábeas Corpus y Amparo a tratado de ser lo menos formalista posible, pero aun si en este supuesto se cometiera algún error de este tipo, se le exige al juez que supla la deficiencia procesal, o que notifique al quejoso para que preste el dato o la información requerida a efectos de poder fallar sobre el fondo del asunto.²⁴⁹

Para nosotros, la relación entre estos dos principios cuenta más con sustanciales diferencias que similitudes. Mientras que la suplencia de la queja deficiente es un principio mexicano de orden constitucional, capaz de actuar a nivel de toda la pretensión como sí mismo, corrigiendo o subsanando errores u omisiones al momento de invocar cierto derecho que se creía vulnerado, que tiene además, como límite al ejercicio de sus facultades, a las causales de improcedencia. Tampoco es un

²⁴⁷ S. ABAD YUPANQUI, *El Proceso Constitucional de Amparo...*, cit., p. 195.

²⁴⁸ C. MESÍA RAMÍREZ, *Exégesis del Código Procesal Constitucional. Tomo I...*, cit., p. 95.

²⁴⁹ S. ABAD YUPANQUI, *El Proceso Constitucional de Amparo...*, cit., p. 191.

principio exclusivo del quejoso, y además, se encuentra regulado en la norma y cuenta con una serie de condiciones detalladas en el mismo dispositivo legal, que guían y condicionan su accionar jurídico.

Por otro lado; el principio de suplencia de la deficiencia procesal es un principio peruano de orden procesal constitucional, capaz de actuar bajo dos premisas: la primera, como un mecanismo que le permite modificar el petitorio con el objeto de subsanar el derecho que por error, omisión o ignorancia ha sido deficientemente invocado. La segunda, que hace capaz a éste principio de convertir un proceso constitucional en otro con el objeto de subsanar la incompetencia procesal, asimismo mantiene una estrecha relación de colaboración con los demás principios del proceso constitucional, pero sin absorberlos ni convertirlos en sub-principios. Es además un principio exclusivo del demandante, y su vigencia en nuestro ordenamiento legal se considera implícita.

En diversos países, se ha incorporado dentro de la jurisdicción constitucional, lo que en nuestro caso conocemos como suplencia de la deficiencia procesal, todo al hilo del influjo mexicano, cuna de creación del juicio de amparo y forjador de diversas instituciones procesales que lo rodean, entre las que se encuentra la llamada suplencia de la queja deficiente.²⁵⁰ Sin embargo, como hemos podido detallar son criterios bastante claros los que vienen a demostrar que estos principios son principal y fundamentalmente disímiles.

1.4.2. El principio de suplencia de la deficiencia procesal y el iura novit curia.

Es evidente que existe una relación entre la suplencia de la deficiencia procesal y el iura novit curia, lo importante es determinar el tipo de vínculo que los une. Algunos justifican dicho vínculo con argumentos inicialmente lucidos pero que al final van perdiendo claridad y terminan por inventar lazos de dependencia a los que no se encuentra justificación. Decía el Tribunal Constitucional de Garantías que a través del art. 7 de la Ley N°. 23506 se habría “innovado” nuestro ordenamiento procesal, en la medida que dicha disposición obligaría a los jueces “legalmente a la aplicación del principio de investigación judicial”. Según dicho principio, “el juez no

²⁵⁰ STC Exp. N° 05761-2009-HC, de 13 de mayo de 2010, F.J. 17.

queda ligado a las partes, sino, por lo contrario, autoriza para hacer lo que ellas no han querido o no han sabido proponer”. No obstante asignarle tales alcances, al fundamentarla, sostendría que ésta se sustenta “en los viejos principios jurídicos *iura novit curia* y *damihi factum, dado tibi ius*”. Es decir, el principio de suplencia de las deficiencias procesales comprendería a la suplencia de la queja, y ambos, a su vez, representarían una concretización del *iura novit curia*.

Sin embargo, también se han generado juicios coherentes sobre los niveles en lo que actúa el *iura novit curia* y la suplencia de la deficiencia procesal, así como el vínculo que los ata frente a los inconvenientes jurídicos que pueden esperar respuesta sanadora en ambos principios. Dentro de nuestra jurisprudencia constitucional dichos principios han recibido tratamiento individualizado pues por un lado el Colegiado Constitucional ha señalado que: (...) la suplencia de la queja deficiente (...) se trata de la facultad que tienen los jueces constitucionales para adecuar las pretensiones de los quejosos, a fin de otorgarles la protección que sus derechos fundamentales requieren en el supuesto que se advierta un error o una omisión en el petitorio de su demanda (...). Y sobre el principio de *iura novit curia* ha señalado que: (...) dicho aforismo, literalmente significa el Tribunal conoce el derecho y se refiere a la invocación o no invocación de las normas jurídicas que sirven de fundamento a las pretensiones esgrimidas por las partes dentro de un proceso (...). De igual manera, en cuanto a la aplicación de estos principios, el Tribunal ha puesto límites cuando ha señalado, sobre la suplencia de la queja deficiente, que el juez (...) únicamente podrá desvincularse de lo planteado en la demanda a fin de otorgar una protección eficaz a los derechos constitucionales lesionados, cuando ello devenga de una voluntad implícita del recurrente a pesar de no haberla planteado correctamente en la demanda (...).²⁵¹ En tanto que (...) cuando se trate del aforismo *iura novit curia*, al aplicar el derecho a las cuestiones debatidas, se buscará no alterar ni sustituir las pretensiones y hechos fácticos que sustentan la demanda y resulten acreditados en el proceso (...).²⁵²

Pretendiendo ser más claros, mediante el *iura novit curia* el juez constitucional tiene el poder-deber de aplicar el derecho que corresponda al proceso

²⁵¹ STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J. 8.

²⁵² STC Exp. N° 05761-2009-PHC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 19 - 21.

aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, por lo que sus facultades recaerían únicamente en los fundamentos jurídicos de la pretensión.²⁵³,²⁵⁴,²⁵⁵,²⁵⁶ & ²⁵⁷ Mientras que la suplencia de la deficiencia procesal subsana los defectos por error, omisión o ignorancia que llevaron al demandante a no hacer referencia al derecho ciertamente vulnerado, permitiéndose actuar a nivel del petitum o haciendo uso de la conversión procesal. Finalmente y con acierto, Luis Díez Picazo y Antonio Gullén sostienen que la decisión judicial vinculada con la aplicación del principio *iura novit curia* tiene que ser congruente con el objeto del petitum y la causa petendi. Porque en relación con el objeto del petitum, el órgano jurisdiccional no puede conceder algo diferente de lo pedido: este no puede encontrar una *ratio decidendi* en un elemento distinto al de la causa invocada.²⁵⁸ Es decir, entre el *iura novit curia* y la suplencia de la deficiencia procesal, existe una relación tan estrecha, que sugiere entre ambos, coherencia jurídica al momento de ejercer sus facultades de manera individual. Recordemos que el Tribunal Constitucional encuentra como fundamento para la utilización de estas dos instituciones procesales, en la esencia misma de los procesos constitucionales y en la finalidad que éstos cumplen de cara a la protección de los derechos fundamentales.

1.4.3. El principio de suplencia de la deficiencia procesal y los demás principios del derecho procesal constitucional.

Para Vila Ormeño, el artículo II del Código Procesal Constitucional señala que: “*los procesos constitucionales garantizan la primacía de la constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales*”. En esta medida, la tutela y protección de los derechos fundamentales, al ser de interés no solo para la persona titular de ese derecho, sino para la colectividad en general (su transgresión implica un cuestionamiento al propio ordenamiento constitucional), se enmarca dentro de un proceso con principios e interpretación propios, que lo diferencia de los procesos ordinarios que se resuelven en sede judicial. En el caso de los procesos

²⁵³ C.SENISSE ANAMPA, “El principio de suplencia de queja deficiente”..., cit., p. 18.

²⁵⁴ L. ZAVALA REVILLA, “Criterios para la conversión de un proceso constitucional...”, cit., p. 18.

²⁵⁵ STC Exp. N° 00797-1999-AA, del 11 de mayo de 2000, F. J. 7.

²⁵⁶ STC Exp N° 02094-2005-PA, del 10 de mayo de 2005, F. J. 1.

²⁵⁷ STC Exp. N° 0569-2003-AC, del 5 de abril de 2004, F.J. 8.

²⁵⁸ *Ibidem*, F.J. 11.

constitucionales, son de suprema protección los principios de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía, intermediación, socialización, impulso de oficio de los procesos, adecuación de las exigencias de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales o principio de elasticidad y el de que ante una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación o principio pro actione; los cuales le insertan a los procesos constitucionales una dinámica propia. Los procesos ordinarios no tienen como objetivo hacer valer el principio de supremacía de la Constitución y no siempre persiguen la tutela de derechos fundamentales; en los procesos constitucionales, además de ser de urgencia, los jueces tienen el deber de controlar la actuación de las partes para conseguir dentro de un plazo razonable la tutela efectiva de los derechos fundamentales.²⁵⁹

El aporte de los principios del proceso constitucional regulados en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional es individual y específico, sin embargo; esto no constituye impedimento alguno para que con el objeto de dar solución al problema jurídico que se presente, se generen estrechos niveles de relación, interacción y coherencia entre ellos. Algunos de estos principios evidencian una mayor utilidad práctica a la materialización de la suplencia de la deficiencia procesal y por ende a la conversión de los procesos constitucionales, por lo que han cobrado mayor importancia, justamente, por la estrecha relación que la teoría jurídica les habría atribuido tener con la suplencia de la deficiencia procesal. Algunos de estos principios son:

El principio de dirección judicial del proceso, el juez no se limita a observar la actividad procesal de las partes, sino va a ser quien la encamine hacia el resultado del proceso e, inclusive, promueva (a través de los mandatos judiciales correspondientes) los actos procesales necesarios a fin de impulsar el proceso, esclarecer los hechos, formarse convicción de los mismos y resolver en consecuencia, dándole así solución al conflicto de intereses de naturaleza constitucional que fuera

²⁵⁹ C. VILA ORMEÑO, “Delimitando el Contenido de la Cosa Juzgada Constitucional”, en J. SOSA SACIO (Coord.), *Compendio de Instituciones Procesales creadas por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Gaceta Jurídica, Lima, 2012, p. 62.

puesto en su conocimiento.²⁶⁰ Es que el juez viene a ser el conductor del proceso y, por ende, no solo tiene el deber de hacer cumplir las normas que lo regulan, sino también la obligación procesal de impulsar su desarrollo, siendo responsable por su dilación.²⁶¹ Para esto el Tribunal Constitucional ha precisado que el mencionado principio delega en la figura del juez constitucional el poder-deber de controlar razonablemente la actividad de las partes promoviendo la consecución de los fines del proceso de manera eficaz y pronta. En tal sentido, corresponde al juez constitucional detectar y desvirtuar aquella conducta procesal que, intencionalmente o no, pretende convertir al proceso en un ritualismo de formas, antes que en un eficiente cauce para la protección de los derechos fundamentales y el respeto de la supremacía normativa de la Constitución.²⁶² También tenemos al principio de impulso procesal de oficio que viene a ser un “sub-principio en tanto es expresión concreta del principio de dirección judicial”²⁶³, por lo que la defensa de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos humanos comporta la movilización de todo el aparato jurisdiccional del Estado en busca de la protección de todo el ordenamiento jurídico fundamental; y en donde el rol del juez ha de ser la de auctoritas, entendida como saber o verdad socialmente reconocida como superioridad moral, prestigio o dignidad social de la Magistratura por cuanto sus decisiones se imponen por la propia autoridad o prestigio del sujeto del que emanan.²⁶⁴ De igual forma tenemos al principio de elasticidad, que implica la adecuación de las exigencias de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales; se trata aquí, de que las exigencias que requiere el Código, no deben afectar los fines mismos que persiguen los procesos constitucionales, es decir, no se debe preferir algunos requisitos formales, enervando la esencialidad y la eficacia que aspira el proceso constitucional; esto es, ser el instrumento procesal por antonomasia de la defensa de la Constitución y garantizar la eficacia plena de los derechos humanos.²⁶⁵ Pero también tenemos al principio pro actione que implica que

²⁶⁰ A. HINOSTROZA MINGUES, *Comentarios Código Procesal Civil, Tomo I*, Gaceta jurídica, Lima, 2003, pp. 28-29.

²⁶¹ J. CARRIÓN LUGO, *Tratado de derecho procesal civil. Volumen primero. Teoría General del Proceso*, Grijley, Lima, 2000, pp. 48-49.

²⁶² STC Exp. N° 0048-2004-PI, del 1 de abril de 2005, FJ. 4.

²⁶³ J. MONROY GÁLVEZ, *Introducción al proceso civil, Tomo I*, Temis, Bogotá, 1996, p. 93.

²⁶⁴ J. GIMENO SENDRA, *Fundamentos del derecho procesal (jurisdicción, acción y proceso)*, Civitas, Madrid, 1981, p. 33.

²⁶⁵ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo I*, Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 602.

ante una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido el juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación, es decir, es la imposición hecha a los jueces constitucionales de interpretar los requisitos y presupuestos procesales de los procesos constitucionales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo, con lo cual ante la duda, la decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su extinción.²⁶⁶ Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha considerado el principio *pro actione* como parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la justicia y con este del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.²⁶⁷ Finalmente, tenemos al principio de economía procesal lo que implica según Hernando Devis Echandía es que debe tratarse de obtener el mayor resultado posible con el mínimo de empleo de actividad procesal. Según Rodolfo José Vide Espinoza Cevallos el principio de economía procesal trata de afirmar el ahorro de tiempo, de gasto y de esfuerzo en el proceso. Lo que se procura entonces es un proceso ágil, rápido y efectivo. Del mismo modo el Tribunal Constitucional ha utilizado el principio de economía procesal, estrechamente vinculado con el de celeridad que es exigencia de la tutela de urgencia que brinda el amparo, para adecuar vías procesales que fueron mal empleadas por los justiciables.²⁶⁸

De los principios desarrollados o de los que solamente han sido nombrados, podemos concluir con seguridad, que ninguno cuenta con la capacidad individual o con la facultad de unirse y transformarse en otro principio (suplencia de la deficiencia procesal) capaz de corregir el petitorio o de convertir un proceso constitucional en otro. A pesar de ello, se han generado diversas teorías que intentarían demostrar lo contrario.

Gerardo Eto Cruz es contundente cuando afirma que subyace en la aplicación de esta suplencia, sendos principios como el de dirección judicial del proceso, lo propio el principio *pro actione*, tanto como el deber de adecuar las exigencias de las formalidades previstas en el código al logro de los fines de los procesos constitucionales, que son garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Por otro lado, dentro del principio de

²⁶⁶ STC Exp. N° 2286-2005-PA, del 11 de mayo de 2005, FJ 4.

²⁶⁷ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo I...*, cit., p. 607.

²⁶⁸ *Ibíd.*, pp. 581-585.

socialización del proceso, bien cabe encontrar un fundamento complementario que tiene encaje constitucional en el artículo 139, inciso 8, respecto a la aplicación de los principios generales del derecho, como es la equidad, pues si bien ambas partes se supone deben ir con igualdad de armas, la práctica ha institucionalizado que el operador intérprete, sin inclinar la balanza de la imparcialidad, debe flexibilizar su resolución, introduciendo una estimativa axiológica de resarcir las torpezas del postulatorio, con miras a definir el fondo de la controversia constitucional.²⁶⁹

Gerardo Eto Cruz en otro momento señala, el principio de dirección judicial permite y obliga al juez constitucional a que, en caso la pretensión esté planteada de manera incorrecta, o la norma de derecho aplicable haya sido invocada erróneamente, reconozca el trasfondo o núcleo de lo solicitado y se pronuncie respecto de él.²⁷⁰ En consecuencia, tanto en la primera hipótesis (suplencia de queja), como en el iura novit curia, se manifiesta la dirección judicial del proceso.²⁷¹

Mientras que nuestro colegiado constitucional ha señalado en reiteradas oportunidades que el derecho procesal constitucional atiende a distintas finalidades, por lo que sus normas procesales se distancian de las normas procesales ordinarias. Empero, esto no implica el completo desconocimiento de estas sino simplemente que las normas procesales constitucionales deben ser interpretadas de acuerdo a sus propios fines. Haremos referencia al principio de elasticidad en el sentido de que la jurisdicción constitucional debe adecuar sus exigencias formales para así lograr alcanzar sus fines. Entonces, de acuerdo a este principio podremos obviar las reglas formales para la admisión de una demanda en una vía procedimental determinada por lo que del mismo modo serviría como base de la adecuación de los procesos de libertad en otro. Pero también, diferentes autores consideran que la suplencia de la queja se relaciona claramente con el llamado principio pro actione, el cual impone al juez la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho de obtener una resolución válida sobre el fondo, con lo cual, ante la duda, la decisión debe ser por la continuación del proceso y no por su extinción. En relación al principio de dirección judicial del proceso (...) la jurisdicción constitucional no es simple pacificadora de

²⁶⁹ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II...*, cit., p. 23.

²⁷⁰ STC Exp. N° 2302-2003-AA, del 13 de abril de 2005, FJ. 30.

²⁷¹ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo I...*, cit., p. 576.

intereses de contenido y alcances subjetivos, sino del orden público constitucional en conjunto. Como ha señalado el Colegiado Constitucional, con relación a la constitución, la jurisdicción constitucional no actúa ni puede actuar como un órgano neutro, sino, por el contrario, como su principal promotor (STC Exp. N° 00005-2005-PCC/TC F. J. 5).²⁷² Por otra parte, tenemos el principio de economía procesal mediante el cual se establece que los procesos constitucionales no deben revestir costos de actuación excesivos (entendiendo estos como la duración y la cantidad de actos que deben realizarse en un proceso), pues de lo que se trata es de tutelar derechos fundamentales. Podemos señalar, entonces; que la nueva tramitación de una demanda erróneamente planteada iría en contra de este principio, sirviendo esto de fundamento para la conversión procesal.²⁷³

Así mismo; Carlos Mesía señala que en virtud del principio de dirección judicial del proceso y del principio de elasticidad, es obligación de los jueces suplir la queja deficiente así como las deficiencias procesales en que incurra el agraviado.²⁷⁴

Finalmente; respecto de la conversión procesal, debemos mencionar que esta procede cuando la pretensión (la causa petendi y el petitum) del demandante no es acorde con la vía procedimental en la que se busca tutela. Remediar este error puede a su vez implicar una adecuación del petitorio, como también conllevar la aplicación de normas procesales correspondientes al proceso constitucional que se considera adecuado para proteger los derechos fundamentales alegados. Sin embargo, esto no puede llevarnos a afirmar que se trate de una concreción del principio de suplencia de queja sino que (al igual que éste) se deriva del principio de dirección judicial del proceso constitucional que implica la búsqueda de una tutela eficaz de los derechos fundamentales.^{275 & 276}

Lo que a nosotros nos parece, es que cada uno de los principios del proceso constitucional mantiene intacta su naturaleza individual, por lo que sus capacidades, su utilidad jurídica y su vigencia no subyace o depende de manera estricta de los demás principios regulados en el artículo III del Título Preliminar del

²⁷² C.SENISSE ANAMPA, “El principio de suplencia de queja deficiente”..., cit., p.18.

²⁷³ L. ZAVALA REVILLA, “Criterios para la conversión de un proceso constitucional...,” cit., p. 17-18.

²⁷⁴ C. MESÍA RAMÍREZ, *Exégesis del Código Procesal Constitucional. Tomo I...*, cit., pp. 93-94

²⁷⁵ C.SENISSE ANAMPA, “El principio de suplencia de queja deficiente”..., cit., p.18

²⁷⁶ L. ZAVALA REVILLA, “Criterios para la conversión de un proceso constitucional...”, cit., p.19.

Código Procesal Constitucional. Lo que sucede es que ante un problema de orden legal, los principios empiezan a desplegar sus facultades con el objeto de sanar o solucionar el conflicto jurídico que se esté suscitando, cuando estos se ven incapaces individualmente de enmendar, rectificar o corregir tal cuestión es que empiezan a operar en conjunto, generando un nivel de relación y cooperación tan estrecha que entre ellos se comportan como fundamento o soporte jurídico del otro, pero sin abandonar su condición particular o su individualidad. Entonces; y siguiendo la misma figura, cuando se necesite corregir el petitorio o procurar una conversión procesal entre las garantías constitucionales, será la suplencia de la deficiencia procesal la que asuma tal tarea con el respaldo de los demás principios del proceso constitucional.

Por ejemplo, para Víctor García Toma el principio de dirección judicial tiene expresión en los principios de impulso de oficio, elasticidad o informalismo, pro actione o de favorecimiento del proceso”, y también pro omine o de favorecimiento de los derechos humanos.²⁷⁷ Sin embargo, no es que la existencia jurídica del principio de dirección judicial dependa de las facultades de los demás principios mencionados, lo que en realidad sucede, es que éstos actúan sólo como soporte jurídico de las inherentes facultades con las que cuenta el principio de dirección judicial. La misma figura se repite para todos los demás principios, incluido el de suplencia de la deficiencia procesal.

A estas alturas del análisis, se hace necesario reflexionar, en lo que finalmente le da valor a la relación que existe entre los principios del proceso constitucional y la suplencia de la deficiencia procesal, es el deber de oficialidad por parte de los órganos públicos en la medida en que existe la inexorable necesidad de satisfacer el interés público de proteger y defender los derechos fundamentales de la persona. Dicho deber de oficialidad se percibe en el derecho público como la responsabilidad de impulsar, dirigir y encausar cualquier proceso o procedimiento sometido a su competencia funcional, hasta esclarecer y resolver las cuestiones involucradas, aun cuando se trate de casos generados o iniciados por un particular.²⁷⁸

²⁷⁷ V. GARCÍA TOMA, “Comentarios al artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional,” en J. TUPAYACHI SOTOMAYOR (coord.). *Código Procesal Comentado. Homenaje a Domingo García Belaunde*, Adrus, Arequipa, 2009, p. 47.

²⁷⁸ STC Exp. N° 0569-2003-AC, de 05 de abril de 2004, F.J. 14.

1.5. La conversión procesal una condición particular del principio de suplencia de la deficiencia procesal.

1.5.1. Concepto.

La figura de la conversión procesal, es una de las facultades con las que cuenta el principio de suplencia de la deficiencia procesal; su origen normativo se remonta al Artículo 9 de la Ley N° 25398 (Ley que complementa las disposiciones de la Ley N° 23506 en materia de Hábeas Corpus y Amparo) publica el 06 de febrero de 1992 y cuyo texto es el siguiente: *“Si el actor incurre en error al nominar la garantía constitucional (acción de hábeas corpus o acción de amparo) que de conformidad con el artículo 295 de la constitución Política del Perú, quiere ejercer, el juez ante quien ha sido presentada se inhibirá de su conocimiento y la remitirá de inmediato al competente, bajo responsabilidad, para los efectos de la sustanciación y resolución correspondientes.”*²⁷⁹

Como en todo, se han desarrollado numerosos intentos por establecer un perfil que procure representar con mayor claridad y coherencia aquello que podría llegar a considerarse como el concepto de la conversión procesal.

Hay algunos como Edgar Carpio quien señala, y esto parafraseándolo, que con la hipótesis que maneja la Ley N° 25398 simplemente se aludía a una típica causal de improcedencia de la acción, el derivado de la ausencia de un presupuesto procesal objetivo, como es la competencia judicial y que al igual como pasa con el principio mexicano de suplencia de la queja deficiente, cualquier causal de improcedencia anularía la posibilidad de ser aplicada, lo que también pasaría con la conversión procesal y por ende con la suplencia de la deficiencia procesal. Entonces, a juicio de Edgar Carpio y al igual como sucede en México, se cree que, ante tal supuesto, en realidad, no debe operar el principio de la suplencia, ya que la aplicación de éste supone la utilización del proceso adecuado. Menos, desde luego, debe proceder en aquellos casos de procesos conocidos por jueces materialmente incompetentes. En tal supuesto, en realidad, más que una aplicación del principio de suplencia de las deficiencias procesales, creen que se trata de un supuesto de improcedencia de la acción, por carencia de un presupuesto procesal, como antes se ha anotado. En ese

²⁷⁹ Artículo 9 de la Ley N° 25398 (Ley que complementa las disposiciones de la Ley N° 23506 en materia de Hábeas Corpus y Amparo) publica el 06 de febrero de 1992.

sentido, junto con Samuel Abad, suponen que el principio debe limitar el ámbito de su aplicación a “aquellas deficiencias que puedan ser sustituidas o superadas dentro del propio proceso” y “que no impliquen su traslado a otra autoridad judicial para imponerle una competencia no originaria”.²⁸⁰ El argumento citado tiene su límite en la falta de competencia, cuya ausencia genera la improcedencia en cualquier proceso ordinario. Por eso justamente, la conversión procesal se da a nivel de los procesos constitucionales, porque en ellas hay cuestiones más importantes que atender, nos referimos a la supremacía Constitucional pero sobre todo a los derechos fundamentales. Procuramos ser más específicos e intentamos realizar un análisis de las causales de improcedencia citadas en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, pero no encontramos cuál podría ser la causal de improcedencia, que en estricto, se comporte como un límite al ejercicio de la conversión procesal. Es así que nos reafirmamos en que, entre otras cosas más, es justamente la conversión procesal lo que diferente a la suplencia de la deficiencia procesal de la suplencia de la queja deficiente. Luego; contradiciendo su primera teoría que además es seguida por Edgar Carpio Marcos, afirma Samuel Abad Yupanqui, esta disposición (la suplencia de la deficiencia procesal), supera la influencia mexicana pues la falta de un presupuesto procesal (competencia) no podría ser suplida por el juez sino más bien motivaría un rechazo de plano de la demanda. Y es que esta atribución de encaminar y corregir un presupuesto procesal (competencia) desborda los cánones tradicionales de la suplencia. Sin embargo, de acuerdo a la citada ley, la falta del referido presupuesto habilita la suplencia más no el rechazo de plano de la demanda.²⁸¹

Y según Carlos Mesía del artículo 7 de la Ley N° 23506 la jurisprudencia desprendió la obligación judicial no sólo de aplicar el derecho cierto y suplantar el erróneo o deficientemente invocado (*iura novit curia*), sino que también se exigía del juzgador la suplencia de la queja procesal deficiente. Por ejemplo que subsanara el manifiesto error cometido por la parte demandada de llamar habeas corpus a un proceso de amparo o habeas data, situación en la cual el juez debía remitirlo al competente sin necesidad de declarar su rechazo *in limine*. También implicaba que la parte accionante no haya fijado domicilio o que invoque la presentación a futuro de

²⁸⁰ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., pp. 707-708.

²⁸¹ S. ABAD YUPANQUI, *El Proceso Constitucional de Amparo*, cit., p.192.

una prueba en un proceso de garantía constitucional que no tiene etapa probatoria. En todos estos casos, el juez por la naturaleza propia de los intereses en juego estaba en la obligación de enmendar no sólo el derecho deficiente o erróneamente invocado, sino que se le exigía la subsanación de los vicios formales irrelevantes.²⁸² Nosotros creemos que el mencionado autor comete un error importante, el artículo 7 de la Ley N° 23506 promueve la suplencia de la deficiencia procesal y no el iura novit curia, además, a pesar de que la conversión procesal sea una manifestación de la suplencia de la deficiencia procesal, ésta se encuentra regulada en el artículo 9 de la Ley N° 25398 (Ley que complementa las disposiciones de la Ley N° 23506 en materia de Hábeas Corpus y Amparo).

Senisse Anampa, es aún más tajante con su opinión y afirma que el principio de suplencia de la queja deficiente debe limitar el ámbito de su aplicación a aquellas deficiencias que puedan ser sustituidas o superadas dentro del propio proceso, más no aquellas que impliquen un traslado de esta a otra autoridad judicial para imponerle una competencia no originaria. Menos, desde luego, debe proceder en aquellos casos de procesos conocidos por jueces materialmente incompetentes.²⁸³

Se han generado otras teorías en las que se ha intentado sustentar la validez de la conversión procesal en algunos principios del proceso constitucional. Para García Chávarri, el recorrido teórico que ha seguido el Tribunal Constitucional peruano para determinar aquellas consideraciones que, en su criterio, le permitirán al juez la adecuación, reconversión o reencauzamiento de un proceso constitucional, (...) encuentra justificación tanto en el principio iura novit curia como en la figura de la suplencia de la queja.²⁸⁴ Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha señalado que atendiendo a, i) los fines esenciales de los procesos constitucionales; ii) los principios constitucionales dentro de los que encontramos el apotegma iura novit curia y el finalismo procesal que enuncia que el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales; y iii) los principios de celeridad y economía procesal en la solución de controversias, se puede llevar a cabo por excepción una conversión de un

²⁸² C. MESÍA RAMÍREZ, *Exégesis del Código Procesal Constitucional. Tomo I...*, cit., p. 147.

²⁸³ C. SENISSE ANAMPA, "El principio de suplencia de queja deficiente"..., cit., p.22.

²⁸⁴ A. GARCÍA CHÁVARRI, "La Transformación de un Proceso Constitucional en Otro. Anotaciones sobre la Figura Procesal Constitucional de la Reconversión"..., cit., p.44.

proceso de hábeas corpus en uno de amparo, siempre que se evidencie que la parte demandante acudió erróneamente al proceso de hábeas corpus ya que de los actuados se acredita que la demanda interpuesta se encontraba dentro del plazo para interponer el amparo, pues se debe manifestar la exigencia de una tutela urgente que de no ampararse en sede del Tribunal Constitucional daría lugar a la irreparabilidad de la vulneración de un derecho fundamental de la persona humana.²⁸⁵ Finalmente; Gerardo Eto Cruz dice que la posibilidad de efectuar conversiones entre procesos constitucionales de la libertad, ha sido una tarea que el Tribunal Constitucional ha abordado precisando que el modelo de jurisdicción constitucional que tenemos en nuestro país es un primer argumento que sirve para poder convertir un proceso de habeas corpus en uno de amparo, toda vez que el juez conoce de los procesos constitucionales, le interesa impartir en estricto la tutela jurisdiccional efectiva y es obvio que la conversión procesal se encuentra rodeada de diversos principios procesales que subyacen en estos procesos constitucionales. Por otro lado el Tribunal Constitucional estima que la conversión procesal se encuadra en el principio de suplencia de la queja deficiente, por medio de la cual el Tribunal puede suplir las deficiencias formales en que haya incurrido la parte actora, al momento de plantear su demanda, encauzando correctamente el trámite procesal deficientemente formulado, siempre y cuando no se altere con ello los términos sustanciales del petitorio planteado. Otro argumento que utiliza el Tribunal Constitucional como razonamiento para justificar la legitimidad de la conversión procesal son los principios que inspiran esta clase de procesos, más concretamente los principios de elasticidad o adecuación de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales, establecido en el cuarto párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en virtud del cual los jueces deben atender a los fines que persiguen los procesos constitucionales, sin sujetarse a las formalidades que no incidan en la protección de algún otro bien constitucional.²⁸⁶ Nosotros vemos esta cuestión de manera más sencilla; la conversión procesal es una facultad de la suplencia de la deficiencia procesal, y son todos los principios del proceso constitucional los que al no

²⁸⁵ STC Exp. N° 05761-2009-PHC, del 13 de mayo de 2010, (F.J. 6). Del voto singular del magistrado Vergara Gotelli.

²⁸⁶ G. ETO CRUZ, *El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano...*, cit., pp.342-343.

contar con la capacidad individual para solucionar el problema jurídico, que en este caso es la incompetencia procesal, estos principios entran en un estado de relación tan estrecha que sin perder sus facultades e individualidades, contribuyen con el despliegue pleno de las facultades de la suplencia de la deficiencia procesal, y en este caso en específico, con el de la conversión procesal.

Sin embargo; también hay de aquellos que tienen una visión no sólo más amigable de la conversión procesal, sino, más reflexiva y coherente. Zavaleta Revilla señala en este contexto que, era recurrente que luego de haber transitado por las diferentes instancias del Poder Judicial, al comprobarse que el proceso constitucional iniciado no era el apropiado, el Tribunal Constitucional (en aplicación del citado precepto legal) declarase nulo todo lo actuado y remitía la causa al juez que correspondía para iniciar un nuevo proceso en atención al derecho fundamental presuntamente lesionado (STC Exp. N° 02532-2003-HD/TC). Resulta innecesario entrar en detalle sobre lo que esto significa para quien había acudido al proceso constitucional esperando en recibir justicia cierta y oportuna, o más concreta. Estábamos, pues, ante una práctica que remecía los cimientos de la justicia constitucional. Luego de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional (si bien no se encuentra explícitamente alguna disposición al respecto), en diversos casos en los que el demandante invocaba incorrectamente la garantía constitucional a la cual buscaba acceder, el Tribunal Constitucional procedía a convertir el proceso constitucional y a emitir pronunciamientos de fondo. Así, consideró que no era adecuado obligar al justiciable a volver a recorrer el largo proceso en búsqueda de una decisión que reivindique su derecho fundamental.²⁸⁷

Es que la deficiencia procesal (...) puede comprender, cabalmente, un error relativo a un presupuesto procesal como es el que respecta a la competencia y, en tal sentido, susceptible de ser oportunamente enmendado. El mencionado principio de nuestro derecho procesal constitucional impone el deber que tiene el juez, de enmendar las omisiones o deficiencias en las que, eventualmente, haya incurrido el demandante, ello con el propósito de que se pueda facilitar el acceso a la tutela jurisdiccional, (...) además de optar por alternativas que maximicen la oportunidad de acceder a la justicia constitucional, por lo que el artículo 9 de la Ley N° 25398 impone

²⁸⁷ L. ZAVALA REVILLA, “Criterios para la conversión de un proceso constitucional...,” cit., p.15.

al juez el deber de remitir al componente cuando se haya incurrido en un error de denominación de la acción de garantía.²⁸⁸ Es decir; ante un evidente error del accionante en el planteamiento de la demanda, el juez debe actuar con diligencia a efectos de adecuarla a la vía correspondiente, máxime cuando, de conformidad con el citado artículo 9, se establece imperativamente que debe procederse de ese modo, bajo responsabilidad. La importancia y la obligatoriedad del ejercicio de este deber procesal de suplencia se sustenta en el rango constitucional de los derechos que se protegen a través de este tipo de procesos.²⁸⁹

Cuando se ha puesto en duda la vigencia de la suplencia de la deficiencia procesal, implícitamente también se lo ha hecho de la conversión procesal, por lo que toda la teoría desarrollada a inicios de éste capítulo para defender la vigencia de la suplencia de la deficiencia procesal, también sirve para defender la vigencia de la conversión procesal que viene a constituir contenido de la primera. Para Juan Monroy Gálvez, uno de los principales sustentos que ha permitido llevar a introducir la figura de la conversión de los procesos constitucionales es, sin duda alguna, la denominada autonomía procesal del Tribunal Constitucional, referida a la capacidad para establecer a través de su jurisprudencia, normas que regulen los procesos constitucionales en aquellos aspectos en los que la norma presente vacíos o deba ser perfeccionada o adecuada en atención a sus fines.²⁹⁰ Podemos encontrar su fundamento normativo en el artículo 201 de la constitución, que establece: “*El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente...*”. El propio Colegiado Constitucional ha establecido que: “tiene la potestad de modular, procesalmente, el contenido y los efectos de sus sentencias en todos los procesos constitucionales (...). Este principio de autonomía procesal permite al Tribunal Constitucional determinar, en atención a las circunstancias objetivas de cada caso, a resolver las consecuencias que puedan generar los efectos de sus sentencias y el contenido de estas. (STC Exp. N° 05033-2006-PA/TC, F. J. 62). En atención a la autonomía procesal es posible afirmar que resulta necesario flexibilizar las reglas procesales para así poder subsanar los errores de los justiciables al acudir a una vía

²⁸⁸ STC Exp. N° 933-2000-AA, del 12 de junio de 2002, F.J. 2.

²⁸⁹ STC Exp. N° 1120-2002-HC, del 20 de junio de 2002, F.J. 3.

²⁹⁰ L. ZAVALA REVILLA, “Criterios para la conversión de un proceso constitucional...,” cit., p.16.

procedimental inadecuada, adecuándola a la que conlleve la efectiva tutela de los derechos fundamentales, cumpliendo así con los fines del proceso constitucional.²⁹¹

Entonces; la conversión procesal, es una de las facultades de la suplencia de la deficiencia procesal. Lo que hace es convertir un proceso constitucional en otro, cuando de los fundamentos de hecho o de derecho o del petitorio, se logre colegir coherentemente que el juez y que dicha garantía constitucional es incompetente para el caso en cuestión. Estaba regulado en el artículo 9 de la Ley N° 25398 (Ley que complementa las disposiciones de la Ley N° 23506 en materia de Hábeas Corpus y Amparo) y que hoy, según el Tribunal Constitucional, su vigencia es implícita en nuestro Código Procesal Constitucional. Su fundamento se encuentra en el poder-deber de proteger la supremacía de la Constitución y la vigencia de los derechos humanos, por medio de un proceso en el que se garantice de primera mano el orden legal e institucional, así como, los derechos que nacen de la propia naturaleza de las personas y su lógica dignidad.

1.5.2. Reglas para la aplicación de la figura de la conversión procesal.

Algunas reglas de carácter procesal, han sido utilizadas como principio y límites de la actividad conversiva; estas van a servir como parámetro para los jueces constitucionales, sea cual fuere su instancia, a fin de evitar posibles desbordes en su aplicación.

Así para convertir un proceso constitucional de hábeas corpus en uno de amparo, habrá que tener presente las siguientes reglas:²⁹²

“Primero: La conversión no es obligatorio para los jueces constitucionales de primera instancia, más sí para los de segunda y última instancia, lo cual no significa que ante la observancia de afectación de un derecho fundamental distinta a la libertad personal los a-quo puedan admitir a trámite la demanda entendiéndola como amparo.

Con esta aseveración, el Alto Tribunal reafirma que, al derivarse del rol del juez constitucional como director del proceso, este tiene la obligación de adecuar

²⁹¹ Ibídem, p. 17.

²⁹² STC Exp. N° 05761-2009-PHC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 27.

el proceso constitucional al que sea el idóneo para asegurar el resguardo de los derechos fundamentales, reservando la mera potestad al juez de primera instancia.²⁹³

Sin embargo; ya hemos asumido a lo largo de este capítulo, que la suplencia de la deficiencia procesal es susceptible de ser aplicada a lo largo de todo el proceso. Pero además, hemos llegado a convenir que la suplencia de la deficiencia procesal es un poder-deber que tiene el juez; éste poder-deber lleva implícito un nivel de obligatoriedad que se hace presente a lo largo de todo el proceso y en todos los niveles en que las facultades propias de la suplencia de la deficiencia procesal (como la conversión procesal), pueden actuar. Por lo que consideramos que la obligación de convertir un proceso constitucional en otro, también debe estar presente en los jueces de primera instancia.

Segundo: La conversión deberá observar que el plazo de prescripción de la demanda no haya vencido, pues de lo contrario estaríamos alentando la posibilidad de que una persona a la que, por imprudencia o desidia, se le venció el plazo para interponer un proceso constitucional de amparo se sirva del hábeas corpus para ingresar su pretensión y esta sea objeto de tutela.

Este criterio busca desincentivar que se utilice la adecuación para que, habiendo vencido el plazo para interponer un proceso constitucional, se reingrese su pretensión en busca de tutela, desnaturalizando esta institución.²⁹⁴

Tercero: La conversión deberá verificar la legitimidad para obrar del demandante, máxime si tenemos en cuenta que la legitimidad para obrar en ambos procesos son sustancialmente distintos, pues mientras en el hábeas corpus la legitimación es flexible, es decir, puede ser interpuesto, además del directamente afectado, por cualquier persona en su representación, sin necesidad de contar con poder para tal efecto; en cambio en el amparo la demanda solo puede ser interpuesta por el directamente afectado o por otra persona en su representación con poder para ejercer dicha potestad. Esta regla puede ser relativizada en tanto y en cuanto haya sido posible que el propio beneficiario muestre su conformidad con la instauración del proceso constitucional.

²⁹³ L. ZAVALA REVILLA, “Criterios para la conversión de un proceso constitucional...,” cit., p.22.

²⁹⁴ *Ibíd.*, p. 22.

Esto es consecuencia lógica de que la legitimidad para obrar varía de acuerdo a qué proceso constitucional hagamos referencia. Por esto se requerirá que, en todo caso, el propio beneficiario haya manifestado su conformidad con la incoación (inicio) del proceso constitucional.²⁹⁵

Cuarto: La conversión en ningún caso se podrá variar el petitorio ni la fundamentación fáctica de la demanda, pues lo contrario supondría que el juez, sustituya a la parte accionante dentro del proceso lo cual no se condice con la naturaleza imparcial que han de tener los juzgadores, además al modificar los hechos el juez estaría pervirtiendo la realidad o, si se quiere, creando una realidad ajena a la planteada por las partes, lo que si le estaría absolutamente vedado. Del mismo modo, el juez constitucional no podrá variar el petitum o petitorio, porque de lo contrario se estaría violando el principio de congruencia procesal. Pero ello no significa, como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional, en la (STC 3509-2009-PH, fundamento 4), que se determine, a partir de los hechos incorporados por el demandante, el derecho que corresponde ser tutelado, (“Da mihi factum, dado tibi ius” que significa “dame los hechos que yo te doy el derecho”). Es decir; estos límites se derivan del principio de imparcialidad, pues de lo contrario el juez actuaría como parte accionante dentro del proceso, así como del principio de congruencia procesal, en virtud del cual el juez constitucional no podrá resolver pretensiones que no hayan sido formuladas.²⁹⁶

Nosotros estamos de acuerdo en que los fundamentos fácticos no pueden ser alterados por el juez constitucional; sin embargo, modificar el petitorio para reivindicar el derecho realmente vulnerado, es una de las facultades de la suplencia de la deficiencia procesal. La modificación del petitorio, es el resultado de un análisis coherente de los fundamentos de hecho que arrojaron como resultado la vulneración de un derecho distinto al que se pensaba en primera instancia. En el petitum, más allá de las particularidades de cada caso, siempre deberá consistir en que se constate la afectación del contenido constitucionalmente protegido de determinado derecho fundamental, en otras palabras dependerá siempre del juez constitucional el determinar, a partir de los hechos incorporados por el demandante, el derecho que corresponde ser tutelado. Por lo tanto, la modificación del petitorio puede generar a su

²⁹⁵ Ibídem, p. 22.

²⁹⁶ Ibídem, p. 22.

vez que el juez constitucional tome la decisión de convertir un proceso constitucional en otro.

Quinto: Ha de existir riesgo de irreparabilidad del derecho; la conversión será posible sólo si existe una necesidad apremiante de evitar la ocurrencia de un daño irreparable en los derechos fundamentales involucrados.

Es decir, sólo se podrá aplicar la conversión procesal en los casos en los que de remitirse la demanda al juez adecuado para emitir pronunciamiento, exista el riesgo de que ocurra un daño irreparable en los derechos fundamentales involucrados.²⁹⁷

Sentimos que todo sujeto que interpone una demanda de orden constitucional, es porque no sólo siente que su derecho que es fundamental se está viendo vulnerado, sino que, en la medida en que ese derecho no sea atendido, se van a producir graves daños que si no son irreparables, van a ser de notable perjuicio para la parte. Es más, esperar que la irreparabilidad de un derecho sea un factor determinante para que la conversión procesal pueda ser aplicada, nos parece una irresponsabilidad, más aún, cuando está a la mano poder solucionar y salvaguardar un derecho que más aún por ser fundamental, merece toda la atención posible.

Sexto: La conversión deberá preservar el derecho de defensa del demandado. Al aplicar este requisito el juez constitucional habrá de ser muy escrupuloso en verificar si el demandando ejerció de modo sustancial su derecho de defensa, pues este colegiado considera que en ningún caso se puede habilitar la tutela de un derecho fundamental si es que se está dejando desprotegido a otro de la misma clase.”

Cómo se podría estar vulnerando el derecho a la defensa, si lo único que hace la suplencia de la deficiencia procesal a través de la conversión procesal, es aclarar el panorama del proceso en base a una competencia cierta. Esto sólo le va a permitir al demandado saber realmente de qué y cómo defenderse. “Por lo que si en la adecuación del petitorio no se afecta el derecho de defensa de la parte emplazada, el Tribunal no habrá sobrepasado sus límites de adecuación permitidos por el ordenamiento jurídico.”²⁹⁸

²⁹⁷ *Ibidem*, p. 22.

²⁹⁸ STC Exp. N° 04080-2004-AC, del 28 de enero de 2005, F.J. 8.

El Tribunal Constitucional, correctamente, considera que para realizarse la adecuación procesal se deberá tutelar, a su vez, el derecho de defensa de la otra parte del proceso, debiendo comprobar que este derecho haya sido ejercido de manera efectiva.²⁹⁹

De esta manera, el Tribunal Constitucional ha tratado de delimitar el ámbito de actuación del juez constitucional (incluyendo el suyo propio, en virtud de su autonomía procesal), para aplicar la institución procesal de la conversión de un proceso constitucional de libertad en otro. Así, pretende coadyuvar a asegurar la predictibilidad de sus sentencias, recayendo esto en la promoción de la seguridad jurídica, sin dejar de lado el valor de justicia subyacente en los procesos constitucionales.³⁰⁰ Sin embargo; en nuestra opinión se han cometido excesos y contradicciones que atentan con la misma esencia de la suplencia de la deficiencia procesal y su capacidad para convertir un proceso constitucional en otro, así como con la misma finalidad con las que deberían gozar todas las garantías constitucionales: velar por la supremacía de la Constitución y derechos fundamentales por sobre cualquier cuestión de orden procesal. Estos desacuerdos los hemos hecho saber dentro de las reglas que acabamos de precisar y que bajo el criterio legal, doctrinario y jurisprudencial que hemos venido siguiendo a lo largo de todo el capítulo, encuentran larga y sólida fundamentación.

1.5.3. Criterios que sustentan la figura de la conversión procesal.

Se dice en García Chávarri que el supremo intérprete en materia constitucional señaló que la posibilidad de la reconversión de un proceso constitucional en otro es la única forma en que se podrán proteger adecuadamente derechos de las personas. El alto Tribunal fundamentó esta opción tanto en el principio *iura novit curia* como en la figura de la suplencia de la queja, además de enfatizar las características del Derecho Procesal Constitucional y en la finalidad que persiguen los procesos constitucionales.³⁰¹ Entonces, cuando una demanda ha sido mal planteada, pese a que este Colegiado está autorizado a disponer la nulidad de los actuados y el reencauzamiento de la demanda, también puede aceptarse la reconversión (adecuar,

²⁹⁹ L. ZAVALA REVILLA, “Criterios para la conversión de un proceso constitucional...,” cit., p.22.

³⁰⁰ *Ibidem*, p. 23.

³⁰¹ STC Exp. N° 07873-2006-PC, del 23 de octubre de 2006. F.J.6.

reencausar o reconvertir) de un proceso constitucional en otro, si es que las circunstancias así lo ameritan. Este se puede dar, tal y como lo ha ido reconociendo nuestra jurisprudencia bajo ciertas premisas, que pueden ser las siguientes:^{302, 303, 304, 305 & 306}

I. Que el juez de ambos procesos tenga las mismas competencias funcionales.

Tanto el amparo como el hábeas data y el cumplimiento son tramitados por jueces especializados en lo civil o en la constitucional, tal como se establece para el primero en el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, y se extiende para los otros dos en los artículos 65 y 74 del mismo cuerpo normativo.

Este requisito se cumpliría en la adecuación procesal. Sin embargo, en caso del proceso de hábeas corpus, en consonancia con sus características de tutela de urgencia, este es resuelto en la vía penal, por lo que la conversión de este proceso tendría reglas especiales.³⁰⁷

II. Que se mantenga la pretensión originaria de la parte demandante.

Sólo se podrá admitir la conversión si la pretensión planteada en la demanda es respondida por el juzgador a través de la sentencia que va a emitir. De este requisito podemos concluir la diferencia entre la suplencia de queja deficiente y la potestad para convertir un proceso constitucional en otro, por lo que no podrá adecuarse la vía procedimental en conjunto con el petitorio, ya que se desnaturalizaría la presente institución.³⁰⁸

III. Que existan elementos suficientes para determinar la legitimidad para obrar activa y para poder resolver sobre el fondo del asunto.

Que, siguiendo el contenido del artículo 9 del Código Procesal, no deban actuarse pruebas adicionales en el proceso, el mismo que debe ser resuelto con las herramientas que el mismo expediente brinda.

En el análisis de los actuados, que el Tribunal concluye por adoptar la figura de la conversión por requerir otra vía procedimental para la protección de

³⁰² STC Exp. N° 07873-2006-PC, del 23 de octubre de 2006, F.J. 9.

³⁰³ STC Exp. N° 1052-2006-PHD, del 14 de marzo de 2006, F.J. 4.

³⁰⁴ STC Exp. N° 4080-2004-AC, del 28 de enero de 2005, F.J. 8.

³⁰⁵ STC Exp. N° 03674-2007-AA, del 14 de abril de 2009, F.J. 9.

³⁰⁶ A.GARCÍA CHÁVARRI, “La Transformación de un Proceso Constitucional en Otro. Anotaciones sobre la Figura Procesal Constitucional de la Reconversión”..., cit., pp.54-58.

³⁰⁷ L. ZAVALA REVILLA, “Criterios para la conversión de un proceso constitucional...,” cit., p.21.

³⁰⁸ *Ibidem*, p. 21.

derechos fundamentales. No se podrá adicionar prueba alguna sin que se corra el riesgo de vulnerar el derecho de defensa.³⁰⁹

IV. Que se estén cumpliendo los fines del proceso constitucional.

Si bien se estaría yendo en contra del cauce normal de un proceso, la autonomía procesal y el principio de informalidad que rige este tipo de proceso, además de los principios de dirección judicial del proceso, pro actione y economía procesal, previstos en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, autoriza canalizar la búsqueda de justicia, como valor supremo de la Constitución, a través de la judicatura constitucional. Nosotros creemos que todos los principios del proceso constitucional son importantes, pero si habría que aumentar algunos a la relación anteriormente citada, serían el principio de iura novit curia y el de adecuación de las exigencias de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales o principio de elasticidad.

La conversión debe ceñirse al cumplimiento de los fines del proceso constitucional, pues su fundamento principal es que se pueda garantizar la adecuada tutela de los derechos fundamentales. Es decir, la adecuación se debe a que la demora en el nuevo trámite de la demanda pueda conllevar al riesgo de que la violación o amenaza se vuelva irreparable.³¹⁰

V. Que sea de extrema urgencia la necesidad de pronunciarse sobre el mismo.

Es cierto que la búsqueda natural de protección a quienes reclaman el resguardo de un derecho a través de un proceso constitucional, hace que este se convierta en un proceso de tutela urgente, toda vez que se consideran improcedentes las demandas cuando existan vías procedimentales específicas, tal como lo explica el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, pero en los casos de reconversión se hace necesario que el caso no sea solo apremiante, sino además que sea considerablemente perentorio e inminente, elemento que ha quedado claramente establecido en el fundamento 5 de la sentencia del Exp. N° 2763-2003-AC/TC.

VI. Que exista predictibilidad en el fallo a pronunciarse.

Se considera que si el juzgador es consciente del tipo de fallo a emitirse, y pese a que existe un error en la tramitación de la demanda, debe ordenar su

³⁰⁹ Ibídem, p. 21.

³¹⁰ Ibídem, p. 21.

conversión, tal como se ha dejado sustentado en la sentencia del Exp. N° 0249-2005-PC/TC F.J. 5.

Este criterio, derivado de los principios *pro actione* y de elasticidad, implica que deben prevalecer la oportuna protección de derechos fundamentales sobre las cuestiones formales en caso de que exista cierto grado de convicción en el juez para considerar que el fallo a emitir resultará fundando en alguno de sus extremos.³¹¹

Sólo cuando concurren copulativamente tales requisitos, este Colegiado se encontrará autorizado para reducir a una vía procedimental más acorde con la petición del recurrente y dejar de lado el proceso inicial.

“Según García Chávarri, es importante señalar que el listado de estos criterios o premisas no es cerrado, por lo que podrían incorporarse otros, o mejores. No obstante, sí resulta conveniente ofrecer algunos comentarios.

Respecto del primer criterio, es decir, “que el juez de ambos procesos tenga las mismas competencias funcionales”, se entiende que los procesos constitucionales que pueden ser objeto de adecuación o reconversión son los de amparo, habeas data y cumplimiento, y no así el de habeas corpus que no se tramita por el juez civil, sino, como se sabe, por el juez penal. Si el objetivo de la reconversión es la tutela urgente de los derechos fundamentales, quizá sería conveniente no cerrar esta alternativa. Otra medida, acaso más importante, sea la de la puesta en marcha de los jueces constitucionales, como aquella magistratura especializada en estas materias.

Es más, nosotros creemos que no habría razón alguna para dejar de lado a ninguna de las garantías constitucionales. La razón es que el límite impuesto sólo responde a simples apariencias, los jueces son jueces, las denominaciones son sólo tarjetas de presentación, y más aún cuando en el fondo todos resuelven procesos constitucionales; lo importante de todo esto, es que el derecho vulnerado, llegue al juez competente y encuentre auxilio judicial que le permita garantizar la supremacía de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales.

El segundo criterio, esto es, “que se mantenga la pretensión originaria de la parte demandante”, es natural consecuencia de las limitaciones tanto al principio *iura novit curia* como de la figura de la suplencia de la queja.

³¹¹ *Ibídem*, p. 22.

No estamos de acuerdo ni con la premisa que da origen a esta observación, ni con la observación en sí misma. Nosotros creemos que esto va a depender de un análisis previo que se haga a la pretensión en su conjunto, por lo que si de los hechos se desprende que los fundamentos de derecho y el petitorio no son los correctos pues estos tendrán que ser modificados, y de ser el caso, esto también podría generar una incompetencia procesal por lo que habría la obligación de convertir un proceso constitucional en otro. La condición estática de la pretensión, salvo los fundamentos de hecho, nunca ha sido límite, según corresponda a sus facultades, ni para el iura novit curia ni para la suplencia de la deficiencia procesal, porque de lo contrario la estructura de estos principios se vería deformada.

El tercer criterio contiene dos exigencias. La primera es “que existan elementos suficientes para determinar la legitimidad para obrar activa” mientras que la segunda es que existan los mismos elementos suficientes “para poder resolver sobre el fondo del asunto”. Se puede estimar que la primera de las exigencias resulta un tanto innecesaria de explicar, en tanto que es un supuesto no solo predicable a los posibles casos de adecuación o reconversión sino a toda relación jurídico-procesal para que sea válida. Sobre la segunda parte, esto es, sobre la existencia de elementos suficientes para resolver el fondo del asunto, el Alto Tribunal ha detallado que ello implica que “no deban actuarse pruebas adicionales en el proceso, el que debe ser resuelto con las herramientas que el mismo expediente brinda.

Respecto a la cuarta premisa, ella demanda “que se estén cumpliendo los fines del proceso constitucional”. A lo largo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha podido apreciar el necesario énfasis que se pone en la finalidad de los procesos constitucionales, que no es otra que la defensa de la supremacía de la Constitución (tanto respecto de los derechos fundamentales que recoge o establece, cuanto también de su parte orgánica).

El quinto criterio exige “que sea de extrema urgencia la necesidad de pronunciarse”. Como es de conocimiento general, los procesos constitucionales, en tanto tienen que ver con la tutela de aquellos derechos de la persona que son fundamentales, reclaman una tramitación célere y urgente para su reparación. Es consecuencia de ello que el Tribunal Constitucional prefiera reconvertir un proceso constitucional a otro antes que declarar su improcedencia. Como ya lo habíamos hecho

notar consideramos que todo proceso constitucional que procura la revaloración del valor constitucional y de los derechos fundamentales, devine siempre en urgente y apremiante; porque en última instancia lo que hacen es resguardan la estabilidad estatal y jurídica de toda los ciudadanos.

Ahora bien, este criterio es también utilizado para evaluar si una vía es igualmente satisfactoria, a tenor de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional.

El último de los criterios, como se ha anotado, es enunciativo, es “que exista predictibilidad en el fallo a pronunciarse”, esto implica que le pide al juez constitucional que no declare la improcedencia de una demanda si ya se formó fundada opinión sobre el sentido del fallo a emitir.

Como se puede observar, los criterios o premisas planteadas por el Tribunal Constitucional son consecuencia de no perder de vista la finalidad de los procesos constitucionales. Sobre la base de esta idea fundamental, que le brinda sustento, el Alto Colegiado, en aplicación de figuras como el principio iura novit curia o la suplencia de la queja, desarrolla sus importante tareas que no tienen otro norte que la protección de los derechos fundamentales y el resguardo de la supremacía de la Constitución.”³¹²

1.5.4. Algunos casos en los que se aplicó la figura de la conversión procesal.

En los ejemplos que a continuación pasaremos a detallar, podremos observar una serie de criterios que se llegaron a tomar en cuenta para concluir si era factible o no la conversión procesal. Entre los casos que vamos a citar, se llegaron a considerar en algunas ocasiones, como el fundamento de la conversión procesal, al iura novit curia; en otras a la suplencia de la queja, en otra a la suplencia de la deficiencia procesal, y finalmente en otros casos, a algunos de los principios del proceso constitucional regulados en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en especial, al principio de dirección judicial, al principio de elasticidad, al principio pro actione o al principio de economía procesal. Otra cosa que

³¹² A.GARCÍA CHÁVARRI, “La Transformación de un Proceso Constitucional en Otro. Anotaciones sobre la Figura Procesal Constitucional de la Reconversión”..., cit., pp.56-58.

siempre está fundamentalmente presente, es la idea de que la conversión procesal sólo es posible entre los procesos constitucionales de la libertad; pero como ya lo habíamos señalado, nosotros no creemos eso. Sucede que, en virtud, todas las garantías constitucionales persiguen de alguna forma o la supremacía de la constitución que tácitamente implica un orden legal e institucional; pero también, naturalmente se busca la vigencia de los derechos fundamentales, ambos importantes, no sólo a nivel personal o individual, sino fundamentalmente colectivo.

➤ Exp. N° 933-2000-AA/TC de 12 de junio del 2002, Caso Magali García Zamora. El objetivo de la acción de amparo interpuesta es que se declare la no aplicación de la Resolución Directoral 002-99-UTES-3-CH-UP, según el artículo 29 de la Ley 23506, corresponde al juez de esa ciudad y no la de Trujillo, conocer la acción interpuesta. Pese a ello, aun cuando el demandante incurrió en error al interponer la demanda ante el juez incompetente, el juez debió, de oficio, de conformidad con el principio de suplencia de queja deficiente, suplir esa deficiencia y remitir la demanda al juez competente en la ciudad de Chepén. La deficiencia procesal a la que alude el precitado artículo 7 puede corresponder, cabalmente, un error relativo a un presupuesto procesal como es el que respecta a la competencia y, en tal sentido, susceptible de ser oportunamente enmendado. El mencionado principio de nuestro Derecho Procesal Constitucional impone el deber que tiene el juez de enmendar la omisiones o deficiencias en las que, eventualmente, haya incurrido el demandante, ello con el propósito de que se pueda facilitar el acceso a la tutela jurisdiccional, dado que, además, el principio pro actione impone que el juez, en lugar de optar por alternativas que supongan el estrechamiento del derecho de acceso a la justicia, como sería la de declarar improcedente una demanda por un error del recurrente respecto a la competencia territorial, deba acoger aquellas que impliquen, por el contrario, una optimización o mayor eficacia del derecho referido. Autoriza o refuerza esta interpretación el hecho de que, como proyección aplicativa del mismo principio, el artículo 9 de la ley 25398 imponga al juez el deber de remitir al competente cuando se haya incurrido en un error de denominación de la acción de garantía.³¹³

➤ Exp. N° 790-2000-AC/TC Caso Lupe León Flores c/ Municipalidad Distrital de Rázuri. El Tribunal consideró que el petitorio de la demanda no se

³¹³ STC Exp. N° 933-2000-AA, del 12 de junio del 2002, F.J. 2.

adecuaba con el objeto de la acción de cumplimiento, pues ésta, en realidad se dirigía a obtener protección del derecho de acceso a los documentos públicos, protegido por el hábeas data. El Tribunal se pronunció sobre el fondo, amparándose en la suplencia de la queja.³¹⁴

➤ Exp. N° 1144-2002-AC/TC Caso Lorenzo Ortiz Castañeda c/ONP. Después de advertir que la pretensión debió deducirse en un amparo y no como se había efectuado, en la acción de cumplimiento, amparándose en los principios de economía y celeridad procesal, el Juez de los derechos fundamentales decidió resolver la pretensión como si se tratara de un proceso de amparo.³¹⁵

➤ Exp. 1052-2006-PHD/TC, reconversión de hábeas data en amparo. Tras constatarse que la reclamación planteada ha sido erróneamente tramitada como hábeas data, cuando lo debió ser por vía de amparo, bien podría este Colegiado disponer la nulidad de los actuados y el reencauzamiento de la demanda. Sin embargo, tomando en consideración que el juzgador competente es exactamente el mismo en ambos casos y que resultaría inoficioso rehacer un procedimiento cuando existen suficientes elementos para merituar su legitimidad, este Tribunal estima pertinente proceder a la inmediata reconversión del proceso planteado en uno de amparo. Por lo demás, esta alternativa se encuentra sustentada en el principio *Iura Novit Curia*, reconocido en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional, y ha sido utilizada en otras oportunidades como sucedió, por ejemplo, con la sentencia recaída en el Exp. 2763-2003-AC/TC, en que una demanda de cumplimiento fue reconvertida y resuelta como una de amparo.³¹⁶

➤ Exp. N° 07873-2006-PC/TC. Este Colegiado considera importante, como parte de su autonomía procesal, aceptar la posibilidad de esta reconversión, pues esta es la única forma en que se podrán proteger adecuadamente derechos de las personas. El sustento que legitima esta actuación ha sido muy diverso en la jurisprudencia constitucional. En diversa jurisprudencia se ha señalado que esto se basa en el principio *iura novit curia*, previsto en el artículo VIII del Código Procesal

³¹⁴ STC Exp. N° 790-2000-AC, del 22 del enero de 2001, F. J. 3.

³¹⁵ STC Exp. N° 1144-2002-AC, del 4 de noviembre de 2002, F.J. 3.

³¹⁶ STC Exp. N° 1052-2006-PHD, del 14 de marzo de 2006. F.J. 4.

Constitucional, pues esta norma no sólo tutela la eficacia de los derechos sustantivos, sino también los adjetivos, lo cual iría de la mano con la suplencia de queja.³¹⁷

➤ Exp. N° 05361- 2007-PC/TC. Este caso el Tribunal Constitucional remite a los fundamentos desarrollados en el Exp. N° 07873-2006-PC/TC para reconvertir el proceso de cumplimiento a uno de amparo.³¹⁸

➤ Exp. N° 481-2000-AA/TC. El Tribunal Constitucional estimó que si bien la orientación señalada por el petitorio referido sugiere un trámite procesal propio del habeas corpus y no del proceso de amparo, el Tribunal considera que, al estar comprometidos otros derechos constitucionales como la igualdad ante la ley y la libertad de asociación, la presente vía resulta la más adecuada para resolver la presente controversia. Como puede apreciarse, el Alto Colegiado, en aplicación del principio *iura novit curia*, entiende que si bien el recurrente presentó una demanda por la vulneración de su derecho a la libertad de tránsito, los derechos fundamentales más bien involucrados son los de igualdad y asociación. Para retomar los conceptos vertidos en el primer apartado de este trabajo, lo ocurrido aquí fue un caso de suplencia de error.³¹⁹

➤ Exp. N° 2763-2003-AC/TC. El Tribunal Constitucional estimo que (...) el objeto de la demanda no es tanto demandar el cumplimiento de la ley N° 27550, sino mas bien cuestionar un comportamiento lesivo de derechos constitucionales, y que por ello la vía idónea la resolver la controversia no es la acción de cumplimiento, sino el amparo. En otros términos, adecuó o reconvirtió el proceso de cumplimiento inicialmente desarrollado a un proceso de amparo. La justificación de esta decisión se encuentra en la urgencia de restituir los derechos fundamentales lesionados. En los términos del Alto Colegiado, aunque en aplicación del principio de suplencia de la queja deficiente, previsto en el artículo 7 de la Ley N° 23506, se podría declarar la nulidad del procedimiento seguido y devolver los actuados al juez competente a efectos de que la pretensión sea tramitada como amparo, este Tribunal considera innecesaria la aplicación de tal principio, habida cuenta de la urgencia de restituir los derechos reclamados y de la correlativa necesidad de que el presente

³¹⁷ STC Exp. N° 07873-2006-PC, del 23 de octubre de 2006, F.J. 6.

³¹⁸ STC Exp. N° 05361- 2007-PC, del 17 de diciembre de 2007. F. J. 1.

³¹⁹ STC Exp. N° 481-2000-AA, del 6 de diciembre de 2001, F.J. 2.

proceso se resuelva de forma oportuna y efectiva, de modo que se pronunciará de inmediato sobre el fondo de la controversia.³²⁰

➤ Exp. N° 1052-2006-PHD/TC. El Tribunal Constitucional observó si lo solicitado por el demandante (la entrega de información vinculada con la compraventa de un local comercial y que obra en poder de una entidad privada) es pasible de ser tutelado por el proceso de habeas data. A consideración del Alto Colegiado, lo requerido por el demandante no corresponde, en rigor, al derecho de acceso a la información pública ni al derecho a la autodeterminación informativa, que son tutelados por el habeas data; sino más bien con elementos propios del derecho a la protección del consumidor y usuario, en tanto que (...) lo que persigue en el fondo (...) es acceder a una información que (...) le pertenece (...) por el simple hecho de tener relevancia para sus propios intereses, siendo esta la perspectiva cabe precisar que al tratarse de informaciones derivadas de una relación económica entablada entre la empresa constructora (en su condición de ofertante) y el recurrente (en su condición de comprador), con motivo de un contrato de compraventa de un bien inmueble, lo que se plantea en rigor es otra variante de reclamación. Se trata específicamente de un reclamo que tiene que ver con el derecho a la información de los bienes que se adquiere o de los servicios de los que se sirve toda persona, sea en su condición de consumidora o de usuaria. El Tribunal Constitucional decidió la reconversión o adecuación del proceso de habeas data incoado por uno de amparo. En este caso el Colegiado recurrió a dos criterios: tomando en consideración que el juzgador competente es exactamente el mismo en ambos casos y que resultaría inoficioso rehacer un procedimiento cuando existen suficientes elementos para merituar su legitimidad, este Tribunal estima pertinente proceder a la inmediata reconversión del proceso planteado en uno de amparo. Y, como en anteriores ocasiones, fundamenta dicha potestad en el principio *iura novit curia*.³²¹

➤ Exp. N° 01329-2007-PC/TC. Al respecto es necesario señalar que el dejar sin efecto una resolución administrativa no es un tema que deba ventilarse en un proceso de cumplimiento, sin embargo teniendo en consideración que el recurrente es una persona mayor de 75 años, que adolece de enfermedad profesional de silicosis,

³²⁰ STC Exp. N° 2763-2003-AC, del 25 de mayo de 2004, F.J.4-5.

³²¹ STC Exp. N° 1052-2006-PHD, del 14 de marzo de 2006, F.J.2-3-4.

con un 80% de incapacidad permanente total y que percibe un monto que no se condice con los aportes realizados por su empleador, este Colegiado, en aplicación del tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se dispone a convertir en amparo la presente demanda de cumplimiento y resolver el caso concreto a la luz de las disposiciones que regulan el proceso de amparo, ya que, la urgencia de la protección para el recurrente obliga a resolver el caso inmediatamente, esto en atención a los criterios establecidos en el Exp. N° 07873-2006-PC/TC”. No obstante concurrir todos los criterios exigidos por el Tribunal Constitucional para operar la conversión de un proceso constitucional a otro, puede verse con facilidad que, sobre todo, ha primado la consideración de que sea de extrema urgencia la necesidad de pronunciamiento, lo que es plenamente acorde con la característica de tutela urgente propia de la jurisdicción de la libertad.³²²

➤ Finalmente; también hubieron casos como el Exp. N° 349-2004-AA/TC. Donde el Tribunal Constitucional estimó que aun cuando la demanda trata de un asunto vinculado con la libertad de tránsito y, en tal sentido, sería pertinente la vía procesal de habeas corpus antes que la vía procesal del amparo, este Colegiado considera innecesario declarar la existencia de un vicio de procedimiento y disponer una correlativa nulidad de los actuados, pues el resultado del proceso, a tenor de lo que aparece de los autos, no va a variar por una eventual modificación de la vía procesal utilizada.³²³

En el texto de Luis Zavaleta Revilla también se desarrollan algunos ejemplos de cómo ha sido aplicada, en nuestro espectro jurídico, la figura de la conversión procesal. El autor afirma: se invocaba el artículo 9 de la Ley N° 25398 para que el juez se desentendiera de su obligación derivada del principio de dirección judicial del proceso, consistente en adecuar las formas del procesos a sus fines. Así, podemos citar la STC Exp. N° 03327-2004-HC/TC: el derecho supuestamente vulnerado, esto es, el derecho de defensa, es susceptible de protección mediante un proceso de amparo y no mediante un hábeas corpus, habida cuenta de que la vulneración del derecho no incide en la libertad individual del recurrente. Es por ello que, al haber incurrido el demandante en error al nominar el proceso constitucional,

³²² STC Exp. N° 01329-2007-PC, del 1 de junio de 2009, F.J. 2.

³²³ STC Exp. N° 349-2004-AA, del 4 de julio de 2005, F.J. 2.

era de aplicación el artículo 9 de la Ley N° 25398, vigente en el momento de la interposición de la demanda, en virtud del cual debió remitirse la demanda al juez competente en amparo, tal como lo dispuso la recurrida, que anulaba la apelada (STC Exp. N° 03327-2004-HC/TC, F.J. 1).

Otro ejemplo de este actuar desinteresado por la adecuada tutela de los derechos fundamentales de los justiciables corresponde a la STC Exp. N° 01866-2003-AC/TC, que en su fundamento único señala: conforme al artículo 9 de la Ley N° 25398 debe declararse la nulidad de todo lo actuado, a fin de que el juez de primera instancia admita la demanda como si se tratara de un amparo por violación del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y al respeto de la cosa juzgada (...) (STC Exp. N° 01866-2003-AC/TC).

Más tarde, en la STC Exp. N° 03871-2004-PHC/TC, el colegiado cambia de parecer y en virtud del entonces reciente Código Procesal Constitucional señala: que al considerar vulnerados los invocados derechos (debido proceso y trabajo), la demandante debió recurrir al proceso constitucional de amparo, por ser ente el adecuado a su pretensión. Que, sin embargo, en aplicación del artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que recoge lo previsto en el artículo 7 de la Ley N° 23506, este Tribunal debe aplicar la norma adecuada aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, como es el caso de autos, el cual corresponde a un proceso de amparo y no a uno de hábeas corpus, razón por la cual es necesario adecuar la demanda a un proceso de amparo constitucional (STC Exp. N° 03871-2004-PHC/TC F.J. 5).

Es decir, en esta sentencia lo que hace es fundamentar la adecuación procesal de una demanda de hábeas corpus en un amparo en virtud del principio *iura novit curia*, que exige suplir la inadecuada fundamentación jurídica de la pretensión. Otro ejemplo de este actuar del alto Tribunal es el contenido en la STC Exp. N° 00931-2005-PHC/TC: en consecuencia, el proceso constitucional de hábeas corpus en el que se ha planteado la pretensión del recurrente no corresponde ser tramitado en la vía constitucional propuesta; por lo tanto, estando a lo previsto en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237), este Tribunal debe adecuar la pretensión del recurrente a una de amparo constitucional dentro de la cual está contemplada la defensa a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, proceso de

amparo en el cual se pueda emitir un pronunciamiento válido (STC Exp. N° 00931-2005-PHC/TC, F.J. 5).

En otra ocasión, el Tribunal Constitucional además de fundamentar la adecuación procesal en el principio *iura novit curia*, se refirió a los principios de suplencia de queja, dirección judicial del proceso y de economía procesal, sustentando que: (...) a diferencia de los jueces ordinarios, quienes en la mayoría de los casos mantienen una vinculación rígida con la ley, el deber de suplir los actos defectuosos es exigible ineludiblemente en el caso del juez constitucional, debido al deber especial de protección de los derechos fundamentales que informa los procesos constitucionales.

Esta práctica ha quedado instaurada en la jurisprudencia del Colegiado Constitucional, en la medida en que para fundamentar la adecuación procesal ha hecho referencia, principalmente, a los principios *iura novit curia* y de suplencia de queja, respaldando (aunque en segundo plano) esta argumentación con la invocación de los principios de dirección judicial del proceso, economía procesal, elasticidad y *pro actione*.³²⁴

1.6. La suplencia de la deficiencia procesal una propuesta epistémica de estructuración.

El origen de la suplencia de la deficiencia procesal está precedido por la suplencia de la queja deficiente de origen y vigencia mexicana. Lo que no significa que entre sus facultades, haya un nivel de correspondencia que sentencie una estructura idéntica entre ambas. Y como ya lo hemos apuntado en alguna parte de este capítulo, existen marcadas diferencias entre uno y otro, que nos permiten hablar de una, sin que exista el riesgo de que se piense que se hace referencia a la otra. A pesar de que el Tribunal Constitucional, indistintamente, la ha llamado principio de suplencia de queja.^{325 & 326} O, en algunas otras oportunidades, principio de suplencia de queja deficiente^{327 & 328}, e incluso, y esto correctamente, como principio de suplencia de las deficiencias procesales.³²⁹

³²⁴ L. ZAVALA REVILLA, “Criterios para la conversión de un proceso constitucional...,” cit., p.15.

³²⁵ STC Exp. N°. 0461-1997-AA, del 2 de septiembre de 1999, F.J. 2.

³²⁶ STC Exp. N°. 0141-2002-AA, del 23 de octubre de 2002, F.J. 2.

³²⁷ STC Exp. N°. 0224-2001-AC, del 18 de octubre de 2001, F.J. 2.

³²⁸ STC Exp. N°. 2284-2002-AA, del 9 de diciembre de 2002, F.J. 1.

³²⁹ STC Exp. N°. 0024-2005-Q, del 28 de febrero de 2005, F.J. 4.

La suplencia de la deficiencia procesal es un principio que forma parte del proceso constitucional, y que tiene su origen legal en el artículo 7 de la Ley N° 23506 (Ley de Hábeas Corpus y Amparo) publicado el 08 de diciembre de 1982 y cuyo texto es el siguiente: *“El juez deberá suplir las deficiencias procesales en que incurra la parte reclamante, bajo responsabilidad. Igualmente dará preferencia en la tramitación a las acciones de garantía”*. Posteriormente éste primer criterio legal es complementado por el Artículo 9 de la Ley N° 25398 (Ley que complementa las disposiciones de la Ley N° 23506 en materia de Hábeas Corpus y Amparo) publica el 06 de febrero de 1992 y cuyo texto es el siguiente: *“Si el actor incurre en error al nominar la garantía constitucional (acción de hábeas corpus o acción de amparo) que de conformidad con el artículo 295 de la constitución Política del Perú, quiere ejercer, el juez ante quien ha sido presentada se inhibirá de su conocimiento y la remitirá de inmediato al competente, bajo responsabilidad, para los efectos de la sustanciación y resolución correspondientes”*. En la actualidad la doctrina y la jurisprudencia han convenido en establecer que la vigencia de la suplencia de la deficiencia procesal está implícita en la Ley N° 28237 del 07 de mayo del 2004 (Código Procesal Constitucional); nosotros hemos tratado de ser más precisos y creemos que su validez se sustenta en los artículos II, III y VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

La imagen que proponemos sobre las facultades, el funcionamiento y la dinámica que sigue la suplencia de la deficiencia procesal, implica dos cosas: la primera es que por error, omisión o ignorancia se exige la protección o reivindicación de un derecho que según se puede colegir de los fundamentos de hecho no es el correcto. Por lo que el juez constitucional estaría en la capacidad de corregir el petitorio. Lo que sucede es que mientras el iura novit curia atiende los errores u omisiones que se suscitan dentro de los fundamentos de derecho, la suplencia de la deficiencia procesal procurará restablecer el verdadero horizonte del petitorio. Esto es importante, porque no sólo se garantiza una pretensión coherente, sino que también, la lucidez del derecho exigido. “Si la finalidad de los procesos constitucionales es la restitución del derecho vulnerado, es obvio que el requisito de la delimitación del petitorio guarda directa relación con la pretensión (causa petendi) incoada. Esto quiere decir que, solo a través de una clara determinación de la pretensión, el juzgador podrá

pronunciarse sobre el fondo del asunto. Por tanto, si el petitorio consiste en la determinación clara y concreta de lo que se pide al órgano constitucional,³³⁰ esta lucidez jurídica debe ir acorde con los fundamentos de hecho y de derecho. La segunda, está relacionada con la capacidad que tiene la suplencia de la deficiencia procesal para poder convertir un proceso constitucional en otro, cuando del análisis relacional de los fundamentos fácticos con los fundamentos jurídicos y el petitorio resulta que la garantía constitucional a la cual acudió el demandante se torna incompetente para la defensa del derecho que resulta siendo ciertamente vulnerado. La reconversión procesal, dice la jurisprudencia, sólo actúa a nivel de los procesos constitucionales de la libertad, sin embargo, nosotros creemos que ésta facultad, que es propia de la suplencia de la deficiencia procesal, puede ser aplicada a todas las garantías constitucionales, la razón es que, la defensa de la supremacía de la Constitución que implica velar por el orden legal, la competencia funcional de las entidades públicas, el valor institucional y el fortalecimiento de la imagen estructural del Estado y la democracia; son tan importantes como garantizar la misma vigencia efectiva de los derechos fundamentales que avala el inherente valor de las personas y su dignidad. Cuando la doctrina o la jurisprudencia, intenta demostrar, que la conversión procesal sólo actúa a nivel de los procesos constitucionales de la libertad, siempre apela al parecido que existe entre los jueces y los órganos (poder judicial o Tribunal Constitucional, o ambas) encargados de tutelar los derechos, que son propios de este tipo de procesos. Para nosotros, esta aparente identidad a la que se aferran los defensores de esta teoría, no demuestra otra cosa más que el estrechamiento figurativo de lo que realmente importa en un proceso constitucional. Porque en el fondo, qué tanto puede importar la denominación que reciba el juez, si en esencia todos son jueces que protegen derechos constitucionales. Hasta que punto será importante que un proceso constitucional se desarrolle en salas del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, cuando lo substancial, es que el derecho vulnerado esté siendo atendido por la vía que le es idónea. Es decir, el poder judicial podría, en virtud de subsanar la competencia procesal, transferir un proceso al Tribunal Constitucional y viceversa. Velar por los fines del proceso constitucionales nos parece una cuestión

³³⁰ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo I...*, cit., p. 800.

más importante que cualquier delirio exculpatorio del rigorismo procesal de los jueces y miembros del Tribunal Constitucional. La conversión procesal, es más bien una capacidad extraordinaria que hace que la suplencia de la deficiencia procesal pretenda, precisamente, “que la cultura de la defensa del ritual sea dejada de lado y, en sustitución de ella, se consolide la del juez de los derechos fundamentales; esto es, que por encima de las formas, se dispense una tutela efectiva y eficaz de los derechos constitucionales.”³³¹

La jurisprudencia y los estudiosos del derecho han tenido a bien considerar que la suplencia de la deficiencia procesal junto con las facultades que acabamos de precisar, pueden ser utilizados a lo largo de todo el proceso. Nosotros coincidimos con tal criterio, pero creemos que si la suplencia de la deficiencia procesal es utilizada cuando se interpone la demanda en primera instancia, el beneficio sería sustancial, no sólo porque tendríamos un proceso “sano” desde el inicio, sino porque la protección o reparación del derecho ciertamente vulnerado estaría más cerca de ser concretizado. Por eso Norberto Bobbio decía; hoy, los tiempos no son de discutir la naturaleza y fundamentos de los derechos humanos, sino el de cómo protegerlos.

Otra cosa que es bastante importante aclarar, es aquella relacionada a los fundamentos fácticos y a la condición especial que las envuelve, exentándola de todo intento que busque la alteración o modificación de su contenido. Es justamente la imparcialidad del juez y la verdad de lo acontecido, lo que ciertamente, otorga el sustento para invocar la protección de un derecho que se ha visto vulnerado. Entonces, por medio de la suplencia de la deficiencia procesal los fundamentos fácticos no pueden ser alterados, porque la narración de los hechos nos permite conocer las razones que motivaron el acceso a la justicia en busca de la restitución de las cosas al estado anterior a la agresión del derecho constitucional, así como de impedir la concreción de la amenaza cierta, real e inminente del derecho que se pretende garantizar. Modificar los hechos, implicaría crear una nueva historia sustentada en los deseos y la imaginación del juez y no en lo realmente acontecido.

En el mundo del derecho procesal constitucional se discute sobre cuáles serían las verdaderas condiciones de la suplencia de la deficiencia procesal. A raíz de tal cuestionamiento, se han señalado una serie de características que han sido

³³¹ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.724.

desarrolladas bajo distintos criterios. Para Edgar Carpio se trata de un principio cuya aplicación, (...) sólo puede realizarse en favor del afectado e, incluso, de un tercero que resultó perjudicado con el acto reclamado. Asimismo, se trata de una atribución que debe realizarla el juez con carácter obligatorio y no de modo facultativo.³³² Mientras que Carlos Mesía haciendo esta vez referencia a Juventino Castro, dice que es una institución procesal constitucional de carácter proteccionista y antiformalista que integra las omisiones parciales o totales de la demanda de amparo presentada por el quejoso, siempre a favor y nunca en perjuicio de este.³³³ Entonces, podemos concluir que la suplencia de la deficiencia procesal es un principio del proceso constitucional de carácter proteccionista porque sólo favorece al quejoso quedando, en consecuencia, vedado el uso de esta prerrogativa en beneficio del demandado.³³⁴ Además éste sólo podría aplicarse para expedir una sentencia estimatoria, después de advertirse la lesión de un derecho constitucional. Al contrario, si la suplencia resulta inútil, fútil o que irá de conducir a la expedición de un fallo adverso, el juez del amparo no debería aplicar el principio de la suplencia de la queja deficiente.³³⁵ Se dice también que la suplencia de la deficiencia procesal es de carácter obligatorio, por lo que el juez, sea de la instancia que fuera, tiene el poder-deber de hacer uso de éste principio cuando las condiciones jurídicas así lo ameriten. Pues lo reiteramos, es una obligación más no una facultad del juez la de suplir las deficiencia procesales del actor.³³⁶ Pero también se dice que es antiformalista, ésta condición se explica en la medida en que son más importantes los fines del proceso constitucional que la observancia del excesivo formalismo procesal. En efecto, los fines que informan a los procesos constitucionales, no deben estar supeditados por una serie de ritualismos que a la postre, los afecten con dilaciones innecesarias.³³⁷ Contribuye con este criterio el principio de elasticidad o adecuación de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales, se trata aquí de que las exigencias que impone el Código no deben, bajo ningún punto de vista ni criterio interpretativo, trastocar los fines mismos

³³² *Ibíd.*, p. 706.

³³³ C. MESÍA RAMÍREZ, *Exégesis del Código Procesal Constitucional. Tomo I...*, cit., p. 94.

³³⁴ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II...*, cit., p. 19.

³³⁵ STC Exp. N° 0691-2001-HC, del 9 de julio de 2002, F.J. 4.

³³⁶ G. ETO CRUZ, *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II...*, cit., p. 19.

³³⁷ STC Exp. N° 05761-2009-PHC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 25.

de los procesos constitucionales.³³⁸ Por lo que la forma en términos procesales, siempre será menos importante que el derecho fundamental que subyace al proceso y que merece ser reivindicado. Por lo tanto, al reconocer una posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico, no resulta razonable que en todos los casos, las formas estén por encima del derecho sustancial, desconociendo el valor de lo real en un proceso. El derecho procesal es, o quiere ser el cauce mediante el cual se brinda una adecuada cautela de los derechos subjetivos, por ello, al reconocerse legislativamente las facultades del juez constitucional, para (...) subsanar las deficiencias procesales, se trata de evitar que el ejercicio de una real y efectiva tutela judicial en el marco de un proceso justo sea dejado de lado, por meros formalismos irrazonables.³³⁹ En ese sentido, el Tribunal Constitucional, basándose en la premisa de que el proceso surge de la necesidad de brindar tutela jurisdiccional y judicial a las lesiones o amenazas de derecho y que justifique su razón de ser en el cumplimiento de este fin último, considera importante y, más aún, que resulta de un deber del juez constitucional promover el reconocimiento tutelar de aquellas situaciones que, estando presentes, pero incorrectamente planteadas, ameriten su intervención como real guardián de la Constitución y, por ende, protector de los derechos fundamentales reconocidos en ella.³⁴⁰ Otra de sus características, es que a la suplencia de la deficiencia procesal se le considera implícita en el Código Procesal Constitucional, y como hemos visto a lo largo de este trabajo, van a ser los demás principios del proceso constitucional los que le han permitido al Tribunal Constitucional sustentar tal posición.

Entonces; ante la necesidad de subsanar el petitorio, o la obligación de convertir un proceso constitucional en otro; es que los principios regulados en los artículos III y VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, haciendo uso individual de sus facultades, intentan sin éxito, cumplir con tales propósitos. Como no resultan siendo suficientes sus propias capacidades, para ejecutar y concretizar ninguna de las necesidades antes descritas, es que entre estos principios se activa una inherente capacidad para relacionarse, complementarse y constituirse como un argumento que permite justificar las capacidades del otro. Esta relación y éste

³³⁸ STC Exp. N° 05761-2009-PHC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 23.

³³⁹ STC Exp N° 0569-2003-AC, de 05 de abril de 2004, F.J. 14.

³⁴⁰ *Ibidem*, F.J. 15.

dinamismo es tan estrecho que terminan finalmente por impulsar, respaldar y contribuir con el pleno despliegue de las facultades de la suplencia de la deficiencia procesal, que vendría a ser el principio adecuado para atender esas necesidades jurídicas propias del derecho procesal constitucional. Lo interesante en este juego de relaciones y contribuciones, es que en ningún momento, estos principios, abandonan su naturaleza individual y menos aun sus propias facultades, para convertirse en un principio que es distinto pero que contiene a todos los otros principios a la vez. Todos, en el fondo, se comportan como simples colaboradores en la noble tarea de apostar a favor de la suplencia de la deficiencia procesal. Por lo que en ciertos momentos, estos principios pueden coger fundamental vigor argumentativo, así como desaparecer totalmente, cuando sus servicios no sean jurídicamente necesarios. Pero no por eso su influencia y su valor dejan de ser ciertas. No olvidemos que “los principios procesales son principios jurídicos normativos en el sentido que están plenamente vigentes y deben ser invocados y aplicados en todos los casos concretos, desconocer la normatividad de los principios procesales equivale a quitar obligatoriedad a su aplicación.”³⁴¹ Es por eso que “sirven para describir y sustentar la esencia del proceso, y además poner de manifiesto el sistema procesal por el que el legislador ha optado”.³⁴² Y qué duda cabe que la esencia de todo proceso es intentar llegar a la solución justa de las controversias.

Finalmente; se desprende de la misma naturaleza de la suplencia de la deficiencia procesal y del juicioso análisis que se hace a los alcances y límites que lo acompañan, y que terminan por redimensionar no sólo su hechura, sino su verdadero valor dentro del espectro jurídico del derecho procesal constitucional. Por lo que ciertos elementos van a constituir los pilares fundamentales que sustenten y garanticen la vigencia, la coherencia y el valor jurídico que implica tener activo un principio como el de la suplencia de la deficiencia procesal. El primero de ellos es garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, que tiene carácter de derecho fundamental, derecho que como lo ha anotado la doctrina nacional, es de carácter complejo, pues contiene otros derecho igualmente fundamentales como el derecho de acción, de contradicción y el debido proceso (...) hay quienes, como Mauro Capelletti y Bryant

³⁴¹ L. CASTILLO CÓRDOVA, *Comentarios al Código Procesal Constitucional...*, cit., p. 42.

³⁴² J. MONROY GÁLVEZ, *Introducción al Proceso Civil. Tomo I...*, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1996, p. 80.

Garth, sostienen que el acceso a la justicia es el más importante de los derechos humanos, cuando nos dicen: “claro está que el reconocimiento de la importancia del acceso afectivo a la justicia no tendría sentido si no se proporcionasen los medios legales para que los derechos puedan ser ejercidos prácticamente”. De ahí (...) que un moderno e igualitario sistema legal tenga por objeto garantizar y no sólo proclamar el derecho de todos.³⁴³ Lo que la suplencia de la deficiencia procesal hace en el fondo, es subsanar algunas excusas procesales, que vienen siendo utilizadas para reducir el acceso a la justicia. Otro de los elementos, y quizá el más importante, es garantizar los fines del proceso constitucional: la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Este argumento se ha tratado de explicar de diferentes maneras. Dice el Tribunal Constitucional que ha de resolver sus causas sin perder de vista los fines que orientan su actividad (...) que en esencia son: la defensa de la Constitución encaminada a la afirmación de la vigencia de un Estado de Derecho y velar por la tutela efectiva de los derechos fundamentales, por medio del cual le es implícita la labor de ejercer una actuación positiva de aquellos.³⁴⁴ También ha dicho que a diferencia de los jueces ordinarios, quienes en la mayoría de los casos mantienen una vinculación rígida con la ley, a los jueces constitucionales les es exigible suplir los actos procesales defectuosos, precisamente debido al deber especial de protección de los derechos fundamentales.³⁴⁵ En cambio, para Edgar Carpio la suplencia de las deficiencias procesales en la regulación de los procesos constitucionales, constituyen una importante vía para alertar que, en el estado constitucional de derecho, el proceso y sus instituciones no se justifican por sí mismos, sino en la consecución y protección de unos principios y derechos que lo trascienden.³⁴⁶ Para nosotros, los fines del proceso constitucional, representan el núcleo esencial de toda actividad jurídica en el campo del derecho procesal constitucional. Es la supremacía de la Constitución y lo que ello implique, una cuestión más trascendente que cualquier concepto rígido de la forma; por lo que defender su valor como norma normarum confirma, y en otras situaciones, restablece las jerarquías legales. Pero además, nuestra Constitución Política evidencia la estructura del Estado, la organización de las instituciones públicas

³⁴³ V. TICONA POSTIGO, *El derecho al debido proceso en el proceso civil. Doctrina, Legislación, jurisprudencia*. Grijley, Lima, 2009, pp. 21- 22.

³⁴⁴ STC Exp N° 05761-2009-HC, del 13 de mayo de 2010, F.J. 6.

³⁴⁵ STC Exp. N° 03016-2007-PHC, del 31 de octubre de 2008, F.J. 3.

³⁴⁶ E. CARPIO MARCOS, “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo...,” cit., p.722.

(sus funciones, competencias y finalidades), el manejo de los recursos estatales, la formulación y promulgación de las leyes, su relación con las garantías constitucionales, la observancia de cuestiones procesales de fundamental importancia, y una serie de temas generales que no son sólo de interés personal, sino de alcance social. Pero en el artículo 1 de la Constitución también se señala que la “*defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado*”; bajo esa premisa general, la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, se consolida, dentro de las garantías constitucionales, como el fin último de toda actividad jurídica. Por lo tanto, la tarea que realiza el principio de suplencia de la deficiencia procesal al procurar la defensa del derecho fundamental realmente vulnerado, tendría como propósito, generar en el proceso constitucional un mecanismo que permita, sobre todas las cosas, priorizar la protección de aquel contenido jurídico que se muestra como inherente a la naturaleza humana, por medio de un proceso que genere las suficientes garantías para que la persona y su dignidad que son lo jurídicamente sustancial encuentren la plena seguridad de que sus derechos vulnerados serán atendido y reivindicados, si así se juzga conveniente de la pretensión. Según De la Oliva Andrés en Luis Castillo Córdova; si se desea impartir justicia en forma justa, es decir, ser ya justos en el insoslayable camino hacia el hacer justicia final, es necesario que todo proceso se configure intrínsecamente en la norma jurídica haciendo efectivos algunos postulados elementales de justicia y es preciso además, que esos postulados sean después respetados en el devenir de las realidades procesales concretas.³⁴⁷ Por eso es tan importante consolidar la presencia de la suplencia de la deficiencia procesal en nuestro ordenamiento jurídico. Y es que en el derecho constitucional y especialmente en la sustentación de las acciones de garantía, aquella suerte de procedimiento estrictamente privado en que el juez no se responsabiliza por las deficiencias procesales, no tiene lugar.³⁴⁸

³⁴⁷ L. CASTILLO CÓRDOVA, *Comentarios al Código Procesal Constitucional...*, cit., pp. 41-42.

³⁴⁸ A. BOREA ODRÍA, *Evolución de las garantías constitucionales*, Grijley, Lima, 1996, p. 105.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Que la suplencia de la deficiencia procesal es un principio del derecho procesal constitucional. Su vigencia es implícita y está fundamentada en los artículos, II, III y VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. La esencia jurídica de sus facultades le permite al juez constitucional corregir el petitorio cuando por error, omisión o ignorancia, el demandante reclama o exige, la protección o reivindicación de un derecho deficiente o erróneamente invocado, en vez de otro. Así mismo, el magistrado constitucional tiene la potestad de convertir un proceso constitucional en otro, remitiendo inmediatamente la demanda al juez que corresponda, cuando la incompetencia jurídica lo amerite. La suplencia de la deficiencia procesal es susceptible de ser aplicada a lo largo de todo el proceso, pero de preferencia en la demanda y siempre a favor del quejoso. Encuentra su límite en los fundamentos de hecho, y su viabilidad se sustenta en el hecho de que las cuestiones de fondo y el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva son siempre más importantes que las formalidades que marca el derecho procesal, y más aún, en éste tipo de procesos, donde lo que se busca proteger y reivindicar es la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Es susceptible de ser aplicado sobre los actos defectuosos e inválidos, más no sobre los actos nulos. Dentro de sus características principales es que es proteccionista, antiformalista y de obligatorio cumplimiento.

SEGUNDA: La reconversión procesal, dice la jurisprudencia, sólo actúa a nivel de los procesos constitucionales de la libertad, sin embargo; nosotros creemos que ésta facultad, que es propia de la suplencia de la deficiencia procesal, puede ser aplicada a todas las garantías constitucionales, la razón es que, la defensa de la supremacía de la Constitución que implica velar por el orden legal, la competencia funcional de las entidades públicas, el valor institucional y el fortalecimiento de la imagen estructural del Estado y la democracia; son tan importantes como garantizar la misma vigencia efectiva de los derechos fundamentales que avala el inherente valor de las personas y su dignidad. Cuando la doctrina o la jurisprudencia, intenta demostrar, que la conversión procesal sólo actúa a nivel de los procesos constitucionales de la libertad,

siempre apela al parecido que existe entre los jueces y los órganos (poder judicial o Tribunal Constitucional, o ambas) encargados de tutelar los derechos, que son propios de este tipo de procesos. Para nosotros, esta aparente identidad a la que se aferran los defensores de esta teoría, no demuestra otra cosa más que el estrechamiento figurativo de lo que realmente importa en un proceso constitucional. Porque en el fondo, qué tanto puede importar la denominación que reciba el juez, si en esencia todos son jueces que protegen derechos constitucionales. Hasta que punto será importante que un proceso constitucional se desarrolle en salas del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, cuando lo substancial, es que el derecho vulnerado esté siendo atendido por la vía que le es idónea. Es decir, el poder judicial podría, en virtud de subsanar la competencia procesal, transferir un proceso al Tribunal Constitucional y viceversa. Velar por los fines del proceso constitucionales nos parece una cuestión más importante que cualquier delirio exculpatorio del rigorismo procesal de los jueces y miembros del Tribunal Constitucional.

TERCERA: Que la suplencia de la queja deficiente es de origen y vigencia mexicana. Además, es un principio de orden constitucional cuya facultad es corregir el derecho que por error u omisión fue deficientemente invocado; actúa a nivel de toda la pretensión, con excepción de los fundamentos de hecho. Su estructura es el resultado de haber absorbido a otros “sub-principios” (suplencia de error y suplencia de la queja en sentido estricto y suplencia de los agravios formulados en los recursos) que convenientemente han fortalecido sus capacidades. Los casos que son objeto de su competencia están favorablemente regulados en el artículo 79 de la Ley de Amparo mexicana. La suplencia de la queja deficiente tiene la facultad de actuar a lo largo de todo el proceso, y su carácter proteccionista no se reduce solamente a que actúa siempre a favor del quejoso, sino que, en materia penal también puede ser interpuesta a favor del inculcado o sentenciado. Tiene como límite a la improcedencia, la misma que está regulada en el artículo 61 de la Ley de Amparo antes mencionada.

CUARTA: Que el principio *iura novit curia* se define como el poder-deber que tiene el juez constitucional de subsanar el derecho que deficientemente fue invocado en los fundamentos de derecho. El límite de éste principio, es su incapacidad para actuar a

nivel de los fundamentos fácticos, más no en la posibilidad de que en el ejercicio de sus capacidades pueda vulnerar el principio de congruencia o el derecho constitucional de defensa.

QUINTA: Que la suplencia de la queja deficiente, el principio de iura novit curia y la suplencia de la deficiencia procesal, son principios diferentes por su origen, connotación jurídica, facultades, características y niveles de acción. Por lo que el uso indiferenciado que se hace sobre ellos no tiene sustento lógico ni jurídico. Por un lado, la suplencia de la queja deficiente actúa a nivel de toda la pretensión, a lo largo de todo el proceso y en varias materias; su objeto es la de corregir los errores u omisiones que se advierta en la cita de algún precepto constitucional o legal que se estime violado. Por otro lado, la suplencia de la deficiencia procesal, corrige a nivel de petitorio, los errores u omisiones cometidos por el quejoso al momento de exigir la reivindicación de un derecho ciertamente vulnerado. Así mismo, le permite al juez constitucional; convertir un proceso constitucional en otro, cuando la reivindicación del derecho vulnerado sea propia de otra de las garantías constitucionales. Y finalmente; el iura novit curia actúa a nivel de los fundamentos de jurídicos, corrigiendo el derecho omitido o deficientemente invocado.

La suplencia de la deficiencia procesal y el iura novit curia, además de encontrar sus límites en la imposibilidad de modificar los fundamentos fácticos, sus vínculos se estrechan aun más, porque en el ejercicio jurídico de sus facultades deben existir niveles de relación y coherencia, que permitan acreditar que los fundamentos fácticos, el petitorio y la vía constitucional escogida, estén sujetos a un nivel de conexión y correspondencia legítimos.

SEXTA: Que la relación que subyace a la suplencia de la deficiencia procesal con los otros principios del proceso constitucional, es más una camaradería implícita, una colaboración recíproca que terminan por consolidar la fuerza de sus argumentos jurídicos. Lo que sucede es que ante un problema de orden legal, los principios empiezan a desplegar sus facultades con el objeto de sanar o solucionar el conflicto jurídico que se esté suscitando, cuando estos se ven incapaces individualmente de enmendar, rectificar o corregir tal cuestión es que empiezan a operar en conjunto,

generando un nivel de relación y cooperación tan estrecha que entre ellos se comportan como fundamento o soporte jurídico del otro, pero sin abandonar su condición particular o su individualidad. Entonces; y siguiendo la misma figura, cuando se necesite corregir el petitorio o procurar una conversión procesal entre las garantías constitucionales, será la suplencia de la deficiencia procesal la que asuma tal tarea con el respaldo de los demás principios del proceso constitucional.

SÉPTIMA: La determinación clara de los vínculos y diferencias que gradúan la relación de la suplencia de la deficiencia procesal con la suplencia de la queja deficiente, el iura novit curia y los otros principios del proceso constitucional, nos ha permitido construir; un conocimiento cierto respecto a sus capacidades jurídicas.

Esta correcta y nueva forma de entender la estructura jurídica de los principios antes mencionados, genera la posibilidad de ponerlos en práctica dentro del proceso constitucional o legal, según corresponda, sin mayores errores por exceso o defecto de su uso en general.

Serán los que acuden al fuero judicial, en busca de la reivindicación de algún derecho fundamental o la defensa de la supremacía del contenido constitucional; los beneficiados con la determinación del concepto, alcances y límites de la suplencia de la deficiencia procesal.

El uso correcto de la suplencia de la deficiencia procesal, permitirá alcanzar causas resueltas con mayor prontitud. Así mismo se procurará favorecer las cuestiones sustanciales antes que las formas procesales que permitan garantizar el debido proceso y la tutela efectiva de los derechos.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

- ABAD YUPANQUI, S., “El Proceso Constitucional de Amparo en el Perú: Un análisis desde la Teoría General del Proceso”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*. N° 85, México, 1996.
- ABAD YUPANQUI, S., *El Proceso Constitucional de Amparo*, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, 2ª ed.
- BOREA ODRÍA, A., *Evolución de las Garantías Constitucionales*. Fe de Erratas, Lima, 1999.
- BOREA ODRÍA, A., *Evolución de las garantías constitucionales*, Grijley, Lima, 1996.
- BURGOA ORIHUELA, I., *El Juicio de Amparo*. Porrúa, México, 1999, 35ª ed.
- CARRIÓN LUGO, J., *Tratado de derecho procesal civil. Volumen primero. Teoría General del Proceso*, Grijley, Lima, 2000.
- CARPIO MARCOS, E., “La Suplencia de la Queja Deficiente en el Amparo: Un Análisis Comparativo”, en S. CASTAÑEDA OTSU (Coord.), *Derecho Procesal Constitucional. Tomo II*, Jurista Editores, Lima, 2004.
- CASTILLO CÓRDOVA, L., *Comentarios al Código Procesal Constitucional. Tomo I*, Palestra, Lima, 2006, 2ª ed.
- CASTRO Y CASTRO, J., *Justicia, Legalidad y la Suplencia de la Queja*, Porrúa, México, 2003.
- DIEZ-PICAZO, L., “Dificultades prácticas y significado constitucional del Recurso de Amparo”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, N° 40, Madrid, 1994.
- ETO CRUZ, G., *El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano*, Adrus, Lima, 2011.
- ETO CRUZ, E., *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo I*, Jurista Editores, Lima, 2004.
- ETO CRUZ, E., *Tratado del Proceso Constitucional de Amparo. Tomo II*, Gaceta Jurídica, Lima, 2013.

- ESPINOSA-SALDAÑA, E., “Comentarios al Artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”, en J. TUPAYACHI SOTOMAYOR (Coord.), *Código Procesal Comentado. Homenaje Domingo García Belaunde*, Adrus, Arequipa, 2009.
- EZQUIAGA GANUZAS, F., *Iura Novit Curia y Aplicación Judicial del Derecho*, Lex nova, Valladolid, 2000.
- FIX-ZAMUDIO, H., *El Juicio de Amparo*, Porrúa, México, 1963.
- GARCÍA CHÁVARRI, A., “La Transformación de un Proceso Constitucional en Otro. Anotaciones sobre la Figura Procesal Constitucional de la Reconversión.” en: J. SOSA SACIO (Coord.), *Compendio de Instituciones Procesales creadas por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Gaceta Jurídica, Lima, 2012.
- GARCÍA TOMA, V., “Comentarios al artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional,” en J. TUPAYACHI SOTOMAYOR (coord.). *Código Procesal Comentado. Homenaje a Domingo García Belaunde*, Adrus, Arequipa, 2009.
- GIMENO SENDRA, J., *Fundamentos del derecho procesal (jurisdicción, acción y proceso)*, Civitas, Madrid, 1981.
- HILDEBRANDT CHAVÉZ, C., “El derecho y el Revés”, en *Una piedra en el zapato (columnas de opinión 2006-2011)*, Tierra Nueva, Perú, 2011. p. 258.
- HINOSTROZA MINGUES, A., *Comentarios Código Procesal Civil, Tomo I*, Gaceta jurídica, Lima, 2003.
- MESÍA RAMÍREZ, C., *Exégesis del Código Procesal Constitucional. Tomo I*, Gaceta Jurídica, Lima, 2013, 4ª ed.
- MESÍA RAMÍREZ, C., *Los Recursos Procesales Constitucionales. Diálogo con la Jurisprudencia*, Gaceta Jurídica, Lima, 2009.
- MONROY GÁLVEZ, J., (1996). *Introducción al proceso civil. Tomo I*, Temis, Bogotá, 1996.
- MONROY GÁLVEZ, J., *Teoría General del Proceso*, Palestra, Lima, 2007.
- MONROY GÁLVEZ, J., Los Principios Procesales en el Código Procesal Civil de 1992. en J. MONROY GÁLVEZ, *La Formación del Proceso Civil Peruano. Escritos reunidos*. Comunidad, Lima, 2003.

- MORALES BECERRA, A., *Las Leyes de Amparo en el Siglo XIX. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*. [Documento en formato PDF]. Recuperado el 20 de agosto de 2015. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/195/ntj/ntj10.pdf>
- NORIEGA CANTÚ, A., *Lecciones de Amparo. Tomo II*, Porrúa, México, 1997.
- ORTEGA ZURITA, H., “La Suplencia de la Deficiencia de la Queja”, en *La Suplencia de la Deficiencia de la Queja en el Juicio de Amparo. 1ra Reimpresión*, Cárdenas, México, 1995.
- PÉREZ GORDO, A., *Los actos defectuosos y su subsanación en el proceso constitucional*, Librería Bosch, Barcelona, 1989.
- PEYRANO, J., *El Proceso Civil*, Astrea, Buenos Aires, 1978.
- SANTO AYALA, G., “La Suplencia de la deficiencia de la Queja en materia de Amparo”, en *Anales de Jurisprudencia. Tomo 141*, México, 1970.
- SENISSE ANAMPA, C., “El principio de suplencia de queja deficiente”, *Gaceta Procesal Constitucional*. N° 21, Lima, 2013.
- TICONA POSTIGO, V., *El Debido Proceso y la Demanda Civil. Tomo I*, Rodhas, Lima, 1999.
- TICONA POSTIGO, V., *El derecho al debido proceso en el proceso civil. Doctrina, Legislación, jurisprudencia*. Grijley, Lima, 2009.
- VILA ORMEÑO, C., “Delimitando el Contenido de la Cosa Juzgada Constitucional”, en J. SOSA SACIO (Coord.), *Compendio de Instituciones Procesales creadas por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Gaceta Jurídica, Lima, 2012.
- VILELA CARBAJAL, K., “Impacto de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el Derecho Procesal”, en J. SOSA SACIO (Coord.) *el Tribunal Constitucional Reescribe el Derecho. Estudios sobre la incidencia de la Jurisprudencia Constitucional en las diferentes especialidades del derecho*, Gaceta Jurídica, Lima, 2011.
- ZAVALITA REVILLA, J., “Criterios para la conversión de un proceso constitucional de libertad en otro”, *Gaceta Procesal Constitucional*. N° 15, Lima, 2013.

LEYES - INTERNET:

- Artículo 7 de Ley N° 23506 (Ley de Hábeas Corpus y Amparo) publicado el 08 de diciembre de 1982
- Artículo 9 de la Ley N° 25398 (Ley que complementa las disposiciones de la Ley N° 23506 en materia de Hábeas Corpus y Amparo) publica el 06 de febrero de 1992.
- Artículo 1 de la Constitución Política del Perú de 1993.
- Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 28237 (Código Procesal Constitucional) del 07 de mayo del 2004, Jurista editores de julio del 2016.
- Artículo VII del Título Preliminar. Decreto Legislativo N° 768 (Código Procesal Civil) del 04 de marzo de 1992. & Resolución Ministerial N° 010-93-Jus. del 23 de abril de 1993, jurista editores de julio 2016.
- Artículo VII de su Título Preliminar. Decreto Legislativo N° 295 (Código Civil) del 25 de Julio de 1984, Jurista editores de julio del 2016.
- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 sujeta a su última reforma del 29 de enero de 2016 [Documento en formato PDF]. Recuperado el 10 de enero de 2016.
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>
- Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, (Lunes 15 de febrero de 1951). [Documento en formato PDF]. Recuperado el 7 de marzo del 2015.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
- Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. (Viernes 2 de noviembre de 1962). [Documento en formato PDF]. Recuperado el 7 de marzo del 2015.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
- Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. (Miércoles 20 de marzo de 1974). [Documento en formato PDF]. Recuperado el 7 de marzo del 2015.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

- Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. (Lunes 7 de abril de 1986). [Documento en formato PDF]. Recuperado el 7 de marzo del 2015.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
- Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. (Lunes 6 de junio de 2011). [Documento en formato PDF]. Recuperado el 7 de marzo del 2015.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
- Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2 de abril de 2013 sujeta a su última reforma del 18 de diciembre de 2015. [Documento en formato PDF]. Recuperado el 10 de enero de 2016. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm>
- Columna jurídica. (24 de junio del 2013). El principio de congruencia procesal, mensaje de blog. Recuperado: <http://columnajuridica.blogspot.pe/2013/06/el-principio-de-congruencia-procesal.html>

SETENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

- STC Exp. N° 0278-1993-AA, del 11 de agosto de 1997.
- STC Exp. N° 0611-1997-AA, del 02 de setiembre de 1997.
- STC Exp. N° 00797-1999-AA, del 11 de mayo de 2000.
- STC Exp. N°. 0461-1997-AA, del 2 de septiembre de 1999.
- STC Exp. N° 00797-1999-AA, del 11 de mayo de 2000.
- STC Exp. N° 0509-2000-AC, del 24 de abril de 2001.
- STC Exp. N° 790-2000-AC, del 22 del enero de 2001.
- STC Exp. N° 481-2000-AA, del 6 de diciembre de 2001.
- STC Exp. N° 933-2000-AA, del 12 de junio del 2002.
- STC Exp. N° 509-2000-AC, de 24 de abril de 2001.
- STC. Exp. N°. 0790-2000-AC, del 22 de enero de 2001.
- STC Exp. N° 001-2001-AI, Caso Encuesta a Boca de Urna.
- STC Exp. N° 0905-2001-AA, del 14 de agosto de 2002.
- STC Exp. N° 1426-2001, El Peruano, separata jurisprudencia, el 17 de setiembre del 2001.
- STC Exp. N°0905-2001-AA, del 14 de agosto del 2002.
- STC Exp. N°. 0224-2001-AC, del 18 de octubre de 2001.
- STC Exp. N° 0691-2001-HC, del 9 de julio de 2002.
- STC Exp. N° 051-2001-HC, del 31 de enero de 2001.
- STC Exp. N° 0141-2002-AA, del 23 de octubre de 2002.
- STC Exp. N°. 2284-2002-AA, del 9 de diciembre de 2002.
- STC Exp. N° 1144-2002-AC, del 4 de noviembre de 2002.
- STC Exp. N° 1120-2002-HC, del 20 de junio de 2002.
- STC. Exp. N°. 1120-2002-HC, del 20 de junio de 2002.
- STC Exp. N° 1231-2002-AA, del 21 junio de 2002.
- STC Exp. N° 1428-2002-HC, del 08 de julio de 2002.
- STC Exp. N° 1941-2002-AA, del 27 de enero de 2003.
- STC Exp. N° 1230-2002-HC, del 20 de junio del 2002.
- STC Exp. N° 0256-2003-HC, del 21 de abril de 2005.
- STC Exp. 0616-2003-AA, del 06 de junio de 2005.

- STC Exp N° 0569-2003-AC, del 05 de abril de 2004.
- STC Exp. N° 2763-2003-AC, del 25 de mayo de 2004.
- STC Exp. N° 2302-2003-AA, del 13 de abril de 2005.
- STC Exp. N° 0509-2003-AC, del 5 de abril de 2004.
- STC Exp. N° 2397-2003-AA del 15 de octubre de 2004.
- STC Exp. N° 2868-2004-AA, del 24 de noviembre de 2004.
- STC Exp. N° 0282-2004-AA, del 29 de octubre de 2004.
- STC Exp. N° 3741-2004-AA, del 14 de noviembre de 2005.
- STC Exp. N° 0048-2004-PI, del 1 de abril de 2005.
- STC Exp. N° 4080-2004-AC, del 28 de enero de 2005.
- STC Exp. N° 349-2004-AA, del 4 de julio de 2005.
- STC Exp. N°. 0024-2005-Q, del 28 de febrero de 2005.
- STC Exp. N° 2286-2005-PA, del 11 de mayo de 2005.
- STC Exp N° 02094-2005-PA, del 10 de mayo de 2005.
- STC Exp. N° 8078-2005-PA del 25 de agosto 2006.
- STC Exp. N° 5854-2005-PA, del 08 de noviembre del 2005.
- STC Exp. N° 0249-2005-PC, del 8 de marzo del 2007.
- STC Exp. N°. 0024-2005-Q, del 28 de febrero de 2005.
- STC Exp. N° 4067-2005-PHC, del 8 de agosto de 2005.
- STC Exp. N° 3997-2005-PC, del 12 de agosto de 2005.
- STC Exp. 2094-2005-AA, del 10 de mayo de 2005.
- STC Exp. N° 1052-2006-PHD, del 14 de marzo de 2006.
- STC Exp. N° 07873-2006-PC, del 23 de octubre de 2006.
- STC Exp. N° 5637-2006-PA, del 12 abril de 2007.
- STC Exp. 0582-2006-AA, del 13 de marzo de 2006.
- STC Exp. N° 5085-2006-PA, del 07 de mayo del 2007.
- STC Exp. 3062-2006-PHC, del 17 de mayo de 2006.
- STC Exp. 6149-2006-AA, del 11 de diciembre de 2006.
- STC Exp. N° 6648-2006-PHC, del 14 de marzo de 2007.
- STC Exp. N° 01329-2007-PC, del 1 de junio de 2009.
- STC Exp. N° 05361- 2007-PC, del 17 de diciembre de 2007.
- STC Exp. N° 03674-2007-AA, del 14 de abril de 2009.

- STC Exp N° 4885-2007-PHD del 18 de agosto de 2008.
- STC Exp. N° 00431-2007-PA, del 27 de marzo de 2010.
- STC Exp. N° 03016-2007-PHC, del 31 de octubre de 2008.
- STC Exp. N° 00250-2008-PHD, del 31 de enero de 2008.
- STC Exp N° 05761-2009-HC, del 13 de mayo de 2010.
- STC Exp. N° 02096-2009-PA, del 08 de julio de 2009.
- STC 15/2000. España.